



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
POLITICAS



**“La ampliación del bien jurídico protegido en el delito de colusión
como garantía del derecho fundamental al agua potable”**

AUTORA:

Bach. Yampufé Espinoza, Lucila Raquel

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADA

ASESOR

Dr. Balcázar Zelada, José María

LAMBAYEQUE, 2021

Primer informe parcial de la Tesis denominada “La ampliación del bien jurídico protegido en el delito de colusión como garantía del derecho fundamental al agua potable”, presentada para optar el TÍTULO DE ABOGADA, por:

Bach. Yampufé Espinoza, Lucila Raquel
AUTORA

Dr. Balcázar Zelada, José María
ASESOR

Aprobada por:

Abog. Martínez Oblitas Carlos Manuel
Presidente

Mag. Cevallos de Barrenechea Carlos Manuel Antenor
Secretario

Abog. Vargas Rodríguez Cesar
Vocal

DEDICATORIA

A mis padres

Flor María y Dante, por su amor y apoyo
brindado en todo momento.

A mi hermano

Alexis Dante, el niño de corazón noble que me
inspira a ser una mejor persona.

En memoria de mi mejor amiga

Diana Isabel, por el entusiasmo con que me
alentaba a cumplir mis sueños.

A mis abuelos

Que con su amor y dulzura me aconsejan y
apoyan incondicionalmente.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios, porque es bueno y maravilloso, por regalarme un día más de vida, por la salud, la familia y cada persona que vive en mi corazón.

A mi familia, cuando creí que estaba sola, ellos siempre estuvieron a mi lado para darme la mano y apoyarme.

A mi mejor amigo, Jesús Effio por celebrar mis logros y brindarme su apoyo en los momentos difíciles.

A todas aquellas personas que llegaron a mi vida, con las que compartí buenos momentos y me enseñaron mucho más de lo que pudieron imaginar.

INDICE

DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTO	iii
INDICE	iv
INDICE DE TABLAS	viii
INDICE DE ILUTRACIONES.....	ix
RESUMEN.....	x
ABSTRACT.....	xi
Capítulo I.....	15
Aspecto metodológico de la investigación.....	15
1.1 El planteamiento del problema de la investigación.....	15
1.2. La formulación del problema de investigación	20
1.3. Sobre la justificación de la investigación	20
1.4. Sobre la importancia de la investigación.....	22
1.5. Los objetivos de la investigación	22
1.5.1. El objetivo general.....	22
1.5.2. Los objetivos específicos.....	22
1.6. La hipótesis de la investigación.....	23
1.7. Las variables de la investigación.....	23
1.7.1. Sobre la variable independiente.....	23

1.7.2. Sobre la variable dependiente.....	23
1.8. Los métodos de la investigación	23
1.8.1. El método exegético jurídico	24
1.8.2. El método sistemático jurídico	24
Capítulo II	26
Teoría de los derechos fundamentales y el agua potable	26
2.1. Algunas referencias históricas	26
2.2. El reconocimiento del carácter fundamental del derecho al agua potable.	29
2.3. La importancia del agua	32
2.3.1. Definición jurídica del agua.	33
2.3.2. Reconocimiento y protección jurídica del agua.	35
2.3.3. El tipo de agua que protege el derecho.....	47
2.3.4. La responsabilidad de garantizar el acceso y disfrute al agua.	63
2.3.5. El Estado como garante de los servicios para los ciudadanos	86
Capítulo III.....	92
La naturaleza jurídica del tipo penal de colusión y la interpretación del bien jurídico protegido.....	92
3.1. Definición de colusión como tipo penal.....	92

3.2. Alcance jurídico del tipo penal del delito de colusión	98
3.3. El interés de protección del tipo penal de colusión	99
3.4. El aspecto patrimonial como justificación para agravar la sanción del tipo penal de colusión.....	103
3.5. El bien jurídico protegido en el delito de colusión.....	107
Capítulo IV	115
Análisis y resultados	115
4.1. Análisis de los resultados:	115
4.1.1. Resultados del análisis jurisdiccional sobre el delito de colusión	116
4.1.2. Resultados de la opinión de operadores jurídicos	125
Capítulo V	138
Contrastación de los resultados	138
5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS	138
5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar doctrinariamente la teoría del derecho fundamental al agua potable”	138
5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Describir dogmáticamente la naturaleza jurídica del tipo penal de colusión y la interpretación del bien jurídico protegido”	153
5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “proponer una circunstancia agravante en el tipo penal de Colusión respecto a la protección especial del derecho fundamental al agua potable”	158

5.1.4. Discusión sobre el objetivo: “Analizar la posibilidad de determinar si resulta jurídicamente apropiada la ampliación del tipo penal de colusión respecto a la protección especial del derecho fundamental al agua potable” 164

5.2. RESULTADOS DE VALIDACIÓN DE VARIABLES 168

5.3. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 171

CONCLUSIONES 177

RECOMENDACIONES 179

Bibliografía 182

1.- Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos 216

2.- Respuesta a la solicitud de información al Poder Judicial..... 219

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: “Resultados tabulados en base a la recopilación de la opinión de los especialistas en derecho penal en los juzgados de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 1”.....	126
---	-----

Tabla 2: “Resultados tabulados en base en base a la recopilación de la opinión de los especialistas en derecho penal en los juzgados de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 2”.....	128
---	-----

Tabla 3: “Resultados tabulados en base en base a la recopilación de la opinión de los especialistas en derecho penal en los juzgados de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 2”.....	130
---	-----

Tabla 4: “Resultados tabulados en base a la recopilación de la opinión de los especialistas en derecho penal en los juzgados de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 4”.....	132
---	-----

Tabla 5: “Resultados tabulados en base a la recopilación de la opinión de los especialistas en derecho penal en los juzgados de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 5”.....	134
---	-----

Tabla 6: “Resultados tabulados en base a la recopilación de la opinión de los especialistas en derecho penal en los juzgados de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 6”.....	136
---	-----

INDICE DE ILUTRACIONES

Ilustración 1: “Gráfica de acuerdo a porcentajes sobre los resultados tabulados en base a la recopilación de la opinión de los especialistas en derecho penal en los juzgados de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 1”..... 127

Ilustración 2: “Grafico de acuerdo a porcentajes sobre los resultados tabulados en base a la recopilación de la opinión de los especialistas en derecho penal en los juzgados de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 2”..... 129

Ilustración 3: “Grafico de acuerdo a porcentajes sobre los resultados tabulados en base a la recopilación de la opinión de los especialistas en derecho penal en los juzgados de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 3”..... 131

Ilustración 4: “Grafico de acuerdo a porcentajes sobre los resultados tabulados en base a la recopilación de la opinión de los especialistas en derecho penal en los juzgados de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 4”..... 133

Ilustración 5: “Grafico de acuerdo a porcentajes sobre los resultados tabulados en base a la recopilación de la opinión de los especialistas en derecho penal en los juzgados de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 5”..... 135

Ilustración 6: “Grafico de acuerdo a porcentajes sobre los resultados tabulados en base a la recopilación de la opinión de los especialistas en derecho penal en los juzgados de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 6”..... 137

RESUMEN

El presente trabajo de investigación surge de la preocupación que genera el gran número de obras y proyectos de infraestructura de agua potable que se encuentran paralizadas o inconclusas, afectando el derecho humano de acceso al agua potable. Una de las causas por las que estas obras no concluyen de manera satisfactoria son las malas prácticas o comportamientos corruptos en la administración pública, principalmente en el sector de las contrataciones públicas. Siendo responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos dar un uso correcto a los recursos públicos. Esta investigación busca la modificación del artículo 384° del Código Penal, referido al tipo penal de colusión, debiéndose establecer que la sanción será mayor cuando recaiga sobre obras de infraestructura de agua potable, ya que el derecho al agua potable es un derecho humano esencial para la vida, que permite la realización de otros derechos como la salud, la vida, la erradicación de la discriminación, etc.

Palabras claves: Bien jurídico, Colusión, Derecho fundamental al agua potable

ABSTRACT

This research work arises from the concern generated by the large number of drinking water infrastructure works and projects that are paralyzed or unfinished, affecting the human right of access to drinking water. One of the reasons why these works are not completed satisfactorily are bad practices or corrupt behavior in the public administration, mainly in the public procurement sector. Being the responsibility of public officials and servants to correctly use public resources. This investigation seeks the modification of article 384 of the Penal Code, referring to the criminal type of collusion, and it must be established that the penalty will be greater than it falls on potable water infrastructure works, since the right to potable water is an essential human right for life, which allows the realization of other rights such as health, life, the eradication of discrimination, etc.

Keywords: Legal good, Collusion, Fundamental right to drinking water

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de este trabajo de investigación ha tenido como principal motivación el garantizar el derecho fundamental al acceso al agua potable de los ciudadanos, un derecho esencial para el pleno goce de la vida, así como la realización de otros derechos fundamentales, frente a las numerosas obras de servicio de agua potable que se encuentran paralizadas e inconclusas, así como otras ya culminadas, que presentan graves deficiencias para su funcionamiento, por los malos comportamientos de los funcionarios y servidores públicos en las etapas de las contrataciones públicas, afectando la calidad de vida y salud de los pobladores. Siendo los delitos más recurrentes en este sector el de peculado y colusión.

De acuerdo a lo señalado, para la ejecución de este trabajo académico se ha sintetizado el problema en una sola interrogante que se muestra de la siguiente manera: ¿En qué medida resulta jurídicamente apropiada la ampliación del tipo penal de colusión respecto a la protección especial del derecho fundamental al agua potable?

En ese sentido, el inicio de la investigación se proyectó con una respuesta a dicha interrogante, en base a los conocimientos a priori que se tuvieron sobre el tema del bien jurídico protegido en el delito de colusión, planteándose de la siguiente manera: Si se toma como argumento la percepción del bien jurídico en función al interés social; entonces, jurídicamente resulta apropiada la ampliación del tipo penal de colusión respecto a la protección especial del derecho fundamental al agua potable.

Según la orientación generada por los dos elementos anteriores, basados en las variables de la investigación se construyó toda la estructura metodológica que se plasma en el Capítulo I de la tesis, el mismo que contiene las pautas para el desarrollo que van desde el planteamiento hasta la indicación de los métodos que se aplicaron para alcanzar el nivel científico respecto a las determinaciones relacionadas con el bien jurídico protegido en el tipo penal de colusión y su ampliación específica sobre la garantía del derecho al agua potable.

Luego en el Capítulo II, se ha desarrollado en función a la primera meta de la investigación, la teoría de los derechos fundamentales con la intención de reconocer las bases doctrinarias que permitan entender el contenido esencial que predomina en función a la garantía que se establece para el derecho fundamental al agua potable, atendiendo puntualmente respecto a la necesidad de establecer legislación específica para asegurar su cumplimiento en tanto servicio a cargo del Estado fundamentado en el interés colectivo.

En el Capítulo III, ha correspondido ejecutar la segunda meta de la investigación referida a la naturaleza jurídica del tipo penal de colusión, no sólo para reconocer su estructura típica y sus alcances, sin para observar de manera específica la determinación del bien jurídico que inspira la construcción sancionadora, con lo cual pudo establecerse la posibilidad de que se incorpore un lineamiento específico respecto al alcance de su protección en función a los intereses colectivos que inspira la protección del derecho fundamental al agua potable.

En consecuencia de la tercera meta de la investigación, se desarrolla el Capítulo IV, en el cual se han plasmado los resultados de la observación proyectada respecto a la función jurisdiccional que motiva o argumenta sus decisiones en razón del tipo penal de colusión a fin de reconocer en estos razonamientos la posibilidad de contemplar el ámbito proteccionista respecto a los intereses colectivos relacionados con los servicios públicos, específicamente el que importa al derecho al agua potable. Además del recojo de la validación de los expertos con respecto a los planteamientos de la investigación mediante la aplicación de una encuesta, cuyos resultados aportaron la validez de la propuesta.

Finalmente en lo que corresponde al Capítulo V, se ha desarrollado la ejecución del discurso crítico sobre las bases teóricas recogidas y los resultados de la observación a fin de alcanzar los niveles de aceptación del investigador a través de las posturas arribadas, las mismas que en razón de las variables que orientan el orden y la síntesis, permitió alcanzar la validación de dichos conceptos, estableciéndose con ello la determinación final de la tesis, que postula sobre la posibilidad jurídica de incorporar una ampliación específica que proyecte garantía sobre el derecho fundamental al agua potable. Todo ello ha inspirado a la construcción de las conclusiones y recomendaciones que se someten al juicio evaluador de esta investigación.

La Autora.

Capítulo I

Aspecto metodológico de la investigación

1.1 El planteamiento del problema de la investigación

Para observar la gravedad del problema de la corrupción en el sector agua basta con hacer referencias a los datos ofrecidos en el Informe Global de la Corrupción 2008 La corrupción en el sector agua, publicado por Transparency International, detalla que:

“(...) Cada año mueren millones de personas víctimas de enfermedades transmitidas por el agua (...). A pesar de las mejoras alcanzadas en numerosas regiones, la población sin acceso a servicios de agua está aumentando. Las prácticas corruptas incrementan esta brecha, menoscaban las inversiones que podrían utilizarse para extender los servicios a los pobres, desvían los fondos destinados al mantenimiento de infraestructuras deterioradas y quitan dinero a los sectores más desfavorecidos de la sociedad (...)”. (p. 3)

De la cita previa se desprende una de las causas de mortalidad en el mundo que está relacionada con el agua que consume la población, la cual es proporcionada en malas condiciones de calidad y salubridad provocando enfermedades crónicas. Pese al esfuerzo que realizan los diferentes gobiernos a nivel mundial se acrecienta el número de personas que no pueden acceder al servicio de agua potable debido a las prácticas corruptas que son originadas por los mismos funcionarios o servidores públicos que tienen a su cargo la administración y gestión del servicio de agua potable.

Las inversiones que se realizan para la ejecución de proyectos de obras de agua potable y saneamiento, permiten que la población puede realizar sus actividades diarias, siendo necesario recalcar que el agua potable es un elemento vital para poder tener una vida digna. La corrupción en el escenario de las

contrataciones públicas es un mal de notoria presencia que afecta directamente a la población menoscabando sus derechos fundamentales como la vida y la salud. Cuando un funcionario desvía los fondos que inicialmente habían sido destinados para cubrir dichos proyectos para beneficios propios o de terceros se está malgastando un dinero que bien pudo ser utilizado para brindar servicios de calidad a la población.

De la misma forma el estudio documental denominado “Lucha contra la corrupción en el sector del agua”, encargado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010):

“(…) Muestra que la corrupción puede atravesar todos los subsectores del agua: agua potable y saneamiento, riego, gestión de los recursos hídricos y energía hidroeléctrica. Entre las formas de corrupción de alto nivel destacan la colusión, la captación de políticas públicas por parte de la élite, la malversación de caudales y fondos públicos, (...). La corrupción también puede manifestarse como control deficiente de la calidad del agua o como la ausencia de aplicación de sanciones por contaminación del agua (...).” (p. 6)

Se aprecia que la preocupación de falta de acceso al servicio de agua potable es a nivel internacional, siendo una de las causas más significativas la corrupción en la contratación pública, principalmente en el delito de Colusión, la cual consiste en un acuerdo oculto entre dos o más personas para afectar a un tercero. Un ejemplo claro son las muchas irregularidades que se advierten en las licitaciones de obras públicas que son dadas en favorecer de un determinado postor o empresa en particular. En la misma cita se realiza una interesante acotación respecto a la manifestación de la corrupción de manera indirecta, por ejemplo, cuando las autoridades no ejercer un control adecuado de la calidad de agua para el consumo de la población poniendo en riesgo la vida y salud de la comunidad, muchas son las denuncias que interpone la población y las autoridades omiten dar un pronunciamiento respecto a ello, dando prioridad a otras obras públicas, que si bien benefician a la población deberían atenderse aquellas que afectan directamente la

salud de las personas. Además de ello la ausencia de normas adecuadas para sancionar este tipo de conductas que afectan el servicio de agua potable y saneamiento es otra forma de corrupción, ya que los legisladores se convierten en cómplices de dichas conductas porque no realizan un análisis de las consecuencias de su omisión respecto a las causas por las que la población no pueda acceder al servicio de agua potable.

En el caso de Perú, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática informo que “(...) El 48,1% la población de 18 y más años de edad opinó que la corrupción es el principal problema que afecta al país (...)”. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017, párr. 1). La población considera que la corrupción es el principal problema en el Perú, incluso es más grave que la propia delincuencia. En los últimos años la corrupción ha ido tomando mayor protagonismo en todos los ámbitos de la vida al igual que en el sector público y privado. Para contrarrestar su avance se han creados normas e instituciones dedicadas exclusivamente a la corrupción, pese a ello sigue en aumento afectando directamente a la población. Sin lugar a dudas la labor que realizan los funcionarios que asumen funciones en la administración pública se ha visto debilitada por las prácticas corruptas que realizan descuidando su verdadera labor que atender las necesidades de la población.

“Alrededor del 22.7% de la población peruana o poco más de 7 millones de habitantes consume agua no potable, con los riesgos que ello implica. Son 2.5 millones en zonas urbanas y 4.8 millones en zonas rurales que consumen agua no potable proveniente de la red pública, informó el instituto de economía y desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio de Lima(CCL) (...)”. (Perú21, 2019, párr.1)

En la realidad peruana el escenario sigue siendo el mismo, muchos peruanos no tienen acceso a este derecho fundamental, por ello se ven obligados a recurrir a fuentes de agua no aptas para su consumo, otra problemática muy notoria en nuestro país son las millonarias inversiones para ejecutar obras de servicio de agua potable y saneamiento, las cuales no son terminadas o simplemente no sirven para los fines

para los que fueron creadas, tal como se señala en el blog de la Defensoría del Pueblo:

“(…) De la supervisión realizada a 19 proyectos de agua y saneamiento localizados en las regiones de Lambayeque, La Libertad, Huánuco, Pasco, Apurímac, Tumbes y Moquegua, existen 12 obras inconclusas o paralizadas en las que se habían invertido más de 173 millones de soles (...). De allí que las obras de saneamiento inconclusas, las deficiencias que se observan en su ejecución o la corrupción que, generalmente, rodea estas construcciones afectan en última instancia el pleno disfrute de los derechos humanos (...)”. (Vega, 2015, párr.4 -5)

El motivo principal detrás de todo ese problema no es la falta de una fuente natural de agua, ni es básicamente un problema de dinero, ya que el Estado anualmente destina millones de soles para financiar obras públicas a favor de los gobiernos regionales y locales de todo el país. El motivo de la problemática que afecta al sector agua obedece a los actos de corrupción. El alcance de la corrupción varía sustancialmente de sector a sector y entre distintos países y sistemas de gobernabilidad. Las estimaciones del Banco Mundial sugieren que “(…) Se está perdiendo del 20% al 40% de las finanzas del sector del agua debido a prácticas deshonestas y corruptas (...)”. (Swedish Water House Policy Briefs , 2006, p. 3)

La Región Lambayeque no es ajena a esta problemática, siendo la primera en encabezar la lista en el informe de la Defensoría del Pueblo, señalando a los distritos de Pítipó y José Leonardo Ortiz y la emblemática ciudad de Chiclayo, como una ciudad bombardeada, por las obras inconclusas y paralizadas en obras de agua y saneamiento. Tal como se concluye luego de haberse realizado la Sexta Audiencia Pública Descentralizada organizada por el Congreso en Chiclayo “Problemática de los usuarios de los servicios de agua potable de la región Lambayeque hacia la reconstrucción”:

“(…) Si bien el Estado llegó a invertir más de 1,500 millones de soles en obras de saneamiento durante los últimos 10 años, esto no se ve

reflejado en la calidad del servicio (...). Más aún, de los 286 proyectos iniciados en el periodo 2006-2016, al menos 129 son obras aún sin liquidar y que, por tanto, pese a haber sido concluidas, no pueden ser transferidas a Epsel (...). (Fernández, 2017, párr.1 -3)

Varios estudios consideran que es en el ciclo de las contrataciones estatales el espacio más vulnerable a la corrupción, principalmente en el delito de Colusión, dicho delito ocupa el primer lugar en la Región Lambayeque como se señala en la investigación desarrollada por Paredes (2017), quien llega a las siguientes conclusiones “(...) 2. Que, dentro de los delitos más comunes a nivel nacional en primer lugar se encuentra el peculado y en segundo lugar la colusión, asimismo en la región Lambayeque el primer lugar lo ocupa la colusión (...)”. (pág. 119)

De la fuente antes citada, se puede notar que en el delito de Colusión no solo se defrauda patrimonialmente al Estado sino que sus alcances son mayores. Entre ellos la disminución de la calidad, sostenibilidad y seguridad de los proyectos públicos y la reducción de la probabilidad que los bienes, servicios u obras realmente satisfagan las necesidades de la sociedad.

Las consecuencias de la corrupción en la contratación son, por tanto, multidimensionales: en el aspecto económico, se encuentra la defraudación del presupuesto público; en el aspecto político, se propicia la pérdida de legalidad de la autoridad en tanto favorece intereses privados; y en cuanto a los derechos fundamentales, se impide el acceso igualitario a los servicios públicos por parte de los ciudadanos.

Si bien en el Perú, existe una protección jurídico penal del derecho al agua; pero, como expresión patrimonial para citar algunos ejemplos el Art.185, el cual hace referencia al Hurto de agua, así como el Art. 203 el cual prescribe el delito de Usurpación de agua, dichos tipos penales consideran al agua como un bien mueble e inmueble. Respecto al agua como servicio público, se protege ligeramente en el capítulo II Delitos contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos, específicamente en el Art. 283 - Entorpecimiento al funcionamiento de

servicios públicos, busca evitar y reprimir conductas delictivas que atenten contra los bienes del Estado, las empresas privadas y los usuarios. Resaltando la necesidad de realizar una modificación del tipo penal de colusión respecto del servicio de agua potable, como derecho humano esencial para el goce pleno de la vida y de todos los derechos humanos.

Es bajo este fundamento de interpretación que en el desarrollo de la tesis se buscará una solución para garantizar el Derecho fundamental al acceso al agua potable, ampliando el delito de colusión, sancionando a los funcionarios por hechos de corrupción y falta de idoneidad en el desempeño de sus responsabilidades que afecta el derecho de acceso al agua potable, esto es para que se considere como agravante de este delito, bajo el argumento de que el bien jurídico lesionado tiene una ponderación mucho más alta que el contemplado en la actual agravante configurada en el artículo 384 del Código Penal.

1.2. La formulación del problema de investigación

¿En qué medida resulta jurídicamente apropiada la ampliación del tipo penal de colusión respecto a la protección especial del derecho fundamental al agua potable?

1.3. Sobre la justificación de la investigación

La construcción de este proyecto encuentra justificaciones en tres aspectos de la realidad problemática como son el ámbito social, legislativo y doctrinario, lo cual se procede a explicar.

Justificación Social: Se justifica esta investigación porque trata de buscar una solución a las constantes denuncias y alertas en el país, respecto a las numerosas obras de servicio público de agua potable y saneamiento paralizadas e inconclusas, así como otras ya culminadas; presentando graves deficiencias para su funcionamiento, las cuales afectan la calidad de vida y salud de un gran número de personas, como transmitir una gran cantidad de enfermedades peligrosas que conllevan muchas veces a la muerte. Teniendo en cuenta que el Estado invierte millones de soles para brindar servicios de calidad a la población, finalidad que no pueden ser cumplidos por la actual crisis de corrupción, principalmente en las

contrataciones públicas. Desde la perspectiva del Derecho Penal los delitos que más aparecen en esa materia son los de colusión, peculado, etc. Se encuentra justificada la investigación en razón de que la propuesta se basa en la observación de un problema latente en la actualidad, la cual sirve para garantizar el derecho fundamental al acceso de agua potable de los ciudadanos, un derecho esencial para el goce pleno de la vida, así como la realización de otros derechos fundamentales para que la persona pueda tener una vida digna.

Justificación Legislativa: Esta investigación se justifica legislativamente debido a la problemática que se observa entre el Art. 283 y Art. 384 del Código Penal, el Art. 283 hace referencia al entorpecimiento de funcionamiento de servicios públicos, dicho tipo penal no precisa ninguna característica determinada para ser autor material de la misma, es decir, pueden ser realizados por cualquier persona, la conducta prevista en este delito debe estar dirigida específicamente a impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los servicios públicos, tal como el servicio de agua potable y saneamiento. ¿Pero qué sucede si dicha conducta descrita en el art. 283 es cometida por un funcionario o servidor público? Sería necesario establecer como agravante, la condición del sujeto activo, el fundamento de esta agravante radica en que dichos funcionarios o servidores públicos faltan a su deber o descuidan el deber especial que surge de su rol social, y de ese modo, pone en peligro u ocasiona una lesión típica de determinados bienes jurídicos.

Respecto al art. 384 del código penal que señala el delito de Colusión sancionando al funcionario o servidor público que, interviniendo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública, concierta con uno o varios interesados para defraudar al Estado (colusión simple). Así también se sanciona si, como producto de tal concertación, se llegara a defraudar patrimonialmente al Estado (colusión agravada). En dicho tipo penal la corrupción se presenta como una de las causas, en tanto que dificulta la prestación de los servicios públicos brindados a los ciudadanos, por ello se podría incluir en el delito de Colusión el entorpecimiento de obras de servicios de agua potable y saneamiento

realizada por los funcionarios o servidores públicos, ampliando de esta manera el bien jurídico de la Colusión.

Justificación Doctrinaria: según lo descrito del ámbito legislativo, se puede justificar doctrinariamente la investigación respecto a la inexistencia de una adecuada tipificación del servicio de agua potable en cuanto a su valor como derecho humano, para garantizar su protección en el código penal, debido a que estos artículos aún siguen basándose en el valor patrimonial que tiene el agua es decir lo consideran como un bien mueble o inmueble.

1.4. Sobre la importancia de la investigación

Se halla la importancia de la investigación, puesto que busca garantizar el acceso de agua potable para los ciudadanos, por ende, se analiza la posibilidad de elevar a rango penal la acción realizada por funcionarios o servidores públicos, siendo muchas veces el mismo funcionario público que perjudica la actividad estatal; ya que, deja de actuar teniendo en cuenta el interés general. Primordialmente cuando por su intervención se afecta una obra de agua potable y saneamiento, olvidando su valor constitucional reconocido recientemente en nuestra constitución; sin embargo, esta garantía no se refleja por las constantes denuncias que interponen los ciudadanos en todo el país.

1.5. Los objetivos de la investigación

1.5.1. El objetivo general

Determinar si resulta jurídicamente apropiada la ampliación del tipo penal de colusión respecto a la protección especial del derecho fundamental al agua potable.

1.5.2. Los objetivos específicos

- Desarrollar doctrinariamente la teoría del derecho fundamental al agua potable.

- Describir dogmáticamente la naturaleza jurídica del tipo penal de colusión y la interpretación del bien jurídico protegido.
- Analizar la posibilidad de determinar si resulta jurídicamente apropiada la ampliación del tipo penal de colusión respecto a la protección especial del derecho fundamental al agua potable.
- Proponer una circunstancia agravante en el tipo penal de Colusión respecto a la protección especial del derecho fundamental al agua potable.

1.6. La hipótesis de la investigación

Si se toma como argumento la percepción del bien jurídico en función al interés social; entonces, jurídicamente resulta apropiada la ampliación del tipo penal de colusión respecto a la protección especial del derecho fundamental al agua potable.

1.7. Las variables de la investigación

1.7.1. Sobre la variable independiente

La ampliación del bien jurídico protegido en el delito de colusión.

1.7.2. Sobre la variable dependiente

La garantía del derecho fundamental al agua potable

1.8. Los métodos de la investigación

Para el desarrollo de la investigación se acudió a la estructura metodológica que apoya la estructura de análisis en función a ciertos parámetros que permiten la observación jurídica de la realidad, tal es así que se han agrupado en dos secciones, la primera que se ocupa de la interpretación de las reglas, orientada al reconocimiento de la estructura legal y sus efectos. De otro lado se ha tenido en cuenta un grupo de métodos que se ocupan de observar la realidad en el ámbito de

aplicación de estas reglas o la necesidad de que se adecuen a un formato más idóneo para la protección de los derechos que interesan a la colectividad.

1.8.1. El método exegético jurídico

Teniendo en cuenta que la aplicación de este método jurídico se orienta a la interpretación de las reglas en función a sus contenidos gramaticales, se ha revisado la estructura legislativa del tipo penal de colusión contenido en el artículo 384 del ordenamiento jurídico sustantivo penal, ello con la finalidad de revisar su construcción literal y en razón de ello enfocarse sobre la intención del legislador, para reconocer en ello el aspecto proteccionista que se le otorga en razón al bien jurídico el correcto funcionamiento de la administración pública.

Dado ello, se ha de considerar prudente que la verificación del ámbito de aplicación que corresponde a esta administración pública incorpora el entendimiento interpretativo de todos los derechos que le corresponde al Estado garantizar. Ello debería entenderse en función al efecto de control que le corresponde a la entidad estatal, que pese a no estar contenido en la literalidad de la regla debe asumirse como una cuestión relacional.

1.8.2. El método sistemático jurídico

Conforme se aprecia de la estructura analítica exegética de la regla materia de análisis, el ejercicio se realiza desde un punto de vista independiente, esto es la observación de la regla de manera aislada; luego, en esta fase de la interpretación de las reglas, corresponde observar al tipo penal de colusión en función al esquema jurídico al que pertenece, así pues, se ha tenido en consideración

dos niveles, el primero que corresponde al normativo constitucional como la base del ordenamiento y el segundo en función al sistema jurídico penal en el que se ha insertado.

De acuerdo al primer nivel interpretativo desde el punto de vista sistemático, se ha reconocido que la relación directa que tiene con el control que le corresponde al Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales, orienta la protección de la correcta administración pública, para que se contemplen acciones garantizadoras para los derechos que se enlazan con la ejecución de obras públicas que son de labor esencial de parte del Estado.

Luego en cuanto a la determinación de su presencia en el ordenamiento sustantivo penal, se advirtió que la estructura donde se incorpora la regla del tipo penal de colusión, resulta apropiada en cuanto a las acciones que se vinculan con el ejercicio administrativo del Estado, a fin de asegurar el bienestar de toda la ciudadanía, mediante la aplicación de sanciones que proyectan protección de los bienes jurídicos, siendo que la correcta administración se vincula con todos los derechos que le corresponden a la ciudadanía.

Capítulo II

Teoría de los derechos fundamentales y el agua potable

De acuerdo a la estructuración que marcan los objetivos específicos este primer punto a desarrollar comprende el origen de la teoría de los derechos fundamentales. Punto indispensable para concebir la comprensión del Derecho específico relacionado con el agua potable que interesa a esta investigación y se desarrollará más adelante; por lo mismo que se parte por la búsqueda de antecedentes históricos, así como la descripción del desarrollo teórico con lo cual se podrá evidenciar las características de estos derechos para que se constituyan como tal en base a su contenido esencial.

2.1. Algunas referencias históricas

Los derechos fundamentales son inherentes al ser humano por su status de personas, resaltando la característica de inalienable, por lo cual no son objeto de comercio; es decir, no se pueden comprar ni vender. Respecto al derecho al agua potable es imprescindible para tener una vida digna, de la misma forma permite que se realicen otros derechos fundamentales como la vida, la salud, etc.

Teniendo en cuenta la importancia de reconocer al agua potable como Derecho fundamental, es que se recurre a la evolución del concepto derecho fundamentales a través del tiempo.

La fundamentación de los derechos fundamentales siempre ha sido materia de divergencias entre los autores, por ello optamos por la postura más aceptada la cual señala que tales derechos se fundamentan en tres grandes corrientes tales como:

García (2008): “(...) se acredita la existencia de tres grandes fuentes de fundamentación: La historicista, la iusracionalista y la positivista”. (p. 18)

EL TRÁNSITO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A TRAVÉS DE LA MODERNIDAD:

La historia señala que ya se hablaba de Derechos fundamentales desde la Edad Antigua y la Edad Media, por lo que dicho concepto se utilizó de manera incorrecta. Señalando que para un mejor entendimiento del concepto de Derechos fundamentales es necesario utilizar conceptos como dignidad humana, libertad e igualdad. Estos conceptos ya se encontraban presentes mucho antes de la época moderna; pero tan solo se encontraban en la historia como ideas, más no eran ejercidos como derechos propiamente dichos.

Peces (2008): “(...) Las ideas de dignidad, de libertad y de igualdad se encuentran en la historia antes del Renacimiento, pero no se formularán como derechos hasta el mundo moderno”. (p. 5)

La noción de Derechos fundamentales es propia de la época moderna, la cual evoluciona a través del tiempo. Su aparición se debe a los diferentes cambios en la sociedad tanto en el ámbito económico y político, así como la aparición del capitalismo y la Revolución industrial por esta razón la sociedad se transformó en una sociedad estamental, por este motivo solo algunos grupos de la sociedad eran poseedores de ciertos privilegios que los diferenciaba de los demás.

En el ámbito político el Estado aparece como una forma de poder que reemplaza el poder político de la edad media. El poder del Estado asume como primera función la producción de Derecho, el cual es considerado como el principal instrumento para combatir las vulneraciones a los derechos fundamentales.

“Los derechos fundamentales (...), están sujetos a límites, explícitos o no. En palabras de José Luis Cea, estos derechos se tratan “de atributos que jamás tienen alcance absoluto, pues si lo poseyeran se convertirían en prerrogativas típicas de un déspota que obra, con rasgos ilícitos o abusivos” (...).” (Tórtora, 2010, p. 168)

Los derechos fundamentales nacen como una oposición a la forma de gobierno de la Monarquía absolutista. Dicha forma de gobierno se caracterizaba porque todos los poderes se concentraban en una sola persona como era el Rey, debido a que no existía una división de poderes. En aquella época los derechos de los ciudadanos se encontraban condicionados al cumplimiento de cargas y obligaciones que imponían las principales autoridades como el Rey, o servicios en beneficio de la comunidad.

La monarquía implicaba una violación y burla a los derechos de las personas, principalmente la clase denominada Tercer estado, la cual estaba compuesta por la población no privilegiada, a quienes se les restringía una serie de privilegios.

Krebs (1979):

“(...) Quien pertenece al Estado campesino no debe ejercer, sin autorización del gobierno, un trabajo burgués ni debe destinar a sus hijos a éste. (...) Puede ser obligado a ello por el Estado con medios compulsivos. En el caso de persistente negligencia, puede ser obligado a entregar su tierra a otro. (...) El campesino está obligado a prestar servicios personales y pecuniarios al Estado y su señor (...).” (p. 16)

La monarquía absolutista ejercía un poder supremo sobre los ciudadanos, principalmente los campesinos eran muy maltratados, no podía ejercer libremente un trabajo burgués, estaban condicionados a las decisiones del gobierno. Los campesinos cultivaban sus tierras y muchas veces tenían que entregarlas a otro, sin poder defender sus tierras de cultivos, ya que el Estado los obligaba.

Durante el desarrollo de la edad media aparece la necesidad de limitar las actuaciones del monarca, para que guarde respeto a sus súbditos, por lo que aparecen construcciones que sustentan teóricamente esa limitación.

Para el desarrollo histórico de los derechos fundamentales, la doctrina del contrato social es clave, por ello se habla del Contractualismo, ideología que estructura la idea de los Derechos naturales. El contrato social es el medio por el cual los individuos renuncian a sus derechos naturales en favor de un soberano.

“(…) Los historiadores suelen presentar el período de los siglos XIV y XV como un período de transición entre una organización política feudal o feudovasallática, y una organización estatal, centralizada, propia de la Edad Moderna”. (Monsalvo, 1986, p. 101)

2.2.El reconocimiento del carácter fundamental del derecho al agua potable.

Habiendo comprendido el origen y sentido de los derechos fundamentales como parte de la estructura del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, hace falta enfocar el análisis sobre uno de los ejes temáticos de la investigación como lo es el derecho fundamental al agua potable, por lo mismo que resulta

indispensable hacer un recuento teórico para reconocer la justificación de esta comprensión jurídica.

Por lo mismo hará falta traer a colación el concepto básico de lo que se entiende por agua, el reconocimiento del agua como derecho fundamental requiere de una justificación previa que se relacione con su carácter natural, por lo mismo que es preciso entenderla desde su propia composición para lo cual se toma como referencia lo señalado por el autor Fonseca (2010) en su libro titulado “ *Manual de Derecho ambiental*” :

“Esta materia tiene una excelente composición química la cual está formado por dos átomos de hidrogeno y uno de oxigeno; líquido a temperatura ambiente (excepto en los polos y en la atmosfera) incoloro, inodoro, e insípido, esencial para perpetuar el ciclo de la vida en la tierra”. (p. 17).

Este concepto permite reconocer no solo las cualidades físicas o químicas del elemento, sino que invita a la percepción de cierto nivel de importancia para el ser humano, puesto que resultaría indispensable para la existencia del mismo y bajo el entendido caso de que el derecho constitucional se orienta a la protección del ser humano a través de la garantía que ofrece los derechos fundamentales es necesario reconocer en dicha configuración la importancia del elemento que se está estudiando. Por ello se ha de tener en cuenta lo señalado por Andaluz (2006): “(...) Es vital para los principales ecosistemas, así como para la salud humana, la producción de alimentos, el desarrollo económico, la estabilidad social y política (...)”. (p. 53)

El reconocimiento normativo del Derecho al agua adquiere su importancia en base a lo que el autor señala como la necesidad de alcanzar el desarrollo social y

político, ello dada la importancia que tienen las normas contenidas en la constitución, se puede entender por justificada la incorporación de este derecho bajo el carácter de fundamental, toda vez que se relaciona en forma directa con la propia existencia del ser que garantiza es Estado a través de las reglas que se generan.

Tal construcción normativa obedece a cierta estructura lógica que corresponde a las normas jurídicas que según García (1953) quien señala:

“(…) encierran siempre una o varias hipótesis, cuya realización da nacimiento a las obligaciones y los derechos que las mismas normas, respectivamente, imponen y otorgan. Encontramos aquí una diferencia capital entre los supuestos morales y jurídicos. Los primeros condicionan la producción de deberes; (...) Según Kelsen, la estructura lógica de éstas puede resumirse así: en determinadas circunstancias, un determinado sujeto debe observar tal o cual conducta; si no la observa, otro sujeto, órgano del Estado, debe aplicar al infractor una sanción”. (p. 170).

El autor señala que la construcción de las normas jurídicas da nacimiento a una serie de obligaciones y derechos, tal como es el derecho fundamental al agua potable. Dichas normas son de carácter obligatorio, principalmente para los funcionarios públicos, principales custodios de los intereses del Estado. Según Kelsen cuando un sujeto no cumple con sus obligaciones merece una sanción. En el caso de un derecho de vital importancia como es el agua potable, merece una mayor protección, y así poder brindar un servicio de calidad para que los ciudadanos tengan una vida digna. Por lo mismo que se aprecia como justificada la finalidad de la propuesta que sugiere la incorporación de una circunstancia agravante en el delito de Colusión, ya que dicho delito está relacionado con aquel funcionario que causa un perjuicio de carácter patrimonial al Estado. Pero dicha

obligación se extiende a la calidad de prestación de servicios básicos a la población.

Tal creación legislativa si resulta posible en base a lo que se entiende como la injerencia que tiene la constitución, que en el caso estudiado protege al agua como derecho fundamental, para la creación de otras reglas a cargo del propio Estado, puesto como lo menciona Ferrero (2000):

“(...) A partir de ella, el ordenamiento jurídico positivo regula por sí mismo la producción de sus normas. La producción originaria del Derecho es la constitución; la producción derivada comprende la legislación constitucional, la legislación ordinaria, los reglamentos y las resoluciones administrativas (...)” (p. 218).

Existiendo como norma fundamental el Derecho al agua potable, cuyo reconocimiento constituye la primera fase de la obligación del Estado, será preciso que en función a lo señalado por Ferrero, corresponde la siguiente fase que requiere la producción de legislación que permita amparar el derecho fundamental de manera más efectiva; encontrándose con ello la relación directa entre la consideración del Derecho fundamental agua potable como base de las sanciones que deban imponerse a los funcionarios que tienen bajo su responsabilidad la ejecución de las acciones del Estado para garantizar su protección.

2.3. La importancia del agua

Para el reconocimiento de la importancia que se otorga al agua como fundamento para generar su protección jurídica, hace falta recoger la definición que desde la disciplina del derecho se ha creado para el concepto de agua, ello con la intención de establecer la existencia de las diferenciaciones que se asumen para dicho efecto proteccionista.

2.3.1. Definición jurídica del agua.

El agua como elemento fundamental para la vida ha sido abordada desde diferentes puntos de vista, por ello también ha tenido que ser protegida por el ordenamiento legal y adoptar una naturaleza jurídica, tal como lo señala la Ley de Recursos Hídricos en su artículo 2:

“(...) El agua constituye patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible, Es un bien de uso público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación (...)” (Huapaya Tapia, 2014, p. 331).

Según lo señalado por el autor el agua es un recurso natural que puede ser aprovechado en otras oportunidades, siempre y cuando se espere un tiempo determinado para su posterior renovación, siendo obligación del Estado brindar protección, si bien es un recurso renovable, tenemos la idea equivocada que nunca se va agotar, cuando ello no es tan certero, más hoy en día que producto de la contaminación ambiental los recursos naturales se están agotando. Siendo su protección uno de los fines más importantes, ya que otros países como es el caso de Ecuador se está reconociendo a la naturaleza en la constitución como sujeto de Derecho, por ende, pudiendo ser posible la judicialización de los derechos de la naturaleza.

“(...) La violación de los derechos de la naturaleza es posible reclamarla en el ámbito jurisdiccional mediante una acción de protección, acción de cumplimiento o medidas cautelares (...)” (Suárez, 2013, p. 51). Se puede reconocer de ello la amplia protección que se otorga a la naturaleza, su condición de sujeto capaz de ostentar derechos los cuales pueden ser defendidos en el fuero

jurídico con la intención de garantizar su protección, por lo cual se ha construido todo el esquema jurídico que comprende dicha acción.

La administración a cargo del Estado debe estar relacionada con el bien común, ya que la principal finalidad del Estado es habilitar las condiciones para que la población pueda desarrollarlas con normalidad y satisfacer sus necesidades básicas, buscando el progreso de la población. Tales condiciones van desde el aseguramiento de la constante renovación de los recursos como el caso del agua, a través de esquemas estratégicos y presupuestales, hasta la creación de la estructura jurídica que permita garantizar su protección desde el punto de vista jurídico, generando seguridad.

Tal acondicionamiento debe estar basado no sólo en la garantía de seguridad jurídica para el elemento en su ámbito natural, sino que debe procurar la adaptación a los esquemas sociales jurídicos con el fin de asegurar que los ciudadanos puedan acceder a sus beneficios, puesto que la existencia del medio ambiente y en el caso especial que se estudia, el agua, tiene una estrecha relación con el carácter de importancia de la vida de los seres humanos, por lo mismo que se encuentra justificada su protección en base a la concepción de los derechos comunes, esto comprendido desde la perspectiva de los intereses difusos y colectivos.

Es en ese sentido que se ha de entender la importancia del agua, pues el nivel de protección que alcanza en la estructura del ordenamiento jurídico permite que termine “(...) constituyéndose en el bien común que posibilita el conjunto de condiciones aptas para obtener la plena suficiencia de vida en sociedad y alcanzar el fin último del hombre (...)” (Delpiazzo, 2012, p. 84).; esto devendría en el carácter de indispensable de su aseguramiento jurídico, lo cual justifica la

protección constitucional, aun cuando se trate de sólo un sector relacionado con el servicio público, el cual asume el sentido garantista de los intereses supra individuales.

2.3.2. Reconocimiento y protección jurídica del agua.

El tema agua ya no solo es visto desde un enfoque ambiental, desde años atrás se está convirtiendo en un componente fundamental de la legislación. Como consecuencia de su progresiva escasez y deterioro de su calidad. Con el transcurrir de los años la preocupación de cuidar este preciado recurso, como es el agua, ha conllevado a que los diferentes organismos internacionales y nacionales formulen compromisos plasmados en tratados y declaraciones para garantizar su protección. Por ello es necesario señalar los tratados internacionales que nos ayuden a comprender la importancia de este vital elemento líquido, que se constituye como factor necesario para el desarrollo social y económico de la sociedad. El evento que convirtió al tema de medio ambiente en un tema con relevancia internacional se dio en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, la cual tuvo lugar en el mes de junio del año 1972. Dicha conferencia reunió a varios países desarrollados y en desarrollo, los cuales manifestaron en el debate general que era necesario utilizar los recursos naturales de una manera sostenible, ya que por el afán incontenible de incrementar el producto nacional bruto no se tenían en cuenta otros factores de importancia para que la población tenga una vida digna y de calidad. Siendo el agua considerada como una necesidad y derecho siendo necesario para el desarrollo y bienestar de la población. Señalan factores de importancia como: “(...) una atmosfera limpia, agua, la vivienda y la sanidad eran necesidades y derechos indiscutibles del hombre (...)”. (Naciones Unidas, 1973, pág. 50)

En dicha conferencia se emitió la Declaración de Estocolmo la cual establece 26 principios y un plan de acción con 10 recomendaciones. La cual enfatiza en sus primeros principios acerca de que el hombre necesita desarrollarse en un medio ambiente de calidad donde pueda tener una vida digna y gozar de dignidad, de la misma manera establece que los recursos naturales de la tierra como el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna, es obligación del hombre preservar el medio ambiente tanto para las generaciones presentes como las futuras. Se hace notable la presencia del elemento agua, el cual es necesario para que se pueda tener una vida digna, imponiéndole también el deber de su protección. Tal como se señala en el Principio 2 de la declaración de Estocolmo:

“(...) los recursos naturales de la tierra incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras, mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga (...)” (Organización de las Naciones Unidas (ONU), 1973, p. 4).

Tener acceso al agua potable es fundamental para que se puedan desarrollar otros derechos de vital importancia como es el derecho a la vida y la salud, debido a que el agua potable facilita un saneamiento adecuado, reduciendo la propagación de las enfermedades. Por ello existen dos decenios internacionales de agua de las naciones unidas como son la conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua, Mar de Plata y el Decenio internacional del agua potable y saneamiento ambiental, 1981-1990. La Conferencia de las Naciones Unidas se llevó acabo en Mar de Plata, Argentina en el mes de marzo 1977. Lo que se buscaba con esta conferencia es concientizar a todos los países a nivel nacional e

internacional de la urgencia y la importancia de los problemas relacionados con el agua, para evitar en el futuro una crisis mundial por falta de agua. Y principalmente un compromiso firme de todos los países participantes para brindar soluciones y hacer de nuestro planeta un buen lugar donde vivir. Por ello se aprobó un plan de acción llamado “Plan de acción de Mar de Plata”, el cual se dividía en dos partes. La primera señala recomendaciones sobre los componentes esenciales de la gestión del agua y la segunda parte que está conformada por 12 resoluciones en temas definidos.

Los temas de la agenda desarrollados en esta conferencia estuvieron relacionados con el derecho que tiene la población a tener acceso al agua potable, siendo reconocido este acceso como un recurso esencial para la vida y un desarrollo adecuado. Es notable la preocupación que se muestra en esta conferencia respecto aquellas poblaciones que no tenían agua para poder satisfacer sus necesidades básicas, ya que muchas enfermedades se derivan del deficiente acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, provocando muchas veces la muerte.

“(…) las políticas y planes nacionales de desarrollo deberían dar prioridad a la provisión de agua potable y al saneamiento para la totalidad de la población (…)” (Del Castillo, 2009, p. 48). Uno de los grandes avances que se dio a dicha conferencia fue la recomendación que del año 1981 y 1990 fuera denominado como el Decenio Internacional de agua y del saneamiento ambiental, el cual buscaba concientizar que aún muchos no podían contar con agua limpia y saneamiento, trazándose como meta que al culminar el decenio todos los pobladores del mundo pudieran acceder al agua limpia y saneamiento. Por ello las autoridades tendrían la obligación de buscar la manera de mejorar las normas y

los niveles de suministro de agua potable y saneamiento ambiental mediante políticas nacionales. Sin dudar, era una meta difícil de alcanzar, por lo que el objetivo general no se cumplió, sin embargo, no debemos quitarle mérito a tal acción, ya que cambió la vida de millones de personas, gracias al apoyo conjunto de los países y las diferentes agencias bilaterales y multilaterales dieron prioridad a financiar proyectos relacionados con el agua potable y saneamiento. “(...)2. El Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 1981-1990, fue lanzado en un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de noviembre de 1980 (...)”. (Asamblea Mundial de la Salud, 1992, p. 2)

La situación de los recursos hídricos se iba convirtiendo en una preocupación a nivel mundial, debido a la escasez y el uso abusivo de dicho recurso, es por lo que era con urgencia que los gobiernos de todos los países implementarán políticas respecto al agua y desarrollo sostenible. Es decir, que este recurso pueda satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer los recursos de las futuras generaciones. Este tema fue tratado En la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, se celebró: “(...) Del 26 al 31 de enero de 1992 tuvo lugar en Dublín, Irlanda, la Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente, que no fue una conferencia convocada por las Naciones Unidas sino patrocinada por organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, con metas de política hídrica mundial (...)”. (Del Castillo, 2009, p. 60)

De dicha conferencia se elaboró un informe que establecía recomendaciones. Dentro de unos de sus principios rectores señala claramente que el agua es un recurso finito y vulnerable, si bien la superficie de la tierra es, casi toda agua, y los océanos contienen alrededor del 97% de toda el agua del planeta,

ello no significa que sea infinita, ya que solo el agua dulce sirva para que el hombre pueda satisfacer todas sus necesidades básicas. En el planeta no todas las personas tienen acceso al agua potable, la realidad es muy problemática y con el pasar del tiempo la situación empeora, y pese a ello los esfuerzos por gestionar adecuadamente este recurso hídrico no son suficientes, volviéndose vulnerable debido al aumento de la población, la contaminación y la mala gestión de este recurso, por parte de las autoridades. Tal como se señala el principio número uno de la declaración de Dublín: “(...) El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente (...)”. (Solanes & Gonzales, 1999, p. 6)

La protección del derecho fundamental agua potable al ser reconocido internacionalmente trascendió en los países latinoamericanos, por consiguiente, emprendieron a realizar esfuerzos para reconocerlo en sus constituciones. Es necesario recalcar que: “(...) América del Sur es una de las áreas más favorecidas del planeta pues cuenta con el 26% de los recursos hídricos globales para el 6% de la población mundial (...)”. (Cenicacelaya, 2011, p. 87). Por lo tanto, los países ubicados en América del Sur son más favorecidos respecto a los recursos hídricos en comparación con otros países a nivel mundial, no obstante, sigue siendo un recurso escaso. Por ello empezaron a tornarse visibles los esfuerzos de los países latinoamericanos para promover y garantizar este derecho fundamental.

El Estado puede asegurar la vigencia de los derechos asumiendo convenios gubernamentales entre países, para tomar acuerdos en las diferentes esferas, es el caso de del ámbito político, económico, social, etc. Lo que incide en que el Estado debe respetar dichos convenios acordados entre ellos, conforme a lo que establece el principio *pacta sunt servanda*. Es necesario recalcar que dicho principio es uno

de los más importantes del Derecho internacional, y se entiende que los tratados deben ser cumplidos, en consecuencia, las obligaciones que nacen de ellos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, es por ello que: “(...) el principio pacta sunt servanda requiriese a cada uno de los sujetos intervinientes una necesaria fidelidad a sus promesas (...)”. (Garrido, 2011, p. 4).

Esto se puede notar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual establece los derechos fundamentales que debían ser resguardados a nivel mundial, dentro de la gran gama de derechos que la conforman se encuentra el derecho fundamental al agua potable, derecho base para poder realizar otros derechos como el de la vida y salud, sumando a ello que los miembros de la sociedad puedan tener una vida digna. En dicha declaración los Estados miembros se comprometen a cumplir con las obligaciones que derivan de la declaración haciendo efectivo el respeto por aquellos derechos.

Algo similar ocurre con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales, los cuales son derechos humanos concernientes a las condiciones sociales y económicas necesarias para poder tener una vida digna. Así mismo los Estados partes tienen que garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos que menciona el pacto, enfatizando que debe hacerlo sin distinción alguna, por ello el miembro de una comunidad debe contar con las mismas condiciones políticas y económicas respecto a otros integrantes de la comunidad, es el caso del derecho al agua potable cuyo acceso debe estar garantizado, debido a que forma parte del derecho a tener un nivel de vida adecuado “(...) 2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna (...)”. (ONU: Asamblea General, 1966, Parr. 10)

De forma similar existen otros instrumentos internacionales que reconocen el agua potable como derecho, obligando a sus Estados miembros que asuman la obligación de cumplir con los acuerdos estipulados. Ya que estos instrumentos internacionales de buscan la protección universal y efectivas de los derechos que enuncian en ellos. “(...) El compromiso internacional que adquiere el Estado para expedir, reformar o derogar una ley debe cumplirse de buena fe conforme al principio pacta sunt servanda (...)”. (Mogrovejo, 2017, p. 84).

Todo lo descrito anteriormente parece confirmar los esfuerzos significativos que realizó la comunidad Internacional para que se reconociera el acceso al agua potable como derecho humano básico, la noción básica nos permite identificarlo como un derecho primordial, que sirve como fundamento para que otros derechos puedan realizarse. Siendo algunos de los países de América del Sur los que incursionaron en darle la importancia que merecía el agua potable, mediante una legislación más detallada y específica. Por ello consagraron dicho derecho en sus constituciones, para brindarle una mayor protección, entendida su constitución como la norma fundamental más importante de un Estado.

“(...) que el acceso al agua potable y a los servicios sanitarios son derechos humanos básicos, algunos estados de nuestro hemisferio han avanzado aún más, consagrándolos en el supremo nivel normativo (...)”. (Cenicacelaya, 2011, p. 96). Por consiguiente, los Estados iniciaron el proceso de la positivización de los derechos humanos, incluido el derecho al agua potable.

“(...) el proceso de positivación de los derechos humanos convierte jurídicamente estos atributos en una categoría normativa nueva denominada derechos fundamentales, lo que permite, desde la práctica, reclamarlos y propiciar su protección efectiva, aunque

en tal taxonomía no se encuentren todos los derechos que potencialmente tenemos (...).” (Freddyur, 2008, p. 49)

El ser humano por su condición de tal, le han sido concedidos derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, etc. Así como esos derechos existen muchos más que proceden de la dignidad humana, que no pueden ser clasificados en los diferentes ordenamientos jurídicos de los países. Por el proceso de positivización los derechos humanos inherentes al ser humano se convierten en derechos fundamentales, dándoles una nueva jerarquía en el ordenamiento jurídico, ya que al ser reconocidos como tal se puede exigir su protección y cumplimiento efectivo. Uno de los caminos para concretizar la positivización fue la constitucionalización de los derechos, es decir, que los derechos fueron incorporados a la constitución, bien es sabido que la constitución es la norma más importante que se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico de un Estado, en palabras llanas es la ley fundamental de un Estado, explicada como:

“(...) el verdadero fundamento de las otras leyes; es decir, que la ley fundamental, si realmente pretende ser acreedora a ese nombre, deberá informar y engendrar las demás leyes ordinarias basadas sobre ella. La ley fundamental, para serlo, habrá, pues, de actuar e irradiar a través de las leyes ordinarias del país (...).” (Lassalle, 1931, p. 56)

Por lo tanto, la amplia gama de derechos, incluidos el derecho al agua potable, debido a que ya muchos países lo tienen incorporado en ella, al ser consagrados en la constitución, tiene que garantizarse su protección, y en caso de que no se cumpla con lo establecido en ella, simplemente se castiga. Imagínense no obedecer a una norma de esa jerarquía, como se puede pedir obedecer otras

normas de menor jerarquía, sería algo absurdo. Por ello se debe respetar de manera plena y más aun a quienes les hemos encomendado las riendas de nuestro país, pongamos por caso los funcionarios públicos. “(...) Una de las medidas adoptadas por los Estados para el cumplimiento del derecho ha sido su positivización mediante el camino de su constitucionalización, para facilitar su exigibilidad a través de garantías jurisdiccionales tanto en instancias nacionales como supranacionales (...)”. (Becerra & Salas, 2016, p. 143)

Pongamos por ejemplo algunos textos constitucionales que tutelan el derecho al agua potable como un derecho independiente. Es el caso de la República Oriental del Uruguay, destacado por ser el pionero en reconocer el agua potable como un derecho fundamental consagrado en su constitución. “(...) El Uruguay fue el primer país del mundo en reconocer los derechos al agua potable y el saneamiento a nivel interno. (...)”. (Naciones Unidas: Asamblea General, 2012, p. 6). Mereciendo analizar cómo es que se llevó a cabo dicha lucha social por el agua. Todo comienza por la firma de una carta de Intención, entendida como: “(...) un documento que servirá de base a un proceso negociador ulterior (...)”. (Navares, 2011, p. 227). Dicha carta fue suscrita por el Fondo Monetario Internacional y el Estado Uruguayo, comprometiéndose el Estado Uruguayo a introducir nuevas formas de regulación en varios sectores de los servicios públicos, uno de ellos el agua potable y saneamiento, más aún se comprometía a mejorar las normas y mecanismos para facilitar la inversión privada en dicho sector.

Lamentablemente las primeras experiencias de privatización de los servicios de agua potable y saneamiento no fueron satisfactorias. La población mostró disconformidad debido a que no podía acceder a este servicio público, por los altos precios que tenían que pagar para obtenerlo. Se formaron organizaciones sociales

con el fin de instaurar una lucha social por este recurso natural vital, uniéndose logran formar la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV).

La cual resaltaba el valor del agua no solo como un bien patrimonial, sino como un derecho fundamental y social que les pertenece a todos sin discriminación alguna. El trabajo de la CNDAV partió de una visión del agua opuesta a la visión que promueven las multinacionales “(...) promueve la consideración del agua como un bien común y su acceso como un derecho humano (...)”. (Santos, 2005, Parr. 8). La comisión presentó su proyecto de reforma constitucional al Parlamento, la cual fue aprobada y se modificó el artículo 47 de su constitución, el cual nos ilustra sobre el reconocimiento del acceso al agua potable como derecho fundamental, priorizando el uso de consumo humano sobre otras usanzas y oponiéndose a la privatización del agua potable.

“(...) Artículo 47.- (...) El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales. 1) La política nacional de aguas y saneamiento estará basada en: (...) c) el establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes de ellas, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones, d) el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico (...)”. (República Oriental del Uruguay Poder Legislativo, 2004, p. 1)

De la misma forma merece ser mencionada la Constitución de la Republica de Ecuador, la cual es una constitución que se basa en la filosofía del buen vivir, una

filosofía orientada a una vida plena, una vida que al desarrollarse mantenga el equilibrio entre la naturaleza y los seres humanos. La constitución ecuatoriana avanzando de manera progresiva respecto al reconocimiento como derecho fundamental no solo del recurso agua, sino también como agua potable, siendo la obligación del Estado realizar todo lo posible para brindar dicho servicio a todos sin discriminación alguna, dando prioridad al derecho fundamental agua potable y a la alimentación, así como otros derechos de suma importancia para que la persona tenga una vida digna.

“(…) presenta un nuevo paradigma en la aplicación de los derechos humanos especialmente en aquellos que se denominan del buen vivir, y que son el Agua y la alimentación (...), los cuales se denominan en la doctrina como “Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, (DESC), pero que, en la Carta Magna Ecuatoriana, se les da la categoría de derechos fundamentales y tutelables (...).”

(Martínez, 2015, p. 20)

En el caso del país Bolivia el derecho al agua potable está incorporado en el capítulo segundo que enumera los derechos fundamentales, estableciendo que toda persona humana, reconocida como fin y no como un medio, debe acceder de manera universal sin discriminación alguna, además enfatiza que debe haber una facilidad en el acceso al servicio agua potable y saneamiento para todos, es decir que el Estado debe hacer todo lo posible por acortar dichas brechas de acceso “(...) Artículo 20. I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable (...) III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos (...)”. (Parlamento Boliviano, 2009, p. 6)

En el Perú se reconoció expresamente el derecho de acceso de agua potable como derecho constitucional mediante ley N° 30588, publicada en el diario oficial El Peruano, priorizando el consumo humano sobre otros usos.

En resumen, estos ejemplos de países latinoamericanos que constitucionalizaron el derecho de agua potable en su ordenamiento jurídico. Lo hicieron con el fin para que todos los seres humanos tengan acceso a ellos, y de la misma manera el Estado debe promoverlos y garantizarlos. La constitución como norma fundamental debe ser garante de los derechos fundamentales, no siendo posible lograr su finalidad si sus principios y preceptos no son acatados por todos, tantos gobernantes como gobernados. Resulta evidente que los gobernantes son los responsables de garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de la persona humana, para lograr entender la democracia como un régimen político y una forma de gobierno, en el que el poder emana del pueblo y asumir la justicia como una práctica desarrollada de manera continua, resultando ser gratificante para la población.

“(…) La constitución a lo sumo es un documento clave, base para el entendimiento de la democracia y para la práctica de la justicia, pero depende del hecho de que sus preceptos, principios, valores y fines sean reverenciados y acatados por todos, por gobernantes y gobernados (…)”. (Castaño, 2012, p. 325)

Merituado lo anterior, cabe comprender el esfuerzo de los países por otorgarle una debida protección a un recurso natural tan necesario para poder sobrevivir, siendo aún increíble que en pleno siglo XXI, época en la cada día el agua se está convirtiendo en un bien escaso y a la vez máspreciado. Pensando equivocadamente que es un recurso infinito que nunca se va a escasear. No

dándole la misma importancia que se les da a otros recursos naturales. Pongamos por ejemplo el caso de los recursos minerales, en el pasado y en presente los minerales siguen siendo considerados como los recursos más valiosos, porque aportan un significativo porcentaje al aumento del producto bruto interno, en consecuencia, mayor crecimiento económico. Nadie cuestiona su importancia; pero no se está proyectando al futuro respecto a la disponibilidad del recurso agua para todos, incluso muchos ya empiezan a comentar que en el futuro las guerras serán por el agua.

“(…) Algunas activistas ecofeministas de la India han pronosticado que las guerras del futuro serán guerras por el agua: (...). La crisis del agua es la faceta más penetrante, aguda e invisible de la devastación ecológica de la Tierra. En 1998, 28 países experimentaron tensión o escasez hídrica y se prevé que esta cifra aumente a 56 para el año 2025(…)”. (Valdes, 2018, p. 103)

Según la cita señala la crisis del agua es vista como una faceta invisible, debido a que está pasando desapercibida. La acción de incorporar el derecho fundamental del agua potable en sus constituciones, es un escalón más en la escalera que nos conduce a su protección integral, pese a ello no es suficiente dicha acción, ya que lo que se busca principalmente es que estos derechos se hagan efectivos y no solo queden plasmados en una hoja de papel.

2.3.3. El tipo de agua que protege el derecho.

En el Perú según su legislación, el agua es abordada de diferentes aristas, como un recurso natural renovable, un bien económico y como un derecho fundamental de la persona humana.

En lo que concierne al agua como recurso natural, debe entenderse como un elemento de la naturaleza que se encuentra en los ríos, lagos, cuencas hidrográficas, etc. Recurso que existe sin necesidad que intervenga el hombre para crearlo, además de ello sirve para satisfacer las necesidades humanas, no solo servirá para el consumo humano, también como fuente generadora de energía y otros múltiples usos. “(...) Los recursos naturales pueden definirse como el conjunto de elementos que brinda la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas, en particular, y las biológicas, en general. (...)”. (Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, 2005, p. 17)

En el Perú existió como antecedente la Ley General de Aguas, la cual estuvo vigente 40 años, el ámbito de dicha ley abarcaba las aguas marítimas, terrestres y atmosféricas del territorio peruano. Si bien es una ley que ya ha sido derogada, que teniendo como prelación el uso para las actividades agrícola, evidenciaba también darle importancia a satisfacer las necesidades primarias de la población, por ejemplo, el consumo humano de este recurso hídrico: “(...) La Ley General de Aguas (LGA), de 1969 (...). Tiene un enfoque básicamente agrario (...)”. (Guevara, 2015, p. 328)

Con el pasar del tiempo era necesario cambiar la forma de gestionar este recurso hídrico para lograr darle un uso eficiente y protección, por ello mediante ley N° 29338, dictada el 31 de marzo del 2009 se emite la Ley de Recursos hídricos.

“(...) En marzo de 2009, la Ley de Recursos Hídricos 29338 (en adelante la LRH) fue aprobada por el Congreso, marcando la primera reforma comprensiva en las políticas del agua del Perú en cuarenta años (...)”. (French, 2016, p. 74). Se emite la Ley de Recursos hídricos con la finalidad de regular la gestión del recurso

hídrico y ver de qué forma el Estado y la comunidad actúan en su gestión. La norma comprende dentro de su ámbito de aplicación el agua de los ríos, afluentes, cauces; así como la que se encuentra en las ensenadas y esteros, humedales, manglares, nevados y glaciares. En esta ley se reconoce la protección del agua como recurso natural renovable, entendido como un elemento de la naturaleza que tiene la capacidad de autogenerarse a través del tiempo, cuya explotación de dicho recurso no genera aumento ni disminución de la fuente productora, solo si lo aprovechamos de manera sostenible.

“(...) son recursos renovables aquellos que no se agotan con su explotación y que su obtención no altera ni disminuye la sustancia del bien del cual se extrae el recurso, como podrían ser los recursos agrícolas (...)”. (Gamarra, 2007, p. 276).

También se reconoce como principio la prioridad en el acceso al agua potable, enfatizando que dicho acceso conlleva a que se ejerzan varios derechos fundamentales, haciendo posible que las personas tengan una vida digna. Tal como se menciona en su Título Preliminar, artículo III, inciso 2: “(...) 2. Principio de prioridad en el acceso al agua (...) es prioritario por ser un derecho fundamental sobre cualquier uso, inclusive en épocas de escasez (...)”. (Ley de Recursos Hídricos, 2009, párr. 5)

Según lo establecido en el principio señalado, es indubitable el deber que tiene el Estado de brindar una mayor protección respecto al agua utilizada para el consumo humano, ya que debe tener preferencia frente a otros usos, aun cuando existan épocas de escasez, debe seguir siendo la principal prioridad el que las personas accedan a este recurso para satisfacer sus necesidades humanas básicas como el consumo directo, preparación de los alimentos y aseo personal.

Podemos tomar como ejemplo lo que ha sucedido recientemente en la región Lambayeque, donde se tuvo que cerrar el reservorio Tinajones, el cual es un proyecto hidráulico encargado de la reserva hídrica para el para uso agrícola y poblacional. Frente al bajo nivel de almacenamiento de agua en el reservorio, se tuvo que dar prioridad al agua para uso poblacional frente al agua para el uso agrícola.

Es necesario recalcar que, en el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, protege el agua como recurso natural renovable que se materializa en las fuentes naturales, se entiende como fuente el lugar de donde se origina el agua, como ríos, manantiales, lagos, etc. De la misma forma se menciona la protección hacia las fuentes artificiales, siendo aquellas que son creación de los seres humanos y, son “(...) imitaciones de algo natural, de algo genuino u original (...)”. (Fehér, 2000, p. 1), por ejemplo, las obras de infraestructuras hidráulicas, que son construidas para solucionar los problemas relacionados con la escasez de agua. Igualmente la protege en el estado en que se encuentre, por ejemplo, si se trata del estado líquido se puede notar en los ríos, en su estado sólido se encuentra en los nevados y glaciares, y cualquier etapa del ciclo del agua.

“(...) El Estado protege, supervisa y fiscaliza el agua en sus fuentes naturales o artificiales y en el estado en que se encuentre: líquido, sólido o gaseoso, y en cualquier etapa del ciclo hidrológico (...)”. (Autoridad Nacional del Agua, 2009, p. 12).

Por ello su protección tiene por finalidad evitar su detrimento continuo y progresivo como consecuencia de la contaminación y degradación, mejorando el estado de las fuentes naturales, además de ello se menciona a los ecosistemas acuáticos, primero es necesario definir lo que entendemos por ecosistema “(...)

concebido como el conjunto de organismos y su medio físico interactuando en un lugar (...).” (Armenteras, y otros, 2016, p. 88). Se señala que el conjunto de organismos independientemente si son bióticos o abióticos interactúan en un medio, que en el caso de los ecosistemas acuáticos ese medio sería el agua, el cual comprende el agua con alta o poca concentración de sales. Así pues, es necesario proteger un recurso tan importante como el agua, porque nos permite asegurar un futuro hídrico más sostenible, es decir que el crecimiento económico de una comunidad debe ir de la mano con el cuidado del ambiente y la salud de las personas.

“(...) Artículo 103º (...) La protección del agua tiene por finalidad prevenir el deterioro de su calidad; proteger y mejorar el estado de sus fuentes naturales y los ecosistemas acuáticos; establecer medidas específicas para eliminar o reducir progresivamente los factores que generan su contaminación y degradación (...).”

(Autoridad Nacional del Agua, 2010, p. 35)

La misma Ley de Recursos Hídricos hace mención sobre los usos de agua, haciendo énfasis en el uso poblacional, cuyo procedimiento empieza con la captación del agua a través de una fuente natural o fuente artificial, luego el agua debe ser tratada, para que se convierta en apta para el consumo humano, preparación de alimentos y el aseo personal, consideradas como necesidades humanas básicas, sin la satisfacción de las cuales no podemos alcanzar el pleno bienestar, porque se encuentran relacionados con el derecho a la vida y a la salud.

“(...) Artículo 39 (...) El uso poblacional consiste en la captación del agua de una fuente o red pública, debidamente tratada, con el fin de satisfacer las necesidades

humanas básicas: preparación de alimentos y hábitos de aseo personal (...).
(Autoridad Nacional de Agua, 2019, p. 24)

Si atendemos a la descripción precedente, el recurso natural agua al ser tratada, es considerado como un servicio de saneamiento y se le ha dotado de una ley específica que la regula en tal aspecto. Estamos hablando de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley N° 26338, que rige la prestación de los servicios de saneamiento los cuales comprende a los “(...) servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y disposición sanitaria de excretas, tanto en el ámbito urbano como en el rural (...)”. (Ley General de Servicios de Saneamiento, 1994, párr. 6). La cita en comentario establece que el agua potable forma parte del conjunto de los servicios de saneamientos, así como
cuya prestación continua y en condiciones de igualdad tienen un impacto significativo en la salud de las personas.

El artículo 1, del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento LEY N° 26338, establece lo siguiente:

“Artículo 1.- (...) comprende las disposiciones relativas a: a) Las condiciones de la prestación regular de los servicios de saneamiento. b) Las funciones, atribuciones, responsabilidades, derechos y obligaciones de las entidades vinculadas a la prestación de servicios de saneamiento, así como los derechos y obligaciones de los usuarios. c) Los regímenes empresariales, la regulación de tarifas, la participación del sector privado y el uso de bienes públicos y de terceros para la prestación de los servicios de saneamiento (...)”. (Ministerio de Vivienda, 2005, p. 1-2)

En efecto, la norma citada se encargara de hacer cumplir que la prestación de los servicios de saneamiento se brinden de manera regular, los cuales comprende a los “(...) servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y disposición sanitaria de excretas, tanto en el ámbito urbano como en el rural (...)”. (Ley General de Servicios de Saneamiento, 1994, párr. 6)

Estableciendo que el agua potable forma parte del conjunto de los servicios de saneamientos, cuya prestación debe ser continua en el tiempo, sin interrupción y brindar calidad en la prestación, cumpliendo ciertos estándares de calidad como recibir un agua limpia y seguro, libre de cualquier microorganismo que nos pueda producir una enfermedad, ya que tiene un impacto significativo en la salud de las personas. Por consiguiente, es declarado como una necesidad pública, resulta ser un aspecto de vital importancia para el bienestar de la población; por ello: “(...) resulta necesario que el servicio prestado no solo observe una continuidad en el tiempo, sino una permanencia de calidad en la prestación; es decir, sea prestada en atención a los estándares de calidad que la norma y el contrato establecen (...)”. (Aròstegui, 2012, p. 49)

De la misma forma se hace referencia que dicha ley determina las diferentes funciones, derechos y obligaciones que tienen los diferentes actores que intervienen en la prestación de los servicios de saneamiento, lo cual incluye al Estado, cuyo fin angular es el interés público, búsqueda constante de lograr satisfacer las necesidades básicas de la población y conducirla al progreso sostenido. El Estado mediante sus entidades competentes lidera la administración de la prestación de los servicios de saneamiento, además cuenta con el poder para conceder los de servicios públicos, también interviene en la fijación de los precios para los servicios públicos como el agua, debido a que son considerados como

servicios básicos, regulados por entes reguladores que fiscalizan para que los usuarios puedan gozar de un servicio de calidad. De igual importancia le corresponde a los Gobiernos Regionales y Locales, la función de administrar directamente o por concesión los servicios de saneamiento de manera eficiente y adecuada los servicios de saneamiento.

“(…) Corresponde al Estado a través de sus entidades competentes ejercer la rectoría, la potestad de concedente, regular las tarifas, supervisar y fiscalizar la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento, ejecutar la política del Estado en materia de administración de la prestación de los servicios de saneamiento y la responsabilidad de la prestación de estos servicios públicos, en cuanto corresponda.

De igual forma, corresponde a los Gobiernos Regionales y Locales ejercer las competencias compartidas en materia de prestación de los servicios de saneamiento (…).” (Ministerio de Justicia, 2015, p. 2)

En resumen, los servicios de agua potable y alcantarillado son regulados por la Ley General de Servicios de Saneamiento N° 26338, declarando dichos servicios públicos de necesidad y utilidad pública, de preferente interés nacional, es decir de preocupación general. Por ello, son pilar fundamental para que generen grandes cambios determinantes en la vida de los ciudadanos.

Resulta necesario conocer el Decreto Legislativo N° 1240, el cual modificó la Ley General de Servicios de Saneamiento y la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, con el objeto de implementar mecanismos para poder consolidar la política de modernización de los servicios de saneamiento, esto se puede notar

en la infraestructura de los servicios, muchas veces son antiguas, defectuosas y no están diseñadas para cumplir con las condiciones mínimas para que sean brindadas a la población. Incluso hay lugares en donde esta infraestructura no existe, en consecuencia, deben ser construidas con la finalidad de alcanzar la universalidad respecto a este servicio. Al mismo tiempo impulsa la participación de los actores que participan en este proceso, empezando desde los usuarios hasta el mismo Estado, el cual a través del ministerio encargado de dicho sector se encarga de implementarlo, acciones dirigidas hacia la búsqueda constante de la satisfacción de las necesidades básicas de la población.

Sin olvidar que en dicho decreto también se dota de mayor fortaleza al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, entidad “(...) que brinda apoyo técnico a las empresas de saneamiento (EPS) para que modernicen sus procesos de gestión (...)”. (García, 2015, párr. 1). Y, en ese sentido, dicho Organismo Técnico se encarga de que las empresas prestadoras de servicios ejecuten las políticas sectoriales e implementar mecanismos para el reactivamiento de las Entidades Prestadoras de Servicio de Saneamiento.

“(...) la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, con el objeto de implementar mecanismos que impulsen, promuevan y consoliden la política de modernización de los servicios de saneamiento, que impulse los roles de los actores involucrados en el citado proceso, fortalezca las funciones del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) y los mecanismos para el reflatamiento de

las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS); (...)" (El Peruano, 2015, pág. 562312).

Ahora bien, el Decreto Legislativo N° 1280 aprueba la Ley Marco de la gestión y prestación de servicios de los servicios de saneamiento en su artículo I expresa lo siguiente:

“(…) La presente Ley tiene por objeto y finalidad: 1. Establecer las normas que rigen la prestación de los servicios de saneamiento a nivel nacional, en los ámbitos urbano y rural, con la finalidad de lograr el acceso universal, el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los mismos, promoviendo la protección ambiental y la inclusión social, en beneficio de la población. 2. Establecer medidas orientadas a la gestión eficiente de los prestadores de los servicios de saneamiento, con la finalidad de beneficiar a la población, con énfasis en su constitución, funcionamiento, desempeño, regulación y control, que sean autorizadas acordes con lo establecido en la presente Ley. 3. Establecer los roles y funciones de las entidades de la administración pública con competencias reconocidas por el ordenamiento legal en materia de prestación de los servicios de saneamiento (...)" (Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 2020, p. 9).

Si atendemos a la descripción de la disposición normativa, nos indica que la Ley Marco de la gestión y prestación de servicios de los servicios de saneamiento tiene

como finalidad que las personas que no disponen de agua potable y saneamiento, puedan acceder a dicho servicio, para lograr alcanzar la meta del acceso universal. Debiendo caracterizarse por ser un servicio de calidad y así satisfacer las necesidades de los usuarios del presente sin poner en peligro la vida de las futuras generaciones. El Estado peruano ha empezado a fortalecer la legislación en materia de agua potable y saneamiento, ante la gama de motivaciones que tuvo el Estado para iniciar dicho fortalecimiento, que según lo referido por Guabloche (2018), sin duda una de ellas, es que: “(...) El Perú, país firmante de la Agenda 2030 (...) (p. 24)”, por lo que se compromete a realizar acciones para conseguir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Resaltando el objetivo número 6 que señala como meta que se debe “(...) Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos (...)”. (Guabloche, 2018, p. 26). El Estado tiene la obligación de brindar seguridad de que el servicio de agua potable y saneamiento estará puesto a disposición de toda su población, sin excluir a nadie, sin ningún tipo de discriminación, brindando a todos unos tratos igualitarios. De manera que para lograrlo se debe realizar una adecuada gestión sostenible del agua y saneamiento, es decir un equilibrio en el uso del agua y su renovación constante, característica propia de un recurso natural renovable, asegurando dicho recurso para el futuro.

En segundo lugar, la descripción de la disposición normativa también menciona que dicha ley tiene por finalidad fortalecer y extender las funciones de su regulador de agua potable y saneamiento como es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, de la misma forma busca perfeccionar la mediación del Organismo Técnico de Administración de los servicios de saneamiento respecto a las empresas prestadoras de servicios. Sin lugar a dudas también busca

abrir las puertas y dinamizar las inversiones públicas para que se puedan ejecutar más proyectos de saneamiento.

En consecuencia, al analizar las leyes más resaltantes que han sido mencionadas párrafos precedentes dadas en materia de agua y saneamiento, como la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y la Ley N° 30045 denominada Ley de Modernización de los servicios de saneamiento, las cuales fueron modificada por el Decreto Legislativo N° 1240. Más tarde el Decreto Legislativo N° 1280 aprueba la Ley Marco de gestión y prestación de los servicios de saneamiento. Todas ellas están orientadas a fortalecer la gestión eficiente de los prestadores de servicios de saneamiento; así como para establecer y ordenar las funciones de las entidades públicas con competencias en materia de saneamiento a fin de lograr el incremento de la cobertura, el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los mismos.

Sin embargo, la calidad de los servicios de saneamiento no presentó las mejoras esperadas 4 millones de peruanos no cuentan con este servicio.

Por su parte el Derecho Penal desempeña un papel muy importante respecto a tutela del medio ambiente y en consecuencia del recurso natural agua. “(...) El Derecho Penal es el conjunto de normas jurídico – positivas que garantizan su cumplimiento a través de la fuerza pública (...)”. (Peña, 1997, p. 14). En ese sentido, esta rama del derecho será la encargada de que todos los ciudadanos cumplan con lo dispuesto en las normas, ante su incumplimiento podrá imponer una sanción, manifestando de esta forma el Estado su poder soberano.

La potestad punitiva del Estado está limitada por el hecho que sólo se pueden castigar penalmente aquellas conductas que lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos. Esto supone, por tanto, que no pueda reprimirse penalmente meras

infracción al deber, o ilícitos administrativos. Según Peña (1997), “(...) el Derecho Penal solo puede ser utilizado para proteger a los más importantes, y contra los ataques que adquieren cierta gravedad (...)”. (p. 64). Una de las finalidades del Derecho Penal es proteger bienes jurídicos esenciales para la comunidad, considérese como ejemplo el agua, sin lugar a dudas un recurso vital para el ser humano, sin el cual su supervivencia estaría en peligro. Sin embargo, en el código penal se encuentra incorporado en el capítulo de delitos contra el patrimonio, por este motivo es considerado un bien jurídico, es decir una expresión del patrimonio.

“(...) 4.- El concepto de bien mueble en estos delitos es no funcional y autónomo propio del Derecho Penal que no coincide con el concepto civil del mismo. Por bien mueble hay que entender todo objeto exterior con valor económico que sea susceptible de apoderamiento material y de desplazamiento. Ejecutoria Superior de la Sala Penal de Apelaciones para Procesos Sumarios con Reos Libres del 05-09-00, Rojas Vargas Fidel, op.cit., p. 518 (...)”. (Chirinos, 2014, p. 694)

En este punto, debe quedar precisado que la definición que nos proporciona el Código Civil hace mención que “(...) de acuerdo con el art. 886, inc. 2 CC, las fuerzas naturales son bienes muebles a condición que sean “susceptibles de apropiación” (...)”. (Hurtado, 2011, p. 240), es decir que por sí solo las fuerzas naturales no tienen las condiciones para ser apropiadas por el sujeto, y necesitan adoptar un estado en el cual les permita ser aprehendidas, además de ello posee un determinado valor económico. Al señalar fuerzas naturales podemos poner como ejemplo el agua, cumpliendo con la condición de que debe adoptar un estado

para poder ser objeto de apropiación, por ejemplo, se exterioriza en las redes de agua potable y alcantarillado, en consecuencia, se puede desplazar en el espacio.

En el segundo párrafo del artículo 185° del código penal, señala “(...) Hurto simple (...). Se equiparán a bien mueble (...) el agua y cualquier otra energía o elemento que tenga valor económico (...)”. (Decreto Legislativo N° 635 CÓDIGO PENAL, 2016, p. 127). El delito de hurto protege bienes muebles, por ende, se puede entender que el agua es considerada como un bien mueble.

Por el contrario, en el mismo Código Penal se reconoce al agua como un bien inmueble, para ser más específico, se encuentra en su artículo 203 respecto del delito del desvío ilegal de las aguas, expresando lo siguiente:

“El que, con el fin de obtener para sí o para otro un provecho ilícito con perjuicio de tercero, desvía el curso de las aguas públicas o privadas, impide que corran por su cauce o las utiliza en una cantidad mayor de la debida (...)”. (Decreto Legislativo N° 635 CÓDIGO PENAL, 2006, p. 139).

En dicho artículo se han descrito acciones como el desvío del curso de aguas públicas o privadas, por ejemplo, el desviar el trayecto del agua que estaba destinada para el consumo humano de la población para utilizarla en actividades agrícolas. En este caso se está utilizando el agua para el regadío de plantaciones que se encuentran en terrenos privados generando un perjuicio a la población, ya que debido a esta desviación les llega menos cantidad de agua de la normal.

En lo que concierne al agua como servicio público, es protegida por el código penal dentro de los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos,

específicamente en el artículo 283, denominado como entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos señalando lo siguiente:

“El que, sin crear una situación de peligro común, impide, estorba o entorpece el normal funcionamiento del transporte o de los servicios públicos de (...) saneamiento (...) será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años (...).” (Decreto Legislativo N° 635 CÓDIGO PENAL, 2006, p. 178).

Merituado lo anterior, cabe comprender que el tipo penal señala sanciona la perturbación del normal funcionamiento de los servicios público, dentro de los cuales se considera el servicio de saneamiento, lamentablemente este artículo lo menciona de una forma simple y ligera, dándole mayor prioridad al servicio de transporte, como consecuencia de las constantes protestas y huelgas que realizan los pobladores exigiendo que se cumplan sus derechos, muchas veces para llamar la atención del gobierno deben provocar disturbios como bloquear carreteras. No dando la debida importancia a otros servicios como el de saneamiento.

También el agua como recurso natural es protegida en el Título XIII en los delitos ambientales. Con el pasar del tiempo el tema ambiental ha empezado a fortalecerse en cuanto a normas que buscan su protección, debido al avance de la tecnología el hombre cada día contribuye más a su degradación, no siendo consciente de las consecuencias muchas veces irreversibles. Si bien contamos con recursos naturales en abundancia como los recursos naturales renovables, se les debe dar un manejo sostenible para evitar con su posterioridad su extinción. Por

ello se plantea que una forma de mitigar dichas consecuencias dañinas al medio ambiente es un mayor control de las acciones que ejecutan las personas naturales y jurídicas respecto al ambiente, así como establecer sanciones más severas.

“(…) 2. Las necesidades del hombre (o de cualquier otro ser vivo) respecto del agua han cambiado a lo largo de la historia al ritmo de las exigencias de calidad de vida (...). En efecto, un mayor control de las acciones destructoras de los recursos naturales y medidas de sanción más eficaces. (...)”. (Flores, 2017, p. 392)

Por consiguiente, el Código Penal ha configurado como infracción penal cuando se contamina los cuerpos de agua. En párrafos anteriores se ha descrito las diferentes fuentes de agua, como las aguas que discurren por los diferentes cauces, la que se encuentra en el mar o incluso aquellas que se encuentran en el subsuelo, sancionando aquellas acciones como el realizar vertimientos de sustancias contaminantes en los cuerpos de agua, y la severidad de su sanción radica no tan solo en la protección del ambiente, sino también de la salud de la población. El artículo 310 del Código Penal hace referencia a la contaminación ambiental, señalando lo siguiente:

“(…) El que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o realice descargas (...) filtraciones, vertimientos (...) contaminantes en (...) las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental (...)”. (Decreto Legislativo N° 635 CÓDIGO PENAL, 2006, p. 190).

En tal sentido debemos indicar que nuestra legislación regula el agua, como recurso natural renovable, patrimonio de la nación, servicio público y bien mueble e inmueble. Haciendo acotación que en los delitos en el que sanciona un mal uso del agua, la acción es realizada por un particular, sancionándole con pena privativa de libertad. Si la conducta del particular es sancionada de esta forma, el comportamiento del funcionario estatal se tiene que regir bajo buenos principios, teniendo como finalidad no lesionar o poner en peligro la actividad estatal.

2.3.4. La responsabilidad de garantizar el acceso y disfrute al agua.

Sobre los fines del Estado coexisten diferentes puntos de vista teóricos. En la mayoría de ellos se le otorga al Estado la función de garantizar los derechos de la persona humana, tal como lo manifiesta la constitución política del Perú en su “(...) Artículo 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado (...)”. (Tribunal Constitucional del Perú, 2015, pág. 13). De dicho artículo debemos resaltar el papel que desarrolla el Estado frente hacia la defensa de los derechos fundamentales de la persona, y en consecuencia asegurar el respeto de su dignidad. El estado está al servicio de la población, en la constante búsqueda de satisfacer sus necesidades básicas, una búsqueda que conlleva al bien común, mejorando sus condiciones de vida de manera igualitaria. Por ello se menciona que la existencia del Estado radica en lograr la plena realización de la persona humana.

“(...) El Estado está hecho para el hombre, no el hombre para el Estado (...). En términos del personalismo de Mounier, el Estado no es una comunidad espiritual, o una persona colectiva en el sentido propio de la palabra. No está por encima de la patria ni de

la nación, ni mucho menos respecto a las personas. El Estado sólo existe en beneficio de la persona realizada en sociedad (...).”.

(Angulo, 2017, p. 38)

El Estado tiene la obligación de garantizar el uso de consumo humano, sobre otros usos, priorizando el bienestar de la población, debido a que el derecho fundamental de agua potable se encuentra ligado con el derecho a la vida y a la salud, debido a que el consumo de agua contaminada genera enfermedades gastrointestinales que inclusive pueden conducir a la muerte. Considerados como unos de los derechos fundamentales para la supervivencia y vida digna de la población. Siendo obligación del Estado prestar servicios públicos para satisfacer las necesidades de la comunidad, y asegurar el acceso a servicios de saneamiento adecuados, es el caso de brindar servicios de calidad como el agua potable para que la población pueda gozar de buena. Tal responsabilidad obedece al Estado según lo señalado por la Ley general del Ambiente, como lo manifiesta en su libro Andaluz Westreicher (2013) quien señala:

“(...) El acceso al agua para consumo humano es un derecho de la población. Corresponde al Estado asegurar la vigilancia y protección de aguas que se utilizan con fines de abastecimiento poblacional (...), el Estado asegura el uso preferente del agua para fines de abastecimiento de las necesidades poblacionales, frente a otros usos (artículo 114) (...)”. (p. 73)

La función del Estado de garantizar la protección y acceso al recurso natural agua como derecho de las personas, no solo es protegido en la actualidad, sino que dicha protección empezó desde siglos atrás, esto se puede notar en el reinado de “(...) Enrique III otorgó la Carta del Bosque siguiendo el consejo de

Gualo (y los obispos ingleses) (...)"'. (Linebaugh, 2013, p. 55). En dicha carta existe un artículo que menciona que cualquier persona podría construir libremente en su terreno un pozo, un estanque, etc. Dándole la importancia al recurso agua para poder desarrollar las actividades agrícolas y ganaderas. De esta forma se garantizaba el derecho de los campesinos a utilizar el agua para que puedan desarrollar sus principales actividades. Como se señala en el artículo XII de la Gran Carta de los bosques:

"(...) construir en su terreno boscoso o en la tierra que tenga en el bosque (...) un estanque, un pozo de marga (...) condición de que ello no perjudique a ningún vecino (...)". (Linebaugh, 2013, p. 320)

Hay que mencionar, además, que el acceso al agua forma parte del conjunto de elementos que integran el ambiente, por ello se requiere al Estado que tome las acciones necesarias para garantizar el derecho al agua potable y como consecuencia se estaría generando un debido cumplimiento al derecho de un ambiente sano y equilibrado.

"(...) Las acciones requeridas a los Estados para la garantía del acceso al agua coinciden con un elemento integrante del medio ambiente y por lo tanto las condiciones ambientales para el derecho al agua se repetirían para el derecho a un medio ambiente sano. Por ejemplo (...) generar el acceso al suministro de agua como para de las condiciones ambientales necesarias para garantizar la vida (...)". (Neira, 2014, p. 67)

No obstante lo dicho, es fundamental conocer sobre el significado del derecho a un ambiente sano y equilibrado, haciendo referencia que el ambiente que nos rodea debe cumplir con ciertas condiciones para ser adecuado para nuestra mejora,

como resultado propio del valor dignidad, la que establece que por el solo hecho de ser humanos merecemos vivir en un ambiente que no sea perjudicial para nuestra salud, libre de contaminación, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en condiciones ambientales adecuadas. La mayoría de veces se habla solo del derecho que le corresponde al hombre, olvidando que de la misma manera como lo exigen, también tiene que cumplir con los deberes. El hombre es el principal responsable de preservar el medio ambiente, tarea que no solo debe desarrollar en el presente, sino también para las futuras generaciones. Dicha obligación de cuidado también se extiende al rol del Estado, encargado de hacer cumplir las medidas relacionadas con que los responsables por los danos ocasionados deben repararlos, pero su intervención sería mejor antes de que sucedan dichos daños, asumiendo medidas preventivas. De esta forma garantizar un armonioso desarrollo de la vida humana, así como de otras especies y otros elementos que integran la naturaleza.

“(...) el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, dicho derecho comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso en que el hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 10 de la Constitución). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido. Pero también el

derecho en análisis se concretiza en el derecho a que el medio ambiente se preserve. (...)”. (Caso José Miguel Morales Dasso, en representación de cinco mil ciudadanos (demandante) contra el Congreso de la República (demandado). , pp. 13-14)

En resumen el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado no es específico, si bien se ha determinado que uno de sus elementos es que se preserve el medio ambiente, no se especifica una protección al derecho al agua, mucho menos se hace referencia al derecho al agua potable, ya que menciona ligeramente que una forma de que Estado cumpla con su obligación de brindar un medio ambiente sano y equilibrado, es a través de la preservación y aprovechamiento de los recursos naturales, sin perjudicar el bienestar de la población.

El límite al que se refiere la cita se comprende de la estructuración de las normas constitucionales que protegen el medio ambiente y señalan que la libertad que tiene el hombre para accionar sobre la naturaleza depende del nivel de afectación que produzca en ella, se refiere básicamente a la protección de la interrelación que existe en equilibrio entre el medio ambiente y sus elementos.

Teniendo en cuenta que los elementos del medio son diversos, para el caso que forma parte de la investigación, debe prestarse mayor atención sobre la relación existente entre el recurso hídrico y el hombre puesto que ambos constituyen elementos del medio; esta relación producida de manera natural estaría entonces protegida por los límites que se describieron anteriormente.

Luego la preocupación surge en torno a cómo es que se ejecutan estas garantías, teniendo en cuenta que el concepto general de agua como recurso natural se encuentra comprendido dentro del ámbito de protección del derecho a vivir en un

ambiente sano y equilibrado, que en su desarrollo plantea la aplicación de sanciones tanto administrativas cuanto penal para hacerlas efectivas.

Por otro lado, constitucionalmente se ha establecido la configuración del derecho al agua potable, cuya garantía se encuentra establecida en la legislación nacional, en la cual se aprecian reglas que procuran la protección del recurso aplicando sanciones de tipo administrativas, que operan sobre las personas jurídicas que incurren en el perjuicio; sin embargo, no se producen sanciones de tipo penal.

El tema sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas es muy discutido por diferentes autores, para comenzar se debe diferenciar entre una persona natural entendida como aquella persona que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal, a diferencia de una persona jurídica que tiene derechos y obligaciones, celebra contratos y es representada, es decir que los representantes legales actúan en nombre de la persona jurídica para realizar diferentes trámites. Cuando una persona jurídica comete un delito no lo hace por decisión propia, sino por acuerdo de los miembros que la conforman, dado a que se trata de un ente ideal. Según Meini (1996), “la voluntad de la persona jurídica es la suma de votos o acuerdos de un grupo de personas naturales, pero no es una voluntad personal y separada de sus miembros” (p. 200). Al respecto se manifiesta que los representantes de las personas jurídicas serán responsables de aquellos actos celebrados dentro de los límites de las facultades que se le hayan conferido frente a las partes contratantes y terceros. En resumen, los delitos cometidos por una persona jurídica son realizados por una persona natural quien actúa en su representación.

Otro aspecto relevante se refiere al actuar de la persona jurídica de manera dolosa, el dolo es definido como la conciencia y voluntad de efectuar los

elementos objetivos del tipo, entonces el dolo consta de dos elementos, uno el intelectual y el otro el volitivo.

“(…) Este dolo identificado como la voluntad individual no es igual a la supuesta voluntad colectiva de la persona jurídica, que no es otra que una resolución puramente normativa que proviene de las decisiones colegiadas de los directivos, que al final terminan siendo decisiones de personas naturales, es decir, plena manifestación de un “dolo trasladado” (…”. (Carrión, 2019, p. 331)

El autor señala que no se puede establecer diferencias entre la voluntad individual y la voluntad colectiva de la persona jurídica, si bien las decisiones de una persona jurídica son colegiadas de los directivos son tomadas por personas naturales.

Como ejemplos de sanciones administrativas aplicables a las infracciones, tenemos aquellas impuestas por las Autoridades Administrativas del Agua, las cuales son órganos desconcentrados, es decir que cumple con desarrollar ciertas acciones, así como prestar servicios en los distintos lugares del territorio del país, respecto a temas relacionados con la gestión de los recursos hídricos, dentro de lo establecido en las políticas y normas dadas y dictadas por sus Órganos de Alta Dirección.

“(…) La autoridad nacional del Agua tiene presencia en el País a través de órganos desconcentrados denominados Autoridades Administrativas del Agua que dirigen en sus respectivos ámbitos territoriales, la gestión de los recursos hídricos, en el marco de las políticas y normas dictas por el Consejo Directivo y Jefatura de la

Autoridad Nacional del Agua (...). (Autoridad Nacional del Agua, 2017, p. 22)

Respecto a la cita señalada precedentemente a dicho órgano desconcentrado denominado Autoridades Administrativas del agua se le atribuye una serie de funciones, resaltando su facultad sancionadora, por la cual tiene la potestad de sancionar las conductas que son contrarias a la normativa en materia de agua cometidas por los administrados, mediante la aplicación de sanciones y otras medidas complementarias y así resguardar el recurso natural agua.

“(...) f) ejercer la facultad sancionadora, imponiendo sanciones y medidas complementarias por infracción a la normatividad en materia de aguas (...)”. (Autoridad Nacional del Agua, 2017, p. 23)

Según lo establecido en el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos la Autoridad Nacional del agua “(...) ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento” (...). (Autoridad Nacional del Agua, 2010, p. 73). En consecuencia, del ejercicio de la potestad sancionadora impone sanciones administrativas dependiendo de su nivel de gravedad.

“(...) 279.1 Las conductas sancionables o infracciones calificadas como leves darán lugar a una sanción administrativa de amonestación escrita, o de multa no menor de cero coma cinco (0,5) UIT ni mayor de dos (02) UIT.

279.2 Las conductas sancionables o infracciones calificadas como graves darán lugar a una sanción administrativa de multa mayor de dos (02) UIT y menor de cinco (05) UIT.

279.3 Las conductas sancionables o infracciones muy graves darán lugar a una sanción administrativa de multa mayor de cinco (05) UIT hasta diez mil (10,000) UIT.

279.4 Finalizado el procedimiento sancionador y tratándose de infracciones calificadas como leves, la Autoridad Administrativa de Agua podrá disponer, a solicitud del infractor, la sustitución de la sanción de multa por la de trabajo comunitario en la cuenca en materia de aguas, previa valorización de dicho trabajo.

279.5 Se podrá disponer la extinción del derecho de uso de agua otorgado, de acuerdo con las circunstancias agravantes de la conducta sancionable o infracción cometida (...). (Autoridad Nacional del Agua, 2010, págs. 75-76)

Como se puede apreciar en el artículo citado las sanciones que aplica dicha autoridad son de naturaleza administrativa, en el caso de la administración pública dicha sanción recae sobre el patrimonio del administrado, tal como sucede en el caso de las multas las cuales son impuestas en base a la unidad impositiva tributaria, cuyo rango abarca desde cero coma cinco (0,5) UIT hasta diez mil (10,000) UIT. Sin lugar a dudas las cantidades son exorbitantes para `puedan disuadir el comportamiento del infractor y de esta forma cumplir con lo establecido en el ordenamiento jurídico. La sanción que se imponga no debe ser más favorable que cometer el ilícito o asumir la sanción, aplicando el principio de razonabilidad el cual señala que se debe mantener “(...) la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar (...) para la satisfacción de su cometido (...)”. (Luchetti , 2009, p. 484-485)

Pese a ello las sanciones que aplica la administración pública son más atenuadas que las sanciones que aplica el Derecho Penal. Por ejemplo, la administración pública no sanciona con la privación de libertad, tan solo lo hace con amonestaciones, multas, así como si se trata de infracciones calificadas como leves se puede sustituir la multa por trabajo comunitario en la cuenca en materia de agua, para ello previamente se valoriza el trabajo y se podrá disponer la extinción del derecho de uso de agua otorgado, en consecuencia, de las infracciones cometidas por el administrado.

Por consiguiente, al tratar el tema de agua potable, la participación de las entidades prestadoras de servicio de saneamiento es primordial debido a que estas han sido constituidas con el propósito de brindar los servicios de agua potable y saneamiento. De ahí que la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) en su condición de organismo regulador se le asigna distintas funciones, resaltando la función fiscalizadora y sancionadora, por la cual puede imponer sanciones, así como medidas correctivas a las Empresas Prestador, cuando no cumplen con lo establecido en normas dictadas por ella y las obligaciones que provienen de la celebración de los contratos de concesión.

“(…) La función fiscalizadora y sancionadora permite a la SUNASS imponer sanciones y medidas correctivas a las Empresas Prestadoras (…) por el incumplimiento de las normas aplicables, de las disposiciones y/o regulaciones dictadas por la SUNASS y, de las obligaciones contenidas en los contratos de concesión (…)”.

(Ortiz & Rado, 2019, p. 181)

El ejercicio de dichas funciones se puede notar en las Resoluciones que emite el Consejo Directo de la Superintendencia Nacional de Servicios de

Saneamiento, pongamos por caso la Resolución de Consejo Directivo N° 021-2018-SUNASS-CD que aprueba “La modificación del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS”, la cual señala en su Artículo 32 respecto a los tipos de sanciones.

“(…) Las sanciones que impondrá la SUNASS por las infracciones tipificadas en el presente reglamento, son de tres tipos: (i) Amonestación Escrita. (ii) Multa. (iii) Orden de remoción. (...)”. (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, 2018, p. 32)

De la misma forma la Resolución de Consejo Directivo N° 011-2017-SUNASS-CD que aprueba el “Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento”, la cual señala en su artículo 126° las sanciones que podrán imponer las Entidades Prestadoras de Saneamiento, tales como:

“(…) a) Amonestación (...) b) Cierre Simple del Servicio de Agua Potable (...) c) Cierre Drástico del Servicio de Agua Potable (...) d) Cierre del servicio de Alcantarillado Sanitario (...) e) Levantamiento de las Conexiones (...)”. (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, 2007, pág. 339128)

Por tanto, las sanciones que se imponen en el ámbito de gestión de recursos hídricos son de naturaleza administrativa empezando por las sanciones que impone el ente regulador a las Entidades Prestadoras, tal como la amonestación escrita, consiste en realizar “(...) un llamado de atención al administrado infractor (...)”. (Gómez, Isla, & Mejía, 2010, p. 137), aplicada para aquellas infracciones que son graduadas como leves y que no merecen mayor reproche. De la misma forma la multa suele ser la sanción más temida porque afecta directamente el

patrimonio del administrado infractor, imponiendo sumas exorbitantes para poder disuadir el comportamiento del administrado y lograr su cumplimiento en posteriores obligaciones. También se impondrá como sanción la orden de remoción. A diferencia de aquellas sanciones que tiene facultad las Entidades Prestadoras para imponer a los administrados se encuentran el cierre del servicio de agua potable y alcantarillado, implica la interrupción de dichos servicios porque el administrado comete en reiteradas veces las infracciones.

Lamentablemente hoy en día no toda población puede acceder a los servicios de agua potable y saneamiento, pese a que ha sido declarado como derecho universal por ser un elemento vital. Una de las razones por la que se no se puede lograr el acceso universal del agua potable surge debido a la escasez hídrica. Si bien la mayor parte de nuestro planeta está conformado por agua, muy poca agua es apta para el consumo humano.

Es conveniente conocer de cerca la definición respecto a la escasez hídrica es por ello que se toma como referencia lo mencionado en el Informe *Afrontar la escasez de agua: Un marco de acción para la agricultura y la seguridad alimentaria* señala lo siguiente:

“(...) Basándose en el trabajo previo de Seckler et al. (1998) distingue dos tipos principales de escasez de agua (...) Se dice que la escasez física sucede cuando no hay agua suficiente para cubrir todas las demandas, incluyendo los caudales ecológicos. (...) La escasez económica de agua es una situación resultante de la falta de inversión en agua, o la falta de capacidad humana para satisfacer la demanda (...)”. (Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, 2013, p. 6)

Según lo señalado existen 2 tipos de escasez de agua, la escasez física se refiere cuando los recursos hídricos son insuficientes para abastecer todas las demandas, es decir no solo para abastecer el uso de consumo humano, sino otras demandas como en la agricultura, riego, industrias, etc. Muchas veces esa escasez se debe al crecimiento de la población, la urbanización, la contaminación ambiental y el constante desarrollo económico, generando consecuencias nocivas para los recursos hídricos.

Por el contrario, la escasez económica, está determinada por restricciones económicas de los países en vías de desarrollo para construir infraestructuras que permitan llevar el agua a las viviendas, ya que muchas veces el suministro disponible es insuficiente para abastecer a toda la población. Por lo que se requiere invertir en más infraestructuras y lograr el acceso universal al agua potable. Se han realizado varias conferencias, congresos y toda reunión posible a nivel mundial para establecer como meta que todas las personas de todos los países tengan el acceso al agua potable. Parece ser una meta inalcanzable, pese a los esfuerzos realizados por los países no se ha logrado.

Como consecuencia de esta preocupación diferentes países empezaron a reconocer el derecho al agua potable como derecho fundamental incorporado en la constitución, uno de esos países fue el Perú. Con el cual se planteaba como finalidad que toda población podría acceder a este derecho fundamental, asumiendo el Estado la tarea

“(…) de garantizarle cuando menos tres cosas esenciales: El acceso, la calidad y la suficiencia (...) se trata de facilitar un conjunto de supuestos mínimos que garanticen su goce o disfrute

por parte del ser humano o individuo beneficiario (...). (Caso Cesar Augusto Zuñiga López contra Corte Superior de Justicia de La Libertad, 2007, p. 5)

Uno de los supuestos mínimos por el cual el Estado garantiza este derecho fundamental es la realización de obras de infraestructura para prestar los servicios de agua potable y saneamiento, grandes cantidades de dinero son destinadas para su ejecución, pero muchas veces no se obtienen buenos resultados, la mayoría de obras son entregadas de manera deficiente e incluso inservibles, los funcionarios y servidoras se coluden con las constructoras a las que se le otorga la buena pro, sin realizar un debido procedimiento de selección para garantizar de esta manera un adecuado prestación de servicio de agua potable y saneamiento.

Después de haber descrito la normativa relacionada al agua tanto como recurso natural, como bien jurídico y como derecho fundamental y constitucional, merece principal atención determinar si son realmente efectivas, ya que una norma jurídica es definida

“(...) como un mandato dictado dentro del marco del poder del Estado, que debe ser cumplido en la vida social por las personas a las que va dirigido y respaldado por las fuerzas del Estado para caso de incumplimiento (...). (Rubio & Arce, 2019, p. 49)

De manera que al ser un mandato que dicta el Estado, se le atribuye la obligación de garantizar el cumplimiento, para ello debe implementar diversos mecanismos a fin de obtener resultados. Si se verifican diversas estadísticas que se brinda a nivel internacional como nacional se podrá determinar si las metas que se había trazado se han cumplido de manera íntegra o parcial.

Se ha tomado como referencia *El Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2019*, donde se señala:

“(…) Tres de cada diez personas (2.100 millones de personas, el 29% de la población mundial) no utilizaron un servicio de agua potable gestionado de forma segura, en 2015, mientras que 844 millones de personas aún carecían de un servicio básico de agua potable (...). De todas las personas que utilizan servicios de agua potable gestionados de manera segura, solo una de cada tres (1.900 millones) vivía en áreas rurales (OMS/UNICEF, 2017a) (...)”. (Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura., 2019, p. 20)

Según lo señalado en el informe, tres de cada diez personas no tienen el acceso a servicios de agua potable , como se puede inferir no toda la población goza de este derecho humano básico, pese a que ha sido establecido como objetivo de desarrollo sostenible, siendo el objetivo número seis garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y saneamiento para todos, como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, teniendo como meta que para el año 2030 se logró el acceso de manera universal y equitativo, mejorando su calidad.

Dicha preocupación a nivel mundial también se manifiesta en nuestro país, a pesar de ser considerado como uno de los países que cuenta con mayor cantidad de agua en el mundo, pese a ello Perú es el único país de Sudamérica que presenta problemas de escasez, debido a que un pequeño porcentaje constituyen tierras agrícolas y el recurso agua en el territorio no es suficiente para abastecer a la Población. Con el afán de tener un acercamiento a nuestra realidad es que se toma

como referencia lo señalado en el Informe elaborado por el Centro de Investigación Social y educación popular y centro de asesoría laboral del Perú (2005), el cual lleva como título *Desafíos de derecho humano al agua en el Perú* menciona lo siguiente:

“(…) En efecto, junto a su reconocida riqueza biogenética y ecológica es, sin embargo, el único país que enfrenta problemas concretos de escasez de agua y de tierras agrícolas; sólo 3.5% de 1’285,215 Km² de superficie son tierras de cultivo (…)”. (Centro de asesoría laboral del Perú- CEDAL y centro de investigación social y educación popular., 2005, p. 33)

Según lo mencionado en el Informe se hace referencia a la problemática que enfrenta el Perú respecto a proveer de agua potable a toda la población, y más aún lograr en unos pocos años que dicho acceso sea de manera universal y equitativa. Por ello se requiere que el agua potable goce de una mayor protección por parte de los instrumentos legales. Siendo una alternativa la aplicación del derecho penal para darle protección a este derecho fundamental, ya que a que nadie se le puede privar el acceso al agua, porque simplemente es un recurso natural, en otras palabras, es otorgado por la naturaleza.

Al hacer referencia a la eficacia de las normas implica que deben ser cumplidas, por consiguiente, los individuos a las cuales se dirige las normas deben respetarla y acatarla, debido a que la finalidad de la creación de una norma busca asegurar la convivencia armoniosa entre todos, así como que se respeten sus derechos y se cumplan los deberes que se imponen a los individuos. En cambio, si no se cumple con lo establecido se aplican sanciones, existiendo un efecto negativo para el infractor de la norma.

“(…) La eficacia de un orden jurídico consiste en el hecho de que generalmente los individuos a quienes se dirigen las normas se conforman con ellas y en caso de incumplimiento, se aplican también generalmente las sanciones previstas para tales supuestos (…)”. (Mendieta & Parra, 2011, p. 243)

La creación de una norma busca adecuar el comportamiento de los individuos “(…) como por ejemplo el control y disciplinamiento social (…)”. (Ciuro, 2006, p. 12) de la misma forma buscar el bienestar social, por ello el esfuerzo en lograr que surtan efectos, inclusive son incorporadas al texto constitucional para dotarlas de efectividad plena y que puedan ser aplicadas sin distinción para todos, ya sea en la exigencia de derechos, así como en el cumplimiento de los deberes impuestos.

Pese a todo lo descrito anteriormente, existe una insuficiencia del marco normativo vigente para su cumplimiento efectivo respecto al acceso al agua potable. En “(…) el país existe numerosas normas legales cuya vigencia efectiva es cero o cercana a cero (...) (Pásara, 2020, párr.1). La realidad del país no escapa de que somos productores de muchas normas, la mayoría de ellas no se cumplen y solo quedan plasmadas en el papel, para poner como ejemplo la constitución si se cumpliera con todos los derechos que se señalan en su cuerpo normativo, se tendría como resultado una nación perfecta, sin pobreza, que brinda las mismas oportunidades a todos, sin ningún tipo de discriminación, no dejando a nadie atrás. Lamentablemente no es así, si bien la creación de normas busca conseguir el bienestar social, y así evitar que los derechos sean menoscabados, ello no produce un efecto positivo. Aun estando establecidos en textos legales no se cumplen o se crean para proteger los intereses de un grupo de personas.

“(…) muchas veces, el Derecho, más que una herramienta para conseguir el bienestar social, resulta siendo una traba para éste porque asigna prerrogativas que no necesariamente se condicen con la realidad o protege más los intereses de un grupo de personas que el de otras, generando de esta forma conflictos (…)”. (Guevara , 2008, p. 14)

El acceso al servicio público de agua potable es una exigencia de vital importancia para que la colectividad tenga una vida digna. “(…) El agua toca todos los aspectos del desarrollo (...). Impulsa el crecimiento económico, apoya ecosistemas saludables y es esencial y fundamental para la vida misma. (...)”. (The World Bank, 2020, párr. 1), esta afirmación permite seguir reforzando la idea que el agua es de vital importancia no solo para realizar con normalidad nuestras actividades diarias su importancia es aún mayor debido a que se vincula directamente con el derecho a la salud de la misma manera lo es para el crecimiento económico esto se puede notar en la agricultura, considerada como una actividad primaria del sector económico de un país, sin la presencia del recurso natural agua no sería posible el desarrollo de las actividades agrícolas y otras actividades. Siendo exigencia que el Estado, implemente acciones para lograr esa finalidad, por ello una de las acciones consistió en incorporarlo en la constitución política peruana con el fin de garantizar el acceso a toda la población peruana.

Pese a los esfuerzos que realiza el Estado no ha logrado aminorar las brechas de acceso a este servicio público de vital importancia. Lamentablemente por actos de corrupción de los funcionarios públicos en el desempeño de sus

funciones, la prestación de los servicios públicos se torna deficiente, no pudiendo la colectividad gozar del beneficio de aquellos.

“(…) Solo el hecho de pensar que se suspende temporalmente el servicio de agua potable, genera incertidumbres por los problemas a la salud, peor aún, cuando existen lugares donde no llega el agua o el servicio es deficiente, por esta razón es primordial que esta temática sea abordada para buscar mecanismos y alternativas para cubrir estas necesidades ciudadanas que persisten en la actualidad (…).” (Nuñez, 2018, p. 38)

Pese a que se incorporó dicho derecho en la constitución esperando que así pueda garantizarse su cobertura a toda la colectividad, y así reducir las brechas que existen para tener acceso a este recurso. Existe una gran variedad de legislación que se ha elaborado para que se cumpla este derecho, siendo insuficientes, ya que el tiempo ha transcurrido y las deficiencias siguen siendo las mismas. Los instrumentos jurídicos con los que cuenta nuestro ordenamiento no son persuasivos para debilitar esta problemática. Por ello es necesario criminalizar todas aquellas conductas que atenten contra este derecho fundamental, ya que no se trata de un derecho de relevancia insignificante.

Son muchos los casos conocidos en nuestro país respecto a obras públicas de servicio de agua potable y saneamiento, en los que se invierten millones de soles para que puedan ser ejecutadas, sin embargo, por responsabilidad de algunos funcionarios públicos, las obras públicas no logran concretarse, no funcionan o al darse por concluida su construcción se muestran deficientes. Y lo más lamentable es que no buscan mecanismos para revertir dichas situaciones, en consecuencia, no se sanciona a las autoridades responsables.

Estas situaciones son un claro ejemplo de que la labor que cumple el funcionario público en que se realicen las obras públicas es de prevalencia, ya que debe resguardar los intereses públicos sobre los intereses particulares. Las actuaciones que realice el Estado deben estar guiadas por la búsqueda constante de convertir en realidad los intereses públicos; los funcionarios públicos deben custodiar los bienes y recursos del Estado, así como evitar que los empleen para favorecer sus intereses particulares. El servicio de agua potable y saneamiento es un servicio público vital, pese al reconocimiento de su vitalidad para el desarrollo de la vida, es uno de los servicios más olvidado y vulnerado por el Estado.

Se toma como referencia el informe desarrollado por Transparency International (2008), en el informe titulado: *Informe Global de la corrupción 2008, corrupción en el sector agua*, en la cual señala:

“(…) la población sin acceso a servicios de agua está aumentando. Las prácticas corruptas incrementan esta brecha, menoscaban las inversiones que podrían utilizarse para extender los servicios a los pobres, desvían los fondos destinados al mantenimiento de infraestructuras deterioradas y quitan dinero a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, que deben pagar cada vez mayores costos y sobornos para asegurarse el acceso al agua potable (…)”.
(Transparency Internacional the global coalition against corruption, 2008, p. 3-4)

Dicha cita confirma que una de las causas por la que la población no puede acceder al servicio de agua potable es la corrupción, todos los años el Estado invierte millones de soles en infraestructura de servicio de agua potable y saneamiento. “(…) El MVCS había proyectado invertir 13.7 millones de soles

durante el primer mes del 2020, pero destinó 20 millones de soles en proyectos de agua y saneamiento (...). (Andina agencia peruana de noticias, 2020, párr. 3). El Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento destino 20 millones para ejecutar proyectos de agua y saneamiento y de esta forma poder cerrar la brecha de acceso a este servicio que se encuentra en las diferentes regiones del país. Pese a ello las prácticas corruptas en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento son una de las causas por la que esta brecha vaya en aumento. Las autoridades de los gobiernos regionales y locales concentran los mayores casos relacionados con obras de servicio de agua potable y saneamiento, siendo los delitos más comunes en los que incurren dichas autoridades el delito de peculado y colusión, delitos comunes que se cometen contra la administración pública.

“(...) los tipos de delitos de corrupción más comunes en la administración pública: peculado y colusión. Estos dos primeros delitos concentran el 48.8% del total de casos a nivel nacional (...). Las que sobresalen en cantidad de casos son las instituciones públicas subnacionales, como las municipalidades distritales y provinciales, así como los gobiernos regionales (...)”. (Vega, Rojas, Elías, Koechlin, & Solórzono, 2018, p. 21)

Para ello se necesita estudiar otros mecanismos de protección para este servicio de vital importancia contando con el Derecho Penal. Como medio de control social se puede asegurar su protección y ejercer ese control en entorno a la responsabilidad de los funcionarios públicos, ya que tienen como deber para asegurar el bienestar general de la colectividad. Por ello se toma como referencia el artículo realizado por Rogelio Barba Álvarez titulado *El agua como derecho*

fundamental y su protección jurídico penal, quien recoge la reflexión de Blanca Lozano:

“(…) Por último, las razones por las que se debe criminalizar conductas en contra del agua según la reflexión de Blanco Lozano son: a) Por seguridad jurídica, al tratarse, el bien jurídico medio ambiente de un concepto excesivamente amplio y abstracto (...) b) La interpretación de los tipos penales y del propio título no solo menciona al medio ambiente sino a expresiones de salud, vida animal, bosques recursos naturales y recursos hídricos. c) La relevancia social de gran importancia del agua en la actualidad (...)”. (Barba Álvarez, 2011, pp. 221-222).

La protección jurídica del derecho agua en el ordenamiento penal peruano es encontrada en los títulos de delitos contra el patrimonio y delitos contra el medio ambiente, no siendo efectivo para abarcar la totalidad de conflictos relativos al agua potable. Un conflicto que sucede frecuentemente con este bien, es el relacionado con la corrupción por parte de los funcionarios públicos en la contratación pública, especialmente las obras relacionadas en el sector agua potable, siendo este un servicio público básico para la colectividad.

El Derecho Penal es aquella disciplina que regula la conducta de las personas cuando dichas acciones u omisiones son prohibidas por la ley penal, mediante la imposición de una pena, así se puede verificar que el Código penal hace la clasificación contenida en el artículo 28 de dicho ordenamiento, de lo cual se puede apreciar que existen “Penas privativas de libertad”, “Penas restrictivas de libertad”, “Penas limitativas de derechos” y “Penas de multa” (Decreto

Legislativo N° 635 CÓDIGO PENAL, 2016). De las muchas formas en que se puede imponer una pena se debe tener en cuenta una proporción existente entre la pena por aplicar y la responsabilidad del infractor; para ello se han creado circunstancias que modifican la responsabilidad penal, circunstancias relacionadas con hechos, modos, tiempos, etc. Pudiendo identificarse numerosos y distintos factores o indicadores que influyen en la realización de un delito, de esta forma se valora el delito como de menor o mayor gravedad, tal es el caso la disminución o aumento de los años respecto de la pena privativa de libertad como resultado de la valoración de las circunstancias que influyeron en tal actuación.

“(…) Las circunstancias son factores o indicadores de carácter objetivo que ayudan a la medición de la intensidad de un delito. Es decir, posibilitan valorar la mayor o menor desvaloración de la conducta ilícita, o el mayor o menor grado de reproche que cabe formular al autor de dicha conducta (…).” (Díaz , 2018, p. 56)

Bajo el entendido caso de esta relación entre la acción negativa y antijurídica sobre el bien que se pretende proteger y la sanción que se ha de aplica, surge la verificación del aspecto lesivo del derecho al agua potable, que se comporta en este caso como una cuestión agravada, toda vez que la primera acción que le corresponde al Estado es la generación de posibilidad de acceso con carácter universal, luego de ello, no sólo se estará atacando al derecho mismo sino que se desvirtúa la confianza depositada sobre el funcionario, por intereses particulares, esto es el quebrantamiento de la estructura que se ha construido como estrategia para garantizar tal derecho; todo ello condicionaría a que la intervención del derecho penal sea bajo la perspectiva de control de efectos graves o de mayor lesividad sobre el bien.

2.3.5. El Estado como garante de los servicios para los ciudadanos

La Constitución política señala que el Estado Peruano “(...) asume las características básicas del Estado Social y democrático de Derecho (...)”. (Gonzáles, 2004, p. 155). El carácter social que tiene el Estado conlleva a que asuma el deber de velar por los intereses de la población, de tal forma que prevalezca el interés público sobre el interés particular. El Estado dotado del carácter social tiene como fin supremo la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad lo que incide en que se exija el cumplimiento de sus derechos fundamentales, brindando un tratamiento apropiado a las necesidades de la población especialmente a los más pobres, quienes se encuentran en desventaja frente a los demás.

Los medios que utiliza el Estado para satisfacer las necesidades de la población son numerosos, uno de ellos es el deber de prestar servicios públicos a los ciudadanos con la finalidad que la población pueda tener una calidad de vida asociada a un bienestar individual o social. El Estado tiene la responsabilidad de asegurar la cobertura total de los servicios públicos mediante la elaboración de políticas, la toma decisiones y cualquier otra acción.

“(...) Estado social atiende a la vinculación social del Estado que se proyecta especialmente a través de la ayuda que debe prestar el Estado a las personas que se encuentren en situación de necesidad y, asimismo, a través de la exigencia de responsabilidad del Estado por la cobertura y por el funcionamiento del Estado en su conjunto (...)”. (Arana, 2015, p. 55).

Esta afirmación permite seguir reforzando la idea respecto de la participación del Estado en la prestación de los servicios públicos, cuyo concepto

va más allá de solo una actividad de la administración pública de regulación económica, ya que se trata de actividades económicas de importancia para la vida como los servicios de agua potable y saneamiento, energía, transporte, telecomunicaciones, etc. Es una exigencia de vital importancia para que la colectividad tenga una vida digna, exigencia que debe ser atendida por el Estado, el cual mediante la implementación de acciones logre dicha finalidad. Según Ochoa (2013), “nos referimos al profesor Luciano Parejo cuando afirma que la clave del servicio público en cualquiera de sus modalidades está en la exigencia de satisfacer necesidades sociales de interés general” (pág. 119), por lo tanto, es conveniente conocer los rasgos que permiten diferenciar a los servicios públicos de otras actividades.

Son actividades económicas que promueven el desarrollo del país, haciendo principal énfasis en que tiene una naturaleza indispensable para la población, respecto de la satisfacción de sus necesidades básicas, hay una variada gama de clasificaciones relacionada con las necesidades. Sin embargo, existe una jerarquía entre ellas “(...) En primer lugar se encuentran las necesidades fisiológicas que son las más básicas y más potentes de todas (...)” (Elizalde, Martí, y Martínez, 2006, p. 5). En otras palabras, las necesidades fisiológicas son las que deben ser satisfechas en primer lugar, como es el caso, la necesidad que tiene el hombre de alimentarse y beber agua. Si bien estas necesidades pueden ser satisfechas de manera individual también pertenecen a la sociedad, es decir forman parte del interés general, toda acción que desarrolle el Estado debe conllevar al beneficio de todos los ciudadanos.

Ahora bien, habiendo resaltado el carácter esencial que debe tener una actividad para que pueda ser calificada como servicio público. El Estado

proporciona una serie de servicios esenciales como “(...) el agua potable, y el saneamiento básico, la energía eléctrica, y el gas combustible, las telecomunicaciones, la educación y la salud (...)” (Matías, 2014, p. 326). Por consiguiente, el Estado utiliza los mecanismos necesarios para garantizarlos de manera universal y sin discriminación de ninguna índole, de los muchos servicios que son considerados esenciales, sin duda el servicio de agua potable y saneamiento merece importancia, al ser considerada el servicio de agua potable como una necesidad humana básica, que al ser satisfecha garantiza bienestar a la población. Según Torres (2011), señala que “(...) Al ser el agua un elemento indispensable y fundamental para la vida, se le concibe como una necesidad humana (...)”. (p. 696)

En el contexto de esta pandemia mundial la falta de acceso al agua potable fue uno de los roles protagónicos, parte de la población no cuenta con dicho servicio público y si se tiene acceso a dicho servicio es de mala calidad. Los principios que más destacan del servicio público de agua potable es el de igualdad en el acceso y universalidad, en este tiempo de aislamiento social la población más vulnerable salía en búsqueda de agua potable, el gobierno era renuente en establecer órdenes de no poder salir del hogar y no implementaba medidas para que pudieran tener agua potable. Las cisternas enviaban agua una vez a la semana ¿A caso se podía vivir con 4 litros de agua a la semana?

“(...) Finalmente, en una realidad donde se necesita invertir y reorganizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento (...) En este caso, el concepto de servicio esencial surge como una técnica que define realmente la naturaleza del servicio de agua potable y saneamiento, destacando entre sus

principios la igualdad en el acceso y la universalidad de la prestación (...)"'. (Mendoza, 2016, p. 380).

Tal circunstancia actual, permite observarla como una consecuencia de la incorrecta intervención del Estado, o más bien incompleta ejecución de la garantía que supone la incorporación del agua potable como derecho fundamental, por lo mismo que la acción de control de su parte deberá ser completada, pues según hasta lo advertido en esta tesis, requerirá de la aplicación de sanciones sobre lo referido a la contratación de servicios para la instauración de este derecho.

Es preciso traer a colación un acercamiento al concepto de ciudadano, muchos autores le conceden una definición tradicional, la cual la relaciona directamente con el ejercicio de derechos políticos, como resultado el ciudadano participa activamente en la toma de decisiones políticas del país por ejemplo ejerciendo el voto para elegir a una autoridad o ser candidatos para postular en cargos de elección popular, de esta forma contribuye y participa en el desarrollo del país. Sin embargo, el termino ciudadano tiene un significado más complejo que abarca una serie de derechos y libertades fundamentales.

Al tener el status de ciudadano podemos exigir que se respeten nuestra libertad de expresión, pensamiento, religión, etc. El debido ejercicio de dichas libertades garantiza la libertad individual, la cual es el fundamento de los derechos y deberes de la persona, es decir nos permite tomar decisiones para poder satisfacer nuestras necesidades esenciales para la vida y de la misma forma se debe asumir las consecuencias de nuestros actos. Ello manifiesta la existencia de una ciudadanía social, la cual agrupa un conjunto de derechos, como son los económicos, sociales y culturales. Derechos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas para poder desarrollar con plenitud una vida digna. Por ello

el termino ciudadanía abarca el ejercicio de muchos derechos, no tan solo políticos, tal como lo define La Organización de Estados Americanos y el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo, en el informe titulado *La Democracia de ciudadanía: Una agenda para la construcción de ciudadanía en América Latina*, lo define de la siguiente manera:

“(…) ciudadanía se retoma aquí la división en tres conjuntos de derechos (...) propuestos originalmente por Thomas H. Marshall (...) ciudadanía civil. Se compone de los derechos para la libertad individual (...) ciudadanía política. Consiste en el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros (...) Ciudadanía social (...) En su expresión en los cuerpos de derechos reconocidos por las Naciones Unidas, estos derechos se denominan “económicos, sociales y culturales” (...).” (Organización de los Estados Americanos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2009, pág. 16).

La división que se describe en la cita señalada precedentemente manifiesta que el término ciudadano no tan solo está definido por una dimensión política, sino también cuenta con una dimensión social y moral. La ciudadanía implica el ejercicio de los derechos que permiten que este puede satisfacer sus necesidades y convivir en armonía con los miembros de su comunidad. Ya que, para poder ejercer adecuadamente sus derechos políticos, este requiere previamente ejercer sus otros derechos fundamentales. Ya que, por simple hecho de ser humano, los derechos son inherentes a él. Se toma como referencia lo indicado por María

Teresa Muñoz Sánchez (2017), quien en su blog titulado *Ciudadanía y Derechos Humanos*, manifiesta lo siguiente:

“(…) Pero lo cierto es que, conforme a los ordenamientos jurídicos positivos nacionales y supranacionales, los derechos políticos se atribuyen al ciudadano y el resto de los derechos fundamentales o derechos del hombre se confieren a los seres humanos, independientemente de su ciudadanía (..)”. (párr. 14)

El Estado es el responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, ya que el ser ciudadano no solo implica el dotarlo de derechos políticos, la interpretación de ese término va más allá de ello, ya que considera que el status de ciudadano le permite reclamar todos sus derechos fundamentales sin distinción, y que siendo responsabilidad del Estado su protección, le corresponderá en base a estos fundamentos la aplicación de sanciones a todos los sujetos que se ocupen de limitar con sus actos, la ejecución de los derechos, como es el caso del agua potable.

Capítulo III

La naturaleza jurídica del tipo penal de colusión y la interpretación del bien jurídico protegido

En el presente capítulo se amplía el conocimiento sobre la naturaleza jurídica del delito de Colusión, uno de los puntos de importancia de la presente investigación. Por lo mismo que parte de la búsqueda de identificar el bien jurídico protegido no siendo únicamente el patrimonio de la nación, muy por el contrario, mediante el estudio de los diversos métodos de interpretación se logra identificar un bien jurídico colectivo asociado a la protección de los intereses públicos. El término interés público a través del devenir de los años ha ido evolucionando, en los inicios se defendía la idea de que el poder del Estado se centralizaba en el monarca como resultado de ello se cometían una serie de abusos contra la población. Después de esa etapa el Estado es renovado por el constitucionalismo, quien lo puntualiza como una organización caracterizada por la separación de poder, resaltando su preocupación por garantizar el interés general, siendo deber del Estado velar por el cumplimiento de dicho interés, con lo cual se podrá evidenciar que el adecuado estudio de los métodos de interpretación jurídica nos permite encontrar el verdadero sentido de una norma jurídica.

3.1. Definición de colusión como tipo penal

Una de las maneras en que el Estado satisface las necesidades de la población, cumple con sus objetivos y metas trazadas es mediante la adquisición de bienes, servicios y obras de infraestructura. Para poder adquirirlas necesita celebrar acuerdos con dos o más personas, siendo una de las partes una entidad de

la administración pública. En tal sentido la contratación pública mejora las condiciones de vida de la población mediante el otorgamiento de bienes y servicios con los que la población puede satisfacer sus necesidades básicas, es decir fomenta el desarrollo humano.

“(…) supone un conjunto de reglas y procedimientos que buscan, entre otros objetivos, la transparencia y competitividad, constituyéndose en el mecanismo por el cual el Estado se relaciona con terceros a efectos de obtener servicios, bienes u obras para el cumplimiento de sus objetivos, metas o funciones (…)”.

(Hernández Diez, 2012, p. 3).

En ese sentido, el sector público es el ámbito donde más se generan actos de corrupción y se configuran los delitos contra la administración pública, resaltando la figura del Delito de Colusión el cual “(…) se desenvuelve en el ámbito de la contratación pública (...)” (Peruano, 2012, pág. 467945). La contratación pública requiere de un procedimiento para cumplir con sus objetivos, el procedimiento se encuentra conformado por fases “(…) La primera de ellas, la llamada Fase de Actos Preparatorios (...). La Fase de Selección (...). Finalmente (...) la llamada Ejecución Contractual (...)” (Zambrano, 2009, p. 156). Las cuales se encuentran expuestas a que se produzcan una serie de irregularidades hasta llegar a la ejecución de la contratación pública, los contratos que celebra el Estado están relacionados con la adquisición de bienes, servicios y obras de infraestructura.

En varios países se han adoptado un conjunto de medidas para evitar actos de corrupción en la contratación pública, debido a que las consecuencias son asumidas directamente por el propio Estado, cuando no se da un adecuado uso a sus recursos públicos y por la población, disminuyendo su calidad de vida. Estas

conductas que atentan contra el correcto funcionamiento de la administración pública se encuentran enmarcadas en los delitos de infracción de deber. Cuando alguien decide trabajar para las entidades de la administración pública se subsume en la función pública, por esta razón sus fines son:

“(...) el Servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado (...)”. (Diario Oficial El Peruano, 2002, p. 228136)

El funcionario público tiene el deber de conducir sus actuaciones hacia la satisfacción de las necesidades de la población y lograr el bienestar general, excluyendo todo provecho o ventaja personal. Por consiguiente, el funcionario o servidor público tiene un deber especial, por ejemplo, actuar con respeto y honestidad, garantizar, proteger y cautelar el correcto funcionamiento de la administración pública. Estos delitos se caracterizan porque el autor del delito no pueden ser los particulares, sino que debe ser un funcionario o servidor público.

“(...) Son delitos de infracción de deber aquellos en los cuales lo único esencial para la autoría es el incumplimiento de un deber especial que interesa a un círculo de sujetos, como a los funcionarios públicos en los delitos de funcionarios o a los “garantes” quienes están obligados a la protección de manera especial de un bien jurídico (...)”. (Suárez, 2000, p. 15).

En tal sentido, en países como Argentina ha establecido en el art. 265 de su Código Penal el delito de Negociaciones Incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, el beneficio de haber establecido dicho tipo penal está orientado a “(...) la necesidad de mantener incólume la imparcialidad en las contrataciones del Estado (...)” (Sancinetti, 1986, p. 889). El tipo penal dispone que será privado de su libertad el funcionario público cuya actuación este dirigida a obtener un beneficio propio o a favor de un tercero en cualquiera contrato u operación que realice el Estado, que por motivo del cargo y funciones asignadas tenga participación directa, por persona interpuesta o por acto simulado infrinja su deber de velar por el correcto funcionamiento de la administración pública.

“(...) será reprimido con reclusión o de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, al funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo (...)”. (Pereira, 2019).

Algo similar ocurre con el delito fraude contra el Estado establecido en el Código Penal español establecido en el artículo 436, el cual señala que el autor del delito debe tener la cualidad de autoridad o funcionario público, en consecuencia, el funcionario tiene el deber de promover probidad e imparcialidad en los procedimientos de contratación pública, no haciendo un uso indebido de su cargo para beneficiarse así mismo o tercero, ya que su conducta será sancionada por incumplir su deber.

En la legislación española la sanciones para este delito son pena privativa de libertad hasta seis años e inhabilitación para ejercer un empleo o cargo público

y es interesante la inhabilitación para ejercer el derecho de sufragio por el plazo máximo de diez años. Dicha rigurosidad en las sanciones evidencia la importancia del deber que tienen los funcionarios públicos respecto a la cautela de la administración pública lo que incide directamente en el desarrollo de la sociedad.

“(...) La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública (...), se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años (...)”. (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal., 1995)

En cuanto a la legislación penal de Guatemala, ha establecido el delito de fraude en el artículo 450, enfatizando de manera expresa que incurre en este delito aquel funcionario o empleado publica que celebra un acuerdo para defraudar al Estado, algo similar ocurre con el delito de Colusión del Código Penal Peruano, el cual señala en su primer párrafo que debe existir una concertación con la finalidad de defraudar al Estado, entendido el termino defraudar como “(...) traicionar la confianza del Estado depositada en estos funcionarios (...)” (Declaran fundada demanda de inconstitucionalidad en extremo referido a la modificación del artículo 384° del Código Penal a través de la Ley N° 29703 y en consecuencia nulo y carente de todo efecto la expresión “patrimonialmente”, 2012, p. 467946). El Estado establece roles a los funcionarios y servidores públicos confiando en que harán su mejor esfuerzo para cumplirlos guiados por

los principios de respeto, probidad y honestidad, ante el quebrantamiento de los roles asignados los funcionarios o servidores públicos defraudan al Estado.

“(…) Artículo 450.- Fraude. El funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en alguna comisión de suministros, contratos, ajustes, o liquidaciones de efectos de haberes públicos, se concertare con los interesados o especuladores, o usare de cualquier otro artificio para defraudar al Estado, será sancionado con prisión de uno a cuatro años. (...)”.

(Rodríguez, 2011, p. 83).

En el Código Penal Peruano se sanciona aquellas conductas que impiden que se cumpla con la finalidad de la contratación pública cuando los funcionarios y servidores públicos defraudan al Estado, a este delito se le conoce con el nombre de Colusión, según el Diccionario de la Real Academia Española el termino colusión significa “(...) Pacto ilícito en daño de tercero (...)” (Real Academia Española, 2019,s/p). Es un acuerdo celebrado contrario al ordenamiento jurídico que ocasiona un perjuicio a un tercero siendo el principal afectado el Estado. Este delito opera principalmente en la esfera de la contratación pública, actividad que es afectada por la corrupción en sus diferentes fases, por ello existen dos variantes del delito que acogen dentro de su redacción los verbos rectores concertar y defraudar, haciendo énfasis en el término defraudar, en la colusión simple el funcionario o servidor público concierta con otros para defraudar al Estado; en cuanto a la colusión agravada, se defrauda patrimonialmente al Estado. Dicho de otra manera, el delito de Colusión se configura “(...) con la finalidad de defraudar los intereses del Estado (colusión simple) o ya defraude los intereses del Estado (colusión agravada) (...)” (Lasteros, 2017, p. 32).

De acuerdo a la recopilación de las reglas que incorporan al tipo penal de colusión en sus ordenamientos jurídicos de cada país, se puede advertir la presencia de un mismo verbo rector que se comprende como la defraudación, la misma que según lo referido por la definición general, sería el acto que desestima la confianza depositada en la persona, que para este caso será el funcionario público que se ocupa del servicio que se brinda en el Estado respecto al bien administración pública, vale decir el quebrantamiento de la confianza; este tipo de acción puede tener consecuencias directas e indirectas que permitan reconocer el nivel de lesión que se produce sobre el bien protegido, es por ello que se incluyen en el tipo penal circunstancias agravantes.

3.2. Alcance jurídico del tipo penal del delito de colusión

El título XVIII del código penal agrupa un conjunto de delitos que vulneran la administración pública, el título se divide en dos capítulos, el primer capítulo se titula delitos cometidos por particulares y el segundo capítulo se caracteriza porque dichos delitos son realizados por funcionarios públicos. Si bien es conocido que el Derecho penal y la administración pública tienen distintos ámbitos de protección en ambas ramas se protegen bien jurídicos de relevancia para la colectividad. La intervención del Derecho penal en la administración pública se debe a la importancia de proteger el correcto funcionamiento de aquella para que pueda cumplir con la finalidad de satisfacer el interés general y bien común de la sociedad, de la misma forma dicha protección se encuentra justificada por el Estado de Derecho el cual se caracteriza porque el ejercicio de su poder se encuentra limitado por lo establecido en la constitución, ley y derechos del ordenamiento jurídico.

“(…) La Administración Pública es producto de la sociedad donde nace, además de que entre ésta y los ciudadanos existe una interacción social por lo que su protección parte en la norma, especialmente en el derecho penal, de los legisladores y de la sociedad. Esta protección responde su sujeción a un Estado de Derecho (…)”. (Villegas, 2019, p. 42).

Si bien el bien jurídico protegido en el delito de Colusión es “(…) la asignación eficiente de recursos públicos en las operaciones contractuales que realice el Estado o en cualquier tipo de operaciones a cargo de éste (…)”. (Guimaray, 2011, p. 3). En otras palabras, el tipo penal protege el patrimonio del Estado entendido como el “(…) conjunto de bienes, derechos y obligaciones de titularidad estatal (...) se agrega como elemento de la definición, la función que el mismo cumple en la satisfacción de necesidades colectivas (...)”. (Mayer, 2007, pp. 227-228). Merece principal atención lo señalado por la autora respecto a la definición del patrimonio del Estado y más aún cuando son los mismos ciudadanos quienes mediante el pago de sus impuestos contribuyen al crecimiento de dicho patrimonio, así como a sostener los gastos que realiza el sector público en la provisión de bienes y servicios para satisfacer necesidades colectivas.

3.3.El interés de protección del tipo penal de colusión

El delito de Colusión se encuentra tipificado en el artículo 384 del Código Penal de la lectura del artículo se puede obtener el contenido de dicho tipo penal en base a los diferentes métodos de interpretación jurídica como la aplicación del método interpretativo gramatical, entendido como aquel que utilizando la ayuda de “(…) las reglas gramaticales y del uso del lenguaje, se indaga el significado de los términos en que se expresa una disposición normativa (...)” (Anchondo, 2012, p. 38). Mediante el significado de las palabras y términos jurídicos que utiliza el

legislador se descifra el mensaje que ha querido transmitir. Pareciese que el método de interpretación es superficial y muchas veces se niega a desentrañar el mensaje verdadero de lo establecido en la norma, debido a que en reiteradas ocasiones no existe un acuerdo respecto al contenido de la norma.

Uno de los verbos rectores del tipo penal por el cual se ha generado polémica es respecto al termino defraudar que aparece de manera explícita en el delito de colusión simple y agravada, si se realiza una lectura del tipo penal se puede extraer que se sanciona al funcionario o servidor público que en razón del cargo o función que ejerce concierne con otros para favorecerlos en cualquiera de las etapas de contratación pública, así como para la provisión de bienes y servicios desvaneciendo la confianza que el Estado había puesto en el funcionario.

De la misma forma en el mismo artículo se señala como agravante el hecho de defraudar patrimonialmente al Estado, es decir ya no solo se sanciona el simple quebrantamiento de la confianza, este se ve materializado mediante las afectaciones de los recursos públicos con los que cuenta el Estado para satisfacer necesidades de la población; producto de dicha interpretación, se generó controversia respecto a la configuración del tipo penal, respecto a si era necesario que se acreditara la defraudación patrimonial al Estado.

La Sala Penal Permanente realizó una interpretación del delito de colusión acogiéndose a lo manifestado por las Naciones Unidas respecto a los delitos de corrupción, se pronunció en la casación N°. 9-2018 Junín (2019):

“(…) La interpretación del mencionado tipo penal debe efectuarse conforme a la convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que en el inciso 2 de su artículo 3 establece: Para la aplicación de la presente convención, a menos que contenga una

disposición en contrario, no será necesario que los delitos enunciados en ella produzcan daño o perjuicio patrimonial al Estado (...).” (Caso José Severo Camacho Galván contra la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Huancayo, 2019, p. 3)

De acuerdo a la cita precedente el bien jurídico protegido por el delito de Colusión no es el perjuicio económico que se ocasiona al Estado, sino es el irregular desempeño del funcionario público, debido a que no cumple con sus deberes asignados por las normas. Cuando una persona forma parte de la administración debe guiar sus acciones con honestidad y transparencia cumpliendo con la misión que se les ha encomendado de convertir en realidad los intereses colectivos considerando que la mayoría de ellos son elegidos por voto popular. “(...) De modo que sustenta la sanción penal, la inobservancia de un deber específico que vincula al sujeto público con los fines del Estado (...)”. (Salinas Siccha, 2009, pág. 256).

Asimismo, cabe precisar que los funcionarios y servidores públicos tienen el deber de velar y custodiar los recursos públicos del Estado, más aún en los procesos de contrataciones públicas donde se espera que los procesos realizados sean transparentes e imparciales guiando su actuación por los principios que señalan las diferentes normas que regulan este tipo de materia.

Solucionada la discusión que el tipo penal de colusión no solo protege la defraudación patrimonial ocasionada al Estado, la mirada se amplía mucho más, respecto a la verdadera finalidad de proteger la administración pública. En mérito de la aplicación de la interpretación teleológica “(...) que pretende llegar a la interpretación de la norma a través del fin de la misma, buscando en su espíritu, que es la finalidad por la cual la norma fue incorporada al ordenamiento jurídico

(...)”. (Vega Crespo, 2010, pág. 28). Se interpreta el bien jurídico protegido del delito de colusión ya no tan solo desde una interpretación literal del tipo penal, sino se pretende ir más allá buscando la verdadera finalidad de la creación de la norma. Según Montoya (2015) :

“(...) El bien jurídico específicamente protegido en el delito de colusión desleal es la asignación eficiente de recursos públicos en las operaciones contractuales que el Estado lleve a cabo (...). Debe partirse de la premisa que afirma que la administración de recursos del Estado se ve reflejada en la entrega de servicios públicos. Estos buscan satisfacer las necesidades y condiciones mínimas o básicas que los ciudadanos necesitan para su desarrollo. Por este motivo, el uso o gestión eficiente e imparcial de los recursos es imperativo para hacer viable el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos (...)”. (p. 137)

Al respecto, resulta interesante lo señalado por el autor en relación al bien jurídico protegido en el delito de colusión, ya que la mayoría de autores señalan de manera superficial que protege el correcto funcionamiento de la administración pública y el patrimonio del Estado.

El bien jurídico protegido es la administración pública haciendo referencia que cuando el Estado celebra contrataciones públicas para la provisión de bienes y servicios, debe utilizar los recursos con los que cuenta de manera eficiente, maximizando los beneficios para la población, debido a que dichos recursos son financiados por la misma población a través del pago de sus impuestos. “(...) ya que cuanto más eficiente sea mayor ahorro de recursos conseguirá y, por tanto,

menos gasto será necesario para garantizar una cantidad determinada de servicios públicos a la sociedad (...).” (Rueda López, 2011, pág. 43).

Entonces, se puede deducir que la eficiencia en las contrataciones públicas es de responsabilidad de las autoridades a las cuales se les ha asignado la responsabilidad de administrar los recursos para que ejecuten obras y proyectos públicos, principalmente las obras de agua potable y saneamiento, tema que se está tratando en la presente investigación. Al darle un buen uso a los recursos se maximizarán los beneficios para la población, por ello el control se orienta para evitar que las autoridades formen parte de pactos colusorios para obtener beneficios propios o de terceros, de esta forma se estaría atentando contra las mejoras de calidad de vida de la población.

El autor precisa que la administración de recursos se ve reflejada en la entrega de servicios públicos, punto clave para reforzar la idea de ampliación del bien jurídico del delito de colusión, más aún cuando las consecuencias de dicho delito, afecta directamente a la población.

3.4.El aspecto patrimonial como justificación para agravar la sanción del tipo penal de colusión

Del tipo penal de colusión se puede apreciar en su segundo párrafo que se considera como circunstancia agravante el hecho de defraudar patrimonialmente al Estado, el concepto de patrimonio es entendido como “(...) un conjunto de derechos y obligaciones que pueden ser valorados económicamente (...)” (Iberley, 2020, párr. 1). Además de ello se consideran dentro del patrimonio del Estado a los diferentes bienes muebles e inmuebles que son entregados a las distintas entidades que conforman la administración pública.

Por tanto, resulta necesario precisar que lo que se pretende proteger al establecer esa circunstancia agravante es una eficiente distribución de los recursos económicos con los que cuenta el Estado, ya que estos recursos son destinados para satisfacer las necesidades de la población mediante el desarrollo de distintas labores como la construcción de obras de infraestructura para lograr una eficiente prestación de servicios públicos y un consecuente bienestar colectivo. Por ello “(...) Estos bienes deben ser utilizados de manera racional, evitando su derroche y uso para fines personales (...)”. (Lazo Morales, 2017, pág. 14). En tal sentido los funcionarios y servidores públicos tienen la obligación de brindar un adecuado uso a dichos bienes, evitando que sean utilizados para obtener beneficios propios o derrochándolo en actividades innecesarias como consecuencia de la corrupción.

Ahora bien, habiendo señalado la única circunstancia agravante que se señala en el delito de colusión, merece principal atención preguntar que si lesiona intereses sociales como el acceso al derecho fundamental del agua potable esta podría convertirse en circunstancia agravante. En nuestro ordenamiento jurídico penal se puede encontrar tipos penales que establecen como circunstancias agravantes cuando se afectan intereses sociales, pongamos como caso el delito de peculado el cual señala en su segundo párrafo que “(...) Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social.

En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce años (...)”. (Montoya, Chanjan, Novoa, Rodríguez, & Quispe, 2013, p. 87). Al respecto, cabe hacer hincapié en el significado de la palabra “fines asistenciales” y “programas de apoyo social”, términos que pese a su parecido tienen un contenido distinto, cuando el tipo penal señala que la sanción será mayor

en caso se afecte aquello que tenga como destino satisfacer una urgencia o necesidad de la población, debido al estado de vulnerabilidad que padece la población en ese momento el Estado de brindar la ayuda necesaria y sobre todo en el momento oportuno, debido a que se encuentran atravesando un riesgo real que pone en peligro bienes jurídicos valiosos como la vida, salud e integridad.

Por otra parte, los programas sociales se caracterizan porque son permanentes y se les asigna un presupuesto para que se pueda desarrollar sin ningún problema con el fin atenuar y desaparecer las carencias que tienen las familias que se encuentran en situación de pobreza, por esa vulnerabilidad en la que se encuentran, se sanciona el aprovechamiento por parte de los funcionarios y servidores públicos.

“(…) En el mismo sentido, Fidel Rojas Vargas ha desarrollado los fines asistenciales como “aquellas campañas de ayuda o auxilio destinadas a cubrir urgencias o necesidades de la población (en áreas de servicios: educación, salud, ambiente, etc), (…) mientras que la expresión programas de apoyo social haría alusión a “líneas o campañas de orientación estatal de carácter ya más permanente y con asignaciones presupuestarias para paliar los contrastes socio-económicos en las poblaciones necesitadas (…)”. (Bazán & Checco, 2020, p. 9)

Cabe señalar que, si bien algunos autores mencionan que la afectación al patrimonio del Estado es una circunstancia agravante en el delito de Colusión, hay otros que defienden la idea que el patrimonio estatal no debería ser considerado como el bien jurídico protegido; ya que, solo es un criterio de estimación en dinero de los bienes y recursos con los que cuenta el Estado, siendo más reprochable el

hecho que como consecuencia del mal actuar de los funcionarios y servidores públicos se atente contra intereses sociales.

Gracias a los recursos públicos con los que cuenta el Estado puede asegurar la realización de los derechos fundamentales de la ciudadanía como el derecho a la alimentación, salud, etc. Si bien el gobierno no puede prestar de manera directa los bienes y servicios a la población, cuenta con intermediarios como son los funcionarios y servidores públicos de los gobiernos regionales y locales, a quienes se les delega la administración de los recursos, se espera de aquellos funcionarios que actúen en beneficio de la población, ya que al formar parte de la administración pública se encuentran al servicio de la nación, es decir su centro de acción es el ciudadano, por ello deben realizar todo lo posible por satisfacer sus necesidades tanto individuales como colectivas.

En el tipo penal del delito de colusión se sanciona aquel funcionario que cualquier etapa de la contratación pública de bienes y servicios se colude con los interesados para defraudar al Estado, cuando se menciona a la contratación pública se debe tener en cuenta que el resultado final del proceso será un bien o servicio público como el de agua potable y saneamiento, es decir lo que debe primar es la finalidad social respecto al servicio de agua potable y saneamiento que se ve afectado por actos de corrupción y afecta directamente a la sociedad y más aún cuando se viene analizando de manera reiterada que el servicio de agua potable se relaciona con el derecho a la salud y a la vida.

(...) Finalmente Guimaray (2016) explica que se pueden extraer lo siguiente sobre el delito de peculado: a) El patrimonio no es un bien jurídico en los delitos contra la administración pública; es un criterio de valoración [tiene más pena el que lesiona intereses sociales (...),

mas no de prohibición, es decir, aun cuando se devuelva lo apropiado o el patrimonio apropiado no sea del Estado, el delito de corruptor subsiste. (...). (García Cárdenas, 2018, págs. 28-29)

Por esta razón si el ordenamiento jurídico reprocha con una mayor sanción cuando se afecta el patrimonio estatal, más aún debe ser cuando se afecta un servicio público cuya finalidad social es imprescindible para la salud y poder tener una vida digna, siendo notoria su importancia el Estado tiene la obligación de protegerla contra los diferentes actos de corrupción y aprovechamiento por parte de los funcionarios públicos, buscando el beneficio para todos sin discriminación alguna, sin olvidar que el acceso al servicio de agua potable es un indicador para que disminuya el nivel de pobreza. Lo que sanciona en los delitos de la administración es la forma como realizan el desempeño los funcionarios públicos, es decir si genera un perjuicio a la población se sanciona al funcionario por su mal actuar, debido a que está atentando contra la población, “(...) sino el propio desempeño de la función pública, por ser esto lo que puede llegar a afectar –en términos de perjuicio o beneficio– a la ciudadanía (...)”. (Rodríguez, 2005, p. 331)

3.5.El bien jurídico protegido en el delito de colusión.

Para iniciar la exposición sobre el bien jurídico protegido en el delito de Colusión, cabe señalar que un bien jurídico se reconoce como tal “(...) por el hecho de gozar de protección jurídica (...) el concepto abarca todo lo que a los ojos de la ley, en tanto que condición de la vida sana de la comunidad jurídica, es valioso para ésta (...)” (Jakobs, 1997, p. 50). En otras palabras, un bien jurídico es un bien material, inmaterial, situaciones y hechos valiosos para la comunidad jurídica, tal como la vida, libertad, integridad personal, salud, etc.

Al ser bienes y situaciones de vital importancia para la población se les debe brindar una adecuada protección para garantizar los derechos fundamentales de aquellos. Esta característica de vital importancia expresa su condición necesaria para que se justifique la aplicación de una sanción ante el menoscabo de algunos de ellos y evitar peligros que ocasionen perjuicios a la adecuada convivencia social.

El delito de Colusión al ser catalogado como un delito contra la administración pública tiene como bien jurídico genérico el correcto funcionamiento de la administración pública conducida por los funcionarios públicos, los cuales deben dirigir sus acciones a satisfacer las necesidades sociales de la comunidad. “(...) El hombre es (...) un animal social o político, en la medida en que necesita vivir en la polis, en la comunidad social y política para realizar sus propios fines (...)”. (Sanz, 2003, p. 2)

Por lo que se organiza en sociedad para hacer frente a las dificultades que se le presentan, por esta razón se dice que la Administración nace en la sociedad y se interrelaciona con los ciudadanos, principalmente con los funcionarios públicos los cuales tienen el deber de actuar “(...) con rectitud y honradez, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal (...)”. (Departamento de Derecho Internacional, OEA, 1999, párr. 34).

De manera que al incumplir con tales deberes el ordenamiento jurídico ha señalado una lista de sanciones ante el incumplimiento de sus deberes, tanto es así que la intervención del Derecho Penal también ha sido incorporada, esto se debe a sus fines principalmente “(...) el fin preventivo del Derecho penal (...) radica primordialmente en la protección de bienes jurídicos y solo secundariamente en la protección de la vigencia de la norma (...)”. (Alcácer Guirao, 1998, pág. 576).

En consecuencia, la intervención del derecho penal no solo radica en aplicar su poder coercitivo para que la población respete las normas establecidas en el ordenamiento jurídico.

De la misma forma su fin preventivo indica que busca evitar que los futuros se cometan delitos y de esta forma el Derecho penal cumple con su finalidad de proteger los bienes jurídicos. Al respecto opino que la intervención del Derecho Penal resulta necesaria respecto de ciertas conductas, cuando a pesar de la aplicación de controles administrativos y civiles no se logra brindar una protección efectiva a ciertos bienes jurídicos, ante el fracaso de dichos controles el único remedio aplicar es la sanción penal como un medio para el Derecho penal cumpla con su finalidad de proteger bienes jurídicos relevantes para garantizar el bienestar de la población, dicha protección se encuentra justificada por el Estado de Derecho el cual se caracteriza porque el ejercicio de su poder se encuentra limitado por lo establecido en la constitución, ley y derechos del ordenamiento jurídico.

Pongamos por caso, el bien jurídico vida considerado como el bien más importante de toda persona, cimiento para la realización de otros derechos fundamentales debe ser protegido mediante imposición de sanciones considerables cuando se cometen delitos de homicidio, feminicidio, asesinato, parricidio, etc. En el código penal peruano solo en algunos delitos y cuando concurren ciertas circunstancias se impone cadena perpetua cuando una persona quita la vida a otra, es el caso del artículo 108-B que regula el delito de feminicidio en su antepenúltimo párrafo “(...) La pena será de cadena perpetua cuando concurren dos o más circunstancias agravantes (...)” (Ministerio de Justicia y Derechos humanos, 2016, pág. 92). En igual forma el delito tipificado en el

artículo 108-B.- Sicariato “(...) El que mata a otro (...). Será reprimido con pena privativa de libertad de cadena perpetua (...)” (Ministerio de Justicia y Derechos humanos, 2016, pág. 93). Así como esos ejemplos existen muchos más tipos penales que protegen la vida como bien superior.

(...) Por regla general, no todo es considerado "bien jurídico penal" y, por el contrario, sólo algunos comportamientos pasarán a ser calificados como tales (...) El *ius necessitatis* expresará la "condición necesaria". Así, si no tenemos una respuesta favorable respecto a la "condición necesaria" dentro del marco jurídico-penal, como son la vida, la libertad, seguridad, honor, privacidad, etc. no se justificará la prohibición o el mandato (...) (Urquiza, 1998, párr. 53-54).

En el presente trabajo de investigación está enfocado en brindarle protección al bien jurídico agua considerado (...). Según Vásquez (2016), “que hace posible y garantiza la concretización de otros derechos fundamentales como la salud, la seguridad alimentaria y nutricional (...). En ese sentido se vuelve una condición necesaria y determinante de la vida”. (pág. 21) . Considero que el concepto de agua potable cumple con los presupuestos para ser clasificada como un bien jurídico colectivo, partiendo desde su concepción fundamental, el agua es un recurso valioso que permite a la población tenga una vida digna y hace posible la realización del derecho a la salud y a la vida, por ello se convierte en un recurso al que todos deben acceder sin distinción alguna, por tanto, debe cumplir con todas las condiciones necesarias de calidad y continuidad a través del tiempo.

El agua potable se relaciona con varios bienes jurídicos individuales resaltando los más importantes como es la salud y vida, en el caso del bien jurídico salud nuestra constitución señala en el artículo 2 que “(...) Toda persona tiene derecho: 1. A la vida (...)”. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019, pág. 41). Al ser un derecho reconocido por la constitución el Estado asume el deber de protegerlo y garantizarlo, el agua potable es un recurso esencial para la supervivencia por ello el Estado se encuentra obligado de utilizar distintos mecanismos para dotarlo de protección. De la misma forma el derecho nacional se poya en instrumentos internacionales que regulan la materia en estudio.

En el caso de la Observación 15 del Comité de Derechos económicos, sociales y culturales señala las obligaciones que deben cumplir los Estados partes para asegurar el pleno ejercicio de este derecho humano como es el agua potable. Dentro de las muchas obligaciones que se le imponen al Estado, resulta importante hacer énfasis en el deber de vigilar la realización del derecho al agua potable, este derecho se garantiza a través del acceso a los proyectos y obras de agua potable y saneamiento, acceso que muchas veces se ve interrumpido por la corrupción, a pesar que se asigna los recursos necesarios para su ejecución, las obras se quedan inconclusas o no se llevan a cabo, siendo la población la más perjudicada, por ello las autoridades regionales y locales deben tener una mayor diligencia y control durante la ejecución de las obras publicas de servicio de agua potable y saneamiento para que sean culminadas con éxito.

En la misma observación 15 se sigue acentuando el deber de las autoridades cuando se menciona que no solo se debe asegurar el acceso a dichas instalaciones también deben brindar un servicio de calidad que cumpla con todos

los estándares de calidad para que pueda ser apta para el consumo humano debiendo ser suficiente y continua en el tiempo, el servicio de agua potable no puede verse interrumpida o ser otorgada por intervalos de tiempo debido a que es utilizada todos los días y todo momento para realizar las actividades diarias.

Si bien, en los instrumentos internacionales se establece que este servicio debe ser continuo, en el país la realidad es distinta, pues hay comunidades donde se no se ejecutan proyectos de instalaciones de servicio de agua potable, por esta razón no pueden acceder al servicio y consumen el agua directamente de los ríos o de otros cuerpos de agua. El agua que se consume de los ríos no es apta para el consumo humano y trae consigo diversas enfermedades gastrointestinales poniendo en peligro la vida de las personas.

“(...) b) Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria (...) c) Garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre (...) g) Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al agua (...)”. (Naciones Unidas, 2002, págs. 13-14).

De todo lo desarrollado, se puede apreciar que el Estado se encuentra al servicio de la nación, siendo su prioridad satisfacer las necesidades básicas de la población mediante la ejecución de obras y la provisión de servicios públicos, en muchos casos dichos proyectos se ven afectados por la corrupción, siendo las mismas autoridades quienes teniendo el deber de custodiar y asignar de manera eficiente los recursos del Estado se ven involucrados en actos de corrupción coludiéndose con terceros para defraudar al Estado, el hecho de que varias

personas aún no tengan acceso al agua potable no solo se debe a la falta de recursos, también se origina “(...) cuando realmente lo que hay detrás es una falta de voluntad política para dar prioridad a los servicios sociales y, en particular, al agua y el saneamiento para los más desfavorecidos (...)”. (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 2017).

Otros de los bienes jurídicos que se protege cuando se asegura el derecho al agua potable es la salud, de todo lo mencionado con anterioridad al tener acceso al agua de calidad y salubre se garantiza la salud y prevención de enfermedades. Al respecto el agua potable es un bien jurídico colectivo porque no solo es necesario para una persona, también se caracteriza “(...) a partir de una relación social basada en la satisfacción de necesidades de cada uno de los miembros de la sociedad o de un colectivo (...)”. (Villegas, 2010, p. 17).

La misión del Estado ha evolucionado con el transcurrir del tiempo, si bien actualmente se puede notar la presencia de un Estado protector que asume diferentes medidas para lograr el ejercicio pleno de los derechos de cada uno de los ciudadanos, es decir protege bienes jurídicos individuales pongamos por caso el derecho a la vida, salud, integridad física y demás derechos que se les reconoce en las diversas normas del ordenamiento jurídico, también se nota la presencia de un Estado que se preocupa por satisfacer las necesidades básicas de la población, por aquellas necesidades que son comunes en toda población.

Por ejemplo, el derecho a la salud, al agua potable, un derecho que ha sido objeto de diferentes reconocimientos a nivel internación y nacional, todos los países del mundo han realizado esfuerzos por implementar mecanismos que otorguen protección a este derecho, cuando el Estado atiende las necesidades de

la población realiza un trabajo conjunto con los tres niveles de gobierno. Los gobiernos regionales y alcaldes tienen un rol muy importante, debido a que ellos se encuentran más cerca de la población y pueden percibir de manera directa cuáles son sus principales carencias y de esta forma brindar las soluciones.

“(…) el Estado pasó de ser un mero guardián de derechos a un interventor que atiende las necesidades de los miembros de la sociedad (...). El Estado asistencial, entonces, reconoce la existencia de bienes jurídicos individuales, pero al mismo tiempo, entiende que existen bienes jurídicos colectivos que no están por encima del individuo, sino que responden a sus necesidades (...)”. (Díaz Castillo, 2016, pág. 145).

En base a todo ello se puede considerar que al derecho de agua potable no se le ha dotado de suficiente protección en el ordenamiento jurídico peruano, debido a que los distintos controles que realiza el derecho administrativo sancionador y otras ramas del Derecho no son eficientes en dar resultados adecuados ante la vulneración de tal derecho fundamental. Se debe mostrar un mayor interés en este tipo de conductas que son realizadas por funcionarios y servidores públicos que son responsables de que las obras de servicio de agua potable se ejecuten en su totalidad, no formen parte de actos colusorios durante el curso de las contrataciones públicas que impidan que la población goce de acceso a este servicio indispensable.

Capítulo IV

Análisis y resultados

De acuerdo al señalamiento de la unidad de análisis en esta investigación, se ha tenido en cuenta la observación de dos aspectos para el reconocimiento de la viabilidad jurídica que corresponde a la implementación del bien jurídico en el tipo penal de colusión con el fin de contemplar de manera adecuada la protección del derecho fundamental al agua potable; ello en razón de la circunstancia relacional que se ubica entre la correcta administración pública que se ocupa de garantizar el ejercicio adecuado de las obras de servicios públicos con la ejecución de estas en función al agua potable.

4.1. Análisis de los resultados:

Para ello se ha construido dos niveles de análisis, el primero que corresponde a la verificación de los criterios jurisdiccionales que se aplican para decidir sobre los casos de colusión en el distrito judicial de Lambayeque, con lo cual se ha podido obtener el resultado que otorga la crítica de dichos planteamientos, dada la ausencia de una correcta motivación que se aprecia en los fallos.

De otro lado se ha tenido en consideración el uso de un formulario de encuesta para reconocer con su aplicación el nivel de validación de los expertos en derecho penal sobre el tema de la colusión y su vínculo con la protección del derecho fundamental al agua potable, dicho formato se trasladó a los especialistas en la materia en una cantidad determinada por la regla estadística de la conveniencia del investigador, bajo una muestra de 50 individuos, cuyos resultados se han tabulado y graficado adecuadamente.

4.1.1. Resultados del análisis jurisdiccional sobre el delito de colusión

De acuerdo a la información recibida mediante Oficio N°. 268-2021-P-CSJLA/PJ, por parte de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, se ha seleccionado 10 sentencias del delito de Colusión donde se puede apreciar el bien jurídico protegido del delito en mención, a fin de verificar su ámbito de protección, lo cual resulta de importancia para esta investigación.

1.- EXPEDIENTE	N ° 459-2014-93-1703-JR-PE-01
JUZGADO	PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL
DELITO	COLUSIÓN
ANÁLISIS	<p>En el considerando segundo de la sentencia se señala que el bien jurídico protegido es la regularidad, la buena imagen y el patrimonio de la Administración Pública, por lo que se reprocha la conducta deshonesta del funcionario, ya que como consecuencia de su mal actuar produce un menoscabo en el desempeño de sus funciones públicas, generándose una deficiencia en la prestación de los servicios que brinda a los ciudadanos.</p> <p>Se evidencia que el expediente en cuestión, presta especial atención al actuar del funcionario o servidor público, no solo reprochándolo porque produce un perjuicio económico al Estado, sino también porque disminuye el ejercicio de sus funciones, disminución que se expresa directamente en la prestación de servicios que brinda a la población, servicios que son indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la población y lograr el bienestar de la población.</p> <p>Las acciones del Estado deben estar dirigidas a satisfacer las necesidades básicas de la población, a través de la ejecución de obras y la adecuada prestación de servicios básicos, es decir dar prioridad al interés común frente a los intereses particulares de los funcionarios.</p>

1. EXPEDIENTE	N° 00853-2013-53-1706-JR-PE-07
JUZGADO	SETIMO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE CHICLAYO EN ADICIÓN A FUNCIONES EN EL DÉCIMO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL
DELITO	COLUSIÓN
ANÁLISIS	<p>En el fundamento primero de la sentencia se señala que el bien Jurídico busca proteger la regularidad y adecuado funcionamiento en el ejercicio de la función pública, así como proteger los principios de contratación pública. Es importante hacer énfasis respecto a los principios de la contratación pública que rigen el actuar de los funcionarios que intervienen en las contrataciones públicas, principalmente del principio promoción del desarrollo humano el cual indica que el fin del Estado es satisfacer las necesidades de su población, ya que el hombre es el beneficiario final de todos los bienes y servicios que el Estado promueve.</p> <p>Otro principio de igual importancia es el de eficiencia, mediante el cual los bienes o servicios que el Estado contrate, así como las obras que el Estado ejecute debe reunir requisitos de eficacia, ejecutarse dentro del plazo y cumplir con todas las condiciones señaladas en la ley. En el caso de las obras de agua potable y saneamiento no se cumple lo establecido en este principio, debido a que las obras quedan incompletas o no se llegan a ejecutar por el actuar de los funcionarios a cargo de este tipo de obras, perjudicando la salud de la población por no tener el acceso a este derecho reconocido por la constitución.</p>

2. EXPEDIENTE	N° 2707-2010-81-1706-JR-PE-03
JUZGADO	JUZGADO ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
DELITO	COLUSIÓN

ANÁLISIS	<p>En el fundamento quinto de la sentencia se señala que, para que se logre configurar el delito de colusión simple, es suficiente que el funcionario que tiene a su cargo un proceso de contratación pública quebrante sus deberes funcionales. Se evidencia que en el expediente de estudio el funcionario estableció condiciones de contratación para beneficiar a los particulares dejando de lado el interés público y en consecuencia perjudicando el bienestar de la población.</p> <p>La administración pública tiene como centro de atención el interés público, en base a este interés el Estado contrata bienes, servicios, puede ejecutar obras, programas y proyectos para ponerlos a disposición de los ciudadanos, sin embargo, los resultados resultan ser contrarios a dicho fin, no se logra cumplir con la finalidad para los que fueron pensados desde el inicio.</p> <p>El funcionario público tiene la obligación de actuar con rectitud, procurando satisfacer el interés general y obtener los mayores niveles de eficiencia de la organización estatal priorizando el uso de los recursos públicos y brindar una adecuada atención a la ciudadanía.</p>
-----------------	--

3. EXPEDIENTE	N° 03223-2014-61-1706-JR-PE-07
JUZGADO	JUZGADO ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
DELITO	COLUSIÓN

ANÁLISIS	<p>En el fundamento cinco de la sentencia se analiza respecto a la concertación para defraudar, ya que en el presente caso los intraneus han quebrantado la función especial asumida como servidor público en violación del principio de confianza depositada, siendo su actuar contrario a las expectativas e intereses patrimoniales del Estado.</p> <p>Para la configuración del delito no se requiere un perjuicio al patrimonio, pues si el funcionario público que tiene a su cargo un proceso de contratación quebranta sus deberes funcionales, incumpliendo con la transparencia en el proceso o instaurando ciertas condiciones de contratación para beneficiar a los terceros, ocasionando perjuicio a los intereses del Estado.</p> <p>Se puede apreciar en el expediente de estudio que el juzgador sanciona el hecho de que los funcionarios públicos se aparten de sus deberes funcionales y quebranten la confianza que el Estado ha depositado en ellos para el desarrollo de las actividades de administración pública.</p> <p>El cumplimiento de los deberes funcionales tiene como finalidad satisfacer las necesidades básicas de la población y obtener el mayor provecho posible de los recursos económicos con los que cuenta el Estado para proveer de bienes y servicios que resulten ser eficientes, desarrollándose en un plazo determinado y que cumplan con la finalidad por la que se inició todo el proceso de contratación pública. Producto de actos de corrupción en todas las etapas de los procesos de contratación no se logra cumplir con la finalidad señalada inicialmente</p>
-----------------	---

4. EXPEDIENTE	N° 03941-2017-65-1706-JR-PE-10
JUZGADO	JUEZ DEL DÉCIMO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
DELITO	COLUSIÓN

ANÁLISIS	<p>Se puede apreciar del expediente en estudio, específicamente en el fundamento primero y segundo que la defraudación de los intereses del Estado en el delito de colusión implica vulneración a los deberes inherentes a los cargos de funcionarios y servidores públicos, ya que aquellos actúan en representación del Estado protegiendo los intereses colectivos y no sus intereses propios o de terceros, lográndose resultados favorables y beneficiosos tanto para el Estado como las demás partes.</p> <p>La finalidad del proceso de contratación pública es proveer de bienes, servicios, proyectos, obras a la comunidad para lograr atenuar las deficiencias de la población respecto a los diferentes aspectos sociales como salud, suministro de servicios públicos, etc.</p> <p>Si un proceso de contratación pública fuera desarrollado cumpliendo con los principios de transparencia y demás que forman parte de la gran gama de los principios que se encuentran inherentes a la administración pública se obtendrían resultados óptimos, no solo referido al aspecto patrimonial, sino también en favor de los intereses colectivos. Las obras de agua potable y alcantarillado suelen ser obras mal ejecutadas, inconclusas o no realizadas, perjudicando el nivel de vida de la población y haciendo más vulnerables a los que ya lo son.</p>
-----------------	--

5. EXPEDIENTE	N° 03981-2014-20-1708-JR-PE-01
JUZGADO	JUZGADO PENAL UNIPERSONAL - LAMBAYEQUE
DELITO	COLUSIÓN

ANÁLISIS	<p>Se puede evidenciar de la sentencia en estudio, principalmente en su fundamento primero y segundo que se señala como ámbito de protección la tutela penal de la regularidad, prestigio, normal funcionamiento de la administración pública y los intereses de carácter patrimonial de la Administración.</p> <p>El correcto funcionamiento de la administración pública es reconocido como un valor constitucional protegido, cuyo ejercicio garantiza los derechos fundamentales de todas las personas. Ante tal importancia es fundamental que el Estado a través de sus diferentes entidades implementen instrumentos para dotarla de protección.</p> <p>Estos mecanismos pueden ser jurídicos como la acción de implementar el código penal con modificaciones en el tipo penal de Colusión, recientemente se establecieron circunstancias agravantes, señalando que los funcionarios y servidores públicos que incurran en delitos contra la administración pública durante el estado de emergencia sanitaria o calamidad pública, la pena sería mayor e iría acompañada de la pena de inhabilitación. Sin embargo, el tipo penal no es específico, la redacción del tipo penal debe ser más específica respecto a las obras de agua potable y saneamiento, el cual es un servicio de vital importancia para el bienestar de la población. Este servicio está relacionado directamente con el derecho a la salud por ende debe dotársele de todos los mecanismos de protección para hacer posible su realización</p>
-----------------	--

6. EXPEDIENTE	N° 4195-2012-64-1706-JR-PE-03
JUZGADO	DÉCIMO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
DELITO	COLUSIÓN

ANÁLISIS	<p>En el fundamento quinto de la sentencia se señala como bien jurídico protegido el normal y correcto funcionamiento de la administración pública, la cual debe ser guiada por una serie de principios como el de rectitud y honestidad, para mantener una imagen intachable frente a la ciudadanía, es decir que las diferentes actividades que realiza el Estado a través de la administración pública deben ser aceptadas por toda la población.</p> <p>Esta buena imagen es proyectada por funcionarios y servidores públicos que laboran en la administración, los cuales deben velar por el cumplimiento de los intereses colectivos frente a los intereses de sí mismo o de terceros.</p> <p>La administración pública se encuentra constantemente en la búsqueda de restablecer la confianza en la sociedad, confianza que se ha sido agrietada por los múltiples actos de corrupción y más en el ámbito de la contratación pública. De ahí la importancia de que quienes conforman la administración pública asuman el compromiso de cumplir con las funciones que les designan, ya que de su actuar depende el normal y correcto desarrollo de todas las etapas de la contratación pública.</p> <p>Debido a los actos de corrupción en los que se encuentran inmersos perjudican no solo al Estado, sino también a la población, la cual se ve perjudicada por no tener acceso a los diferentes servicios que el Estado brinda, especialmente el servicio al agua potable.</p>
-----------------	---

7. EXPEDIENTE	N° 05339-2016-56-1706-JR-PE-06
JUZGADO	DÉCIMO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
DELITO	COLUSIÓN

ANÁLISIS	<p>En el fundamento primero de la sentencia se establece como bien jurídico protegido el buen funcionamiento de la administración pública, dirigiéndose alcanzar metas respecto a la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad, satisfacción que se logra a través de la prestación de los servicios que garanticen su bienestar, lo cual significa que los funcionarios y servidores públicos que tienen a su cargo la provisión de dichos servicios deben actuar de manera honesta en todas las etapas de la contratación pública y distribuir de manera equitativa en toda la población, todos tienen el derecho de recibir el mismo trato respecto de los servicios que presta el Estado.</p> <p>Los funcionarios y servidores públicos dentro del ámbito de la administración pública tienen que hacer todo lo posible para prestar estos servicios de manera oportuna, por ejemplo, en el servicio de agua potable no puede operar una semana y la siguiente semana ya no estar operativo, más cuando se trata de un servicio público esencial.</p> <p>Resulta imprescindible que los funcionarios y servidores públicos que se encargan de proveer de bienes y servicios a la población, debe establecer mecanismos para una adecuada provisión de los servicios básicos.</p>
-----------------	---

8. EXPEDIENTE	N° 580-2017-20-1708-JR-PE-01
JUZGADO	DÉCIMO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE CHICLAYO
DELITO	COLUSIÓN
ANÁLISIS	<p>En el fundamento tres de la sentencia hace referencia al bien jurídico protegido en el delito de colusión, manifestando que se trata de la asignación eficiente de los recursos públicos en las operaciones contractuales que el Estado lleva a cabo. Según este fundamento la administración pública tiene el deber darle un uso eficiente a la población a través de las diferentes obras, proyectos y servicios públicos. Los cuales buscan satisfacer las necesidades primordiales de la comunidad. Uno de los servicios públicos de vital importancia para el desarrollo de la vida es el agua potable, un servicio necesario todos los días y en todas las horas del día.</p> <p>Gracias al uso eficiente de los recursos con los que cuenta el Estado se pueden ejercer derechos fundamentales, satisfacer el interés general frente a intereses particulares, debiendo los funcionarios y servidores públicos cumplir con las funciones asignadas.</p>

9. EXPEDIENTE	N° 09538-2016-9-1706-JR-PE-07
JUZGADO	DÉCIMO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
DELITO	COLUSIÓN
ANÁLISIS	<p>En el fundamento cinco de la sentencia se hace hincapié sobre el bien jurídico protegido en el delito de colusión simple, el cual no sólo tiene un contenido patrimonial, debido a que se trata de un delito de peligro. Lo que busca el delito de colusión simple es asegurar o mantener esa expectativa que tiene la sociedad en cuanto a los deberes que posee el funcionario público, en las etapas de la contratación pública.</p> <p>Resulta importante restaurar la confianza en la sociedad respecto de las actividades que se realizan en la administración pública y más aun de aquellos que prestan sus servicios para hacer posible los fines primordiales que tiene el Estado, como velar por la entrega adecuada y eficiente de los servicios públicos a la población. La población muestra su disconformidad con el actuar de los funcionarios y servidores públicos que se ven involucrados en actos de corrupción y más aún cuando defraudan la confianza que el Estado les entrega, esa defraudación no solo va dirigida al Estado sino también a la población, quienes resultan ser los más perjudicados.</p>

4.1.2. Resultados de la opinión de operadores jurídicos

Según lo indicado al inicio de este capítulo, la función de esta parte del análisis es el reconocimiento de la validación que otorgan los expertos sobre las posturas que se han planteado en la investigación, para lo cual se elaboró un formato de encuesta que se construyó mediante la secuencia de afirmaciones, basadas en la estructura que otorgan las variables.

Sobre cada uno de los ejes temáticos se han planteado tres niveles de afirmación, la primera que constituye un elemento conceptual, la segunda que se ocupa del nivel crítico y finalmente la propuesta que se proyecta como posible solución al problema desencadenado en razón de cada variable. Tal formulario fue trasladado a los especialistas que en tanto operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque han respondido dicha encuesta, proyectando los resultados que se muestran a continuación debidamente tabulados y con las gráficas porcentuales que permiten el reconocimiento del nivel de validación.

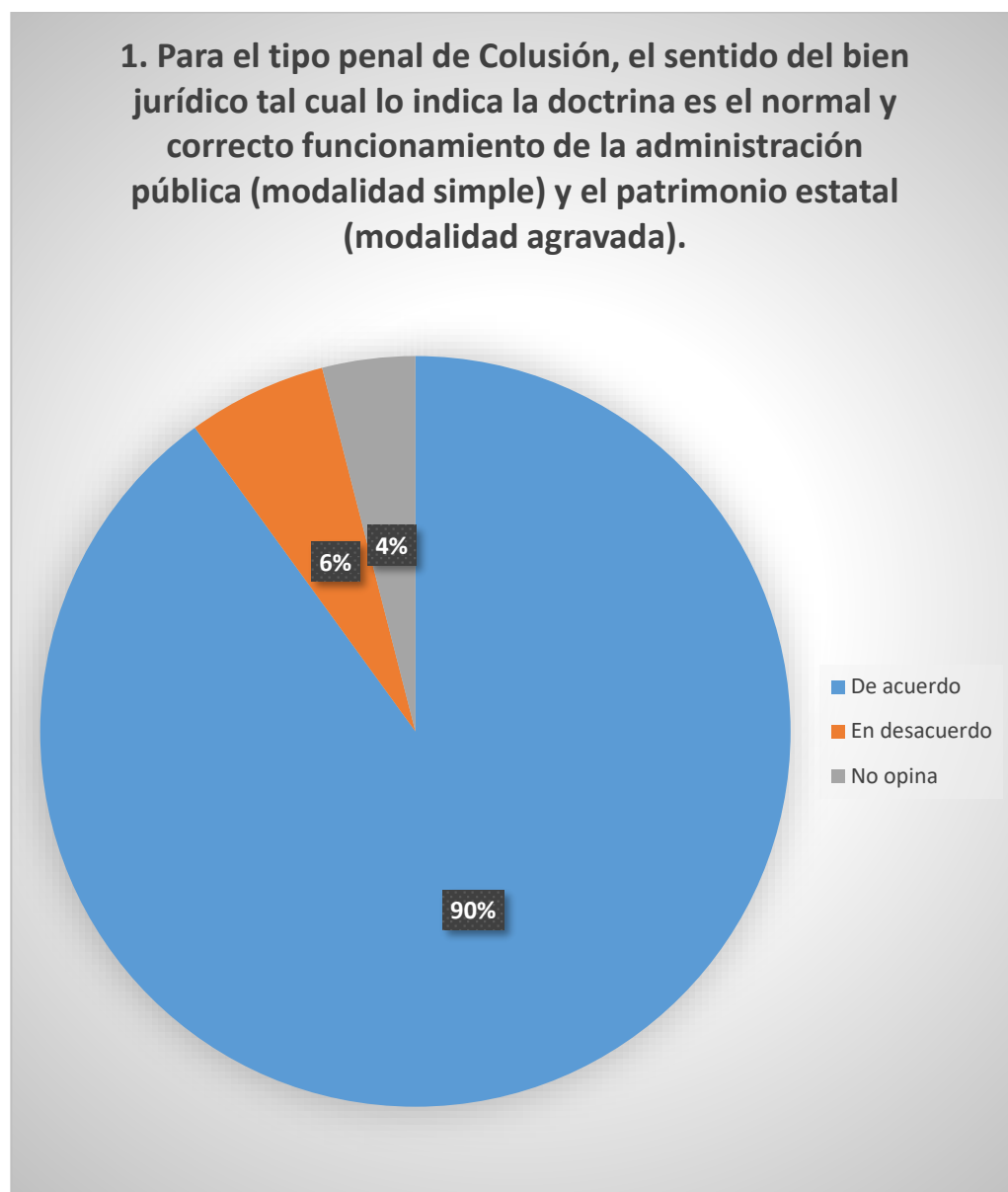
Tabla 1: “Resultados tabulados en base a la recopilación de la opinión de los especialistas en derecho penal en los juzgados de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 1”.

1.- AFIRMACIÓN: Para el tipo penal de Colusión, el sentido del bien jurídico tal cual lo indica la doctrina es el normal y correcto funcionamiento de la administración pública (modalidad simple) y el patrimonio estatal (modalidad agravada).

Alternativas	Resultados
De acuerdo	45
En desacuerdo	03
No opina	02
TOTAL	50

Lectura: Según los resultados que permitieron la tabulación anterior, se puede verificar que sobre la afirmación: Para el tipo penal de Colusión, el sentido del bien jurídico tal cual lo indica la doctrina es el normal y correcto funcionamiento de la administración pública (modalidad simple) y el patrimonio estatal (modalidad agravada); es de apreciar un número de 45 especialistas que han contestado la encuesta a favor de esta definición planteada por la investigación, entre tanto que 03 de los individuos participantes señalan no estar de acuerdo y 02 del total han preferido reservar su opinión.

Ilustración 1: “Gráfica de acuerdo a porcentajes sobre los resultados tabulados en base a la recopilación de la opinión de los especialistas en derecho penal en los juzgados de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 1”.



OBSERVACIÓN: De acuerdo a los resultados que se han obtenido de la graficación porcentual, se puede apreciar que la población jurídica encuestada tiene una apreciación similar a la que plantea esta postura puesto que alcanza el 90 % de aceptación, lo cual permite verificar la validación de parte de esos expertos. Siendo importante indicar que se trata de una definición general del tipo penal de colusión respecto al bien jurídico.

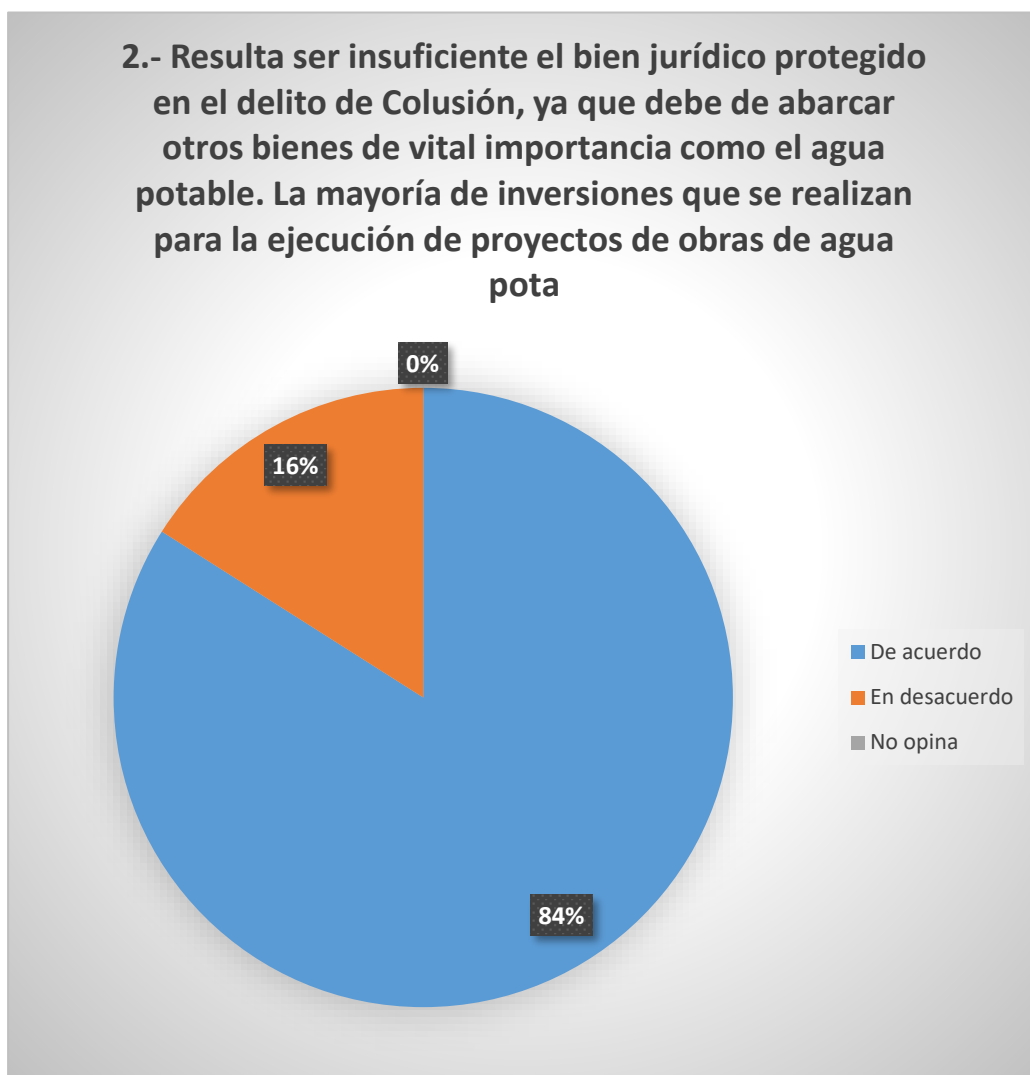
Tabla 2: “Resultados tabulados en base en base a la recopilación de la opinión de los especialistas en derecho penal en los juzgados de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 2”.

2.- AFIRMACIÓN: Resulta ser insuficiente el bien jurídico protegido en el delito de Colusión, ya que debe de abarcar otros bienes de vital importancia como el agua potable. La mayoría de inversiones que se realizan para la ejecución de proyectos de agua potable son menoscabados por prácticas corruptas siendo en el escenario de las contrataciones públicas afectando directamente a la población en sus derechos fundamentales.

Alternativas	Resultados
De acuerdo	42
En desacuerdo	08
No opina	00
TOTAL	50

Lectura: Según los resultados que permitieron la tabulación anterior, se puede verificar que sobre la afirmación: Resulta ser insuficiente el bien jurídico protegido en el delito de Colusión, ya que debe de abarcar otros bienes de vital importancia como el agua potable. La mayoría de inversiones que se realizan para la ejecución de proyectos de agua potable son menoscabados por prácticas corruptas siendo en el escenario de las contrataciones públicas afectando directamente a la población en sus derechos fundamentales; es de apreciar un número de 42 especialistas que han contestado la encuesta a favor de esta definición planteada por la investigación entre tanto que 08 de los participantes señalan no estar de acuerdo y 00 del total han preferido reservar su opinión.

Ilustración 2: “Grafico de acuerdo a porcentajes sobre los resultados tabulados en base a la recopilación de la opinión de los especialistas en derecho penal en los juzgados de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 2”.



OBSERVACIÓN: De acuerdo a los resultados que se han obtenido de la graficación porcentual, se puede apreciar que la población jurídica encuestada tiene una apreciación similar a la que plantea esta postura que alcanza el 84% de aceptación, lo cual permite verificar la validación de parte de estos expertos. Siendo importante indicar que se trata de una afirmación que planteo en mi tesis.

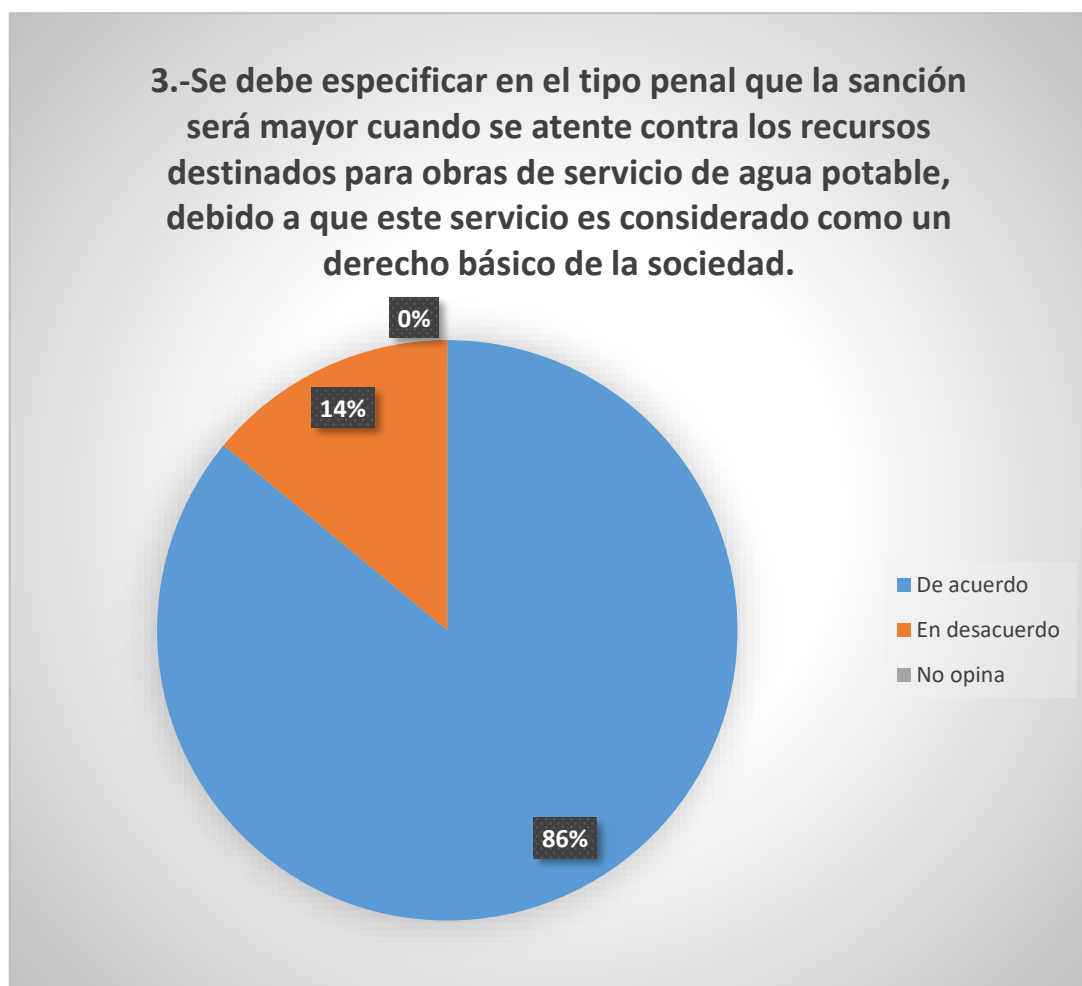
Tabla 3: “Resultados tabulados en base en base a la recopilación de la opinión de los especialistas en derecho penal en los juzgados de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 2”.

3.- AFIRMACIÓN: Se debe especificar en el tipo penal que la sanción será mayor cuando se atente contra los recursos destinados para obras de servicio de agua potable, debido a que este servicio es considerado como un derecho básico de la sociedad.

Alternativas	Resultados
De acuerdo	43
En desacuerdo	07
No opina	00
TOTAL	50

Lectura: Según los resultados que permitieron la tabulación anterior, se puede verificar que sobre la afirmación: Se debe especificar en el tipo penal que la sanción será mayor cuando se atente contra los recursos destinados para obras de servicio de agua potable, debido a que este servicio es considerado como un derecho básico de la sociedad; es de apreciar un número de 43 especialistas que han contestado la encuesta a favor de esta afirmación planteada por la investigación, entre tanto que 07 de los participantes señalan no estar de acuerdo y 00 del total han preferido reservar su opinión.

Ilustración 3: “Grafico de acuerdo a porcentajes sobre los resultados tabulados en base a la recopilación de la opinión de los especialistas en derecho penal en los juzgados de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 3”.



OBSERVACIÓN: De acuerdo a los resultados que se han obtenido de la graficación porcentual, se puede apreciar que la población jurídica encuestada tiene una apreciación similar a la que plantea esta postura que alcanza el 86% de aceptación, lo cual permite verificar la validación de parte de estos expertos.

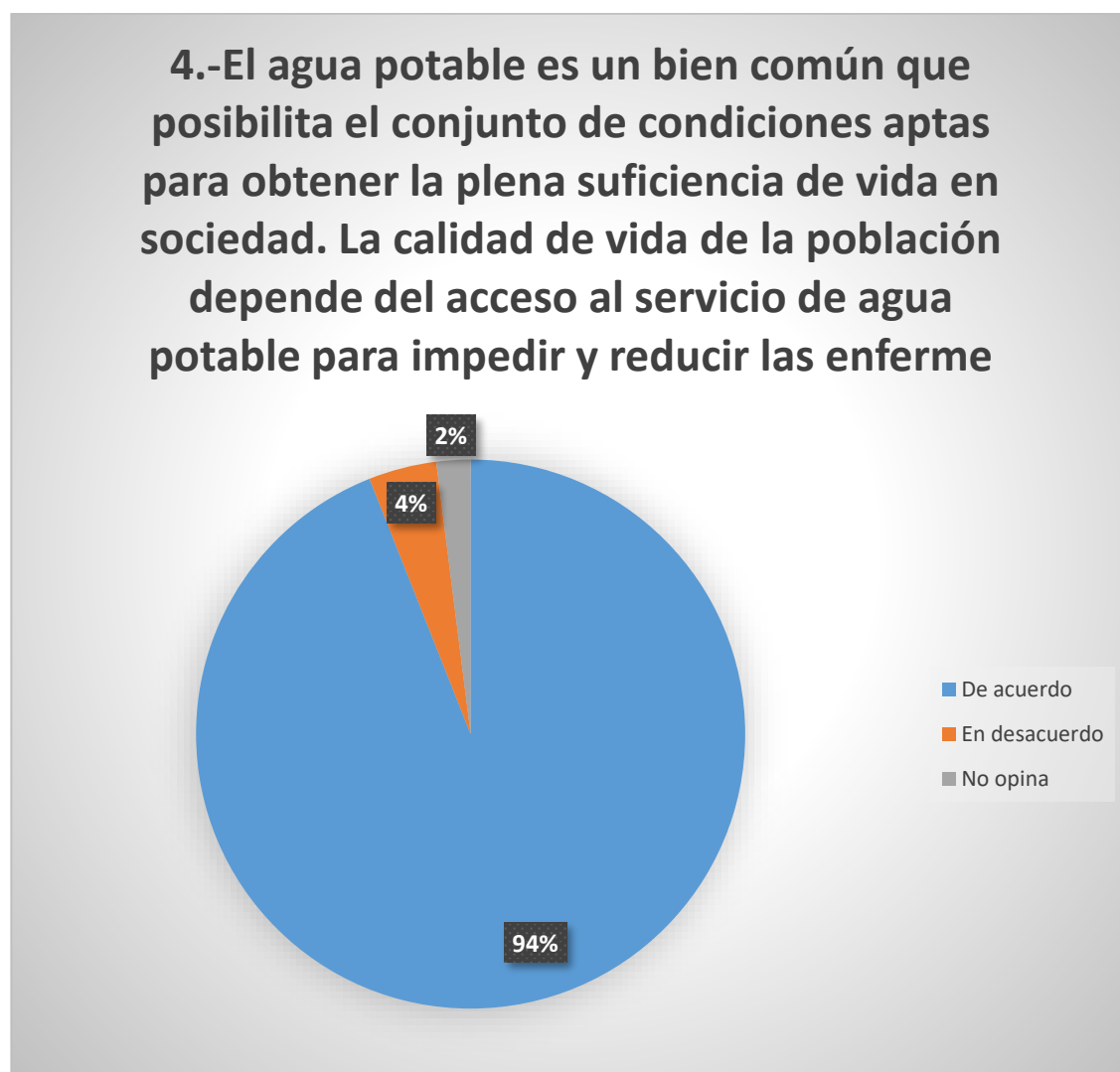
Tabla 4: “Resultados tabulados en base a la recopilación de la opinión de los especialistas en derecho penal en los juzgados de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 4”.

4.- AFIRMACIÓN: El agua potable es un bien común que posibilita el conjunto de condiciones aptas para obtener la plena suficiencia de vida en sociedad. La calidad de vida de la población depende del acceso al servicio de agua potable para impedir y reducir las enfermedades relacionadas con dicho servicio.

Alternativas	Resultados
De acuerdo	47
En desacuerdo	02
No opina	01
TOTAL	50

Lectura: Según los resultados que permitieron la tabulación anterior, se puede verificar que sobre la afirmación: El agua potable es un bien común que posibilita el conjunto de condiciones aptas para obtener la plena suficiencia de vida en sociedad. La calidad de vida de la población depende del acceso al servicio de agua potable para impedir y reducir las enfermedades relacionadas con dicho servicio; es de apreciar un número de 47 especialistas que han contestado la encuesta a favor de esta definición planteada por la investigación, entre tanto que 02 de los participantes señalan no estar de acuerdo y 01 del total han preferido reservar su opinión.

Ilustración 4: “Grafico de acuerdo a porcentajes sobre los resultados tabulados en base a la recopilación de la opinión de los especialistas en derecho penal en los juzgados de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 4”.



OBSERVACIÓN: De acuerdo a los resultados que se han obtenido de la graficación porcentual, se puede apreciar que la población jurídica encuestada tiene una apreciación similar a la que plantea esta postura que alcanza el 94% de aceptación, lo cual permite verificar la validación de parte de estos expertos.

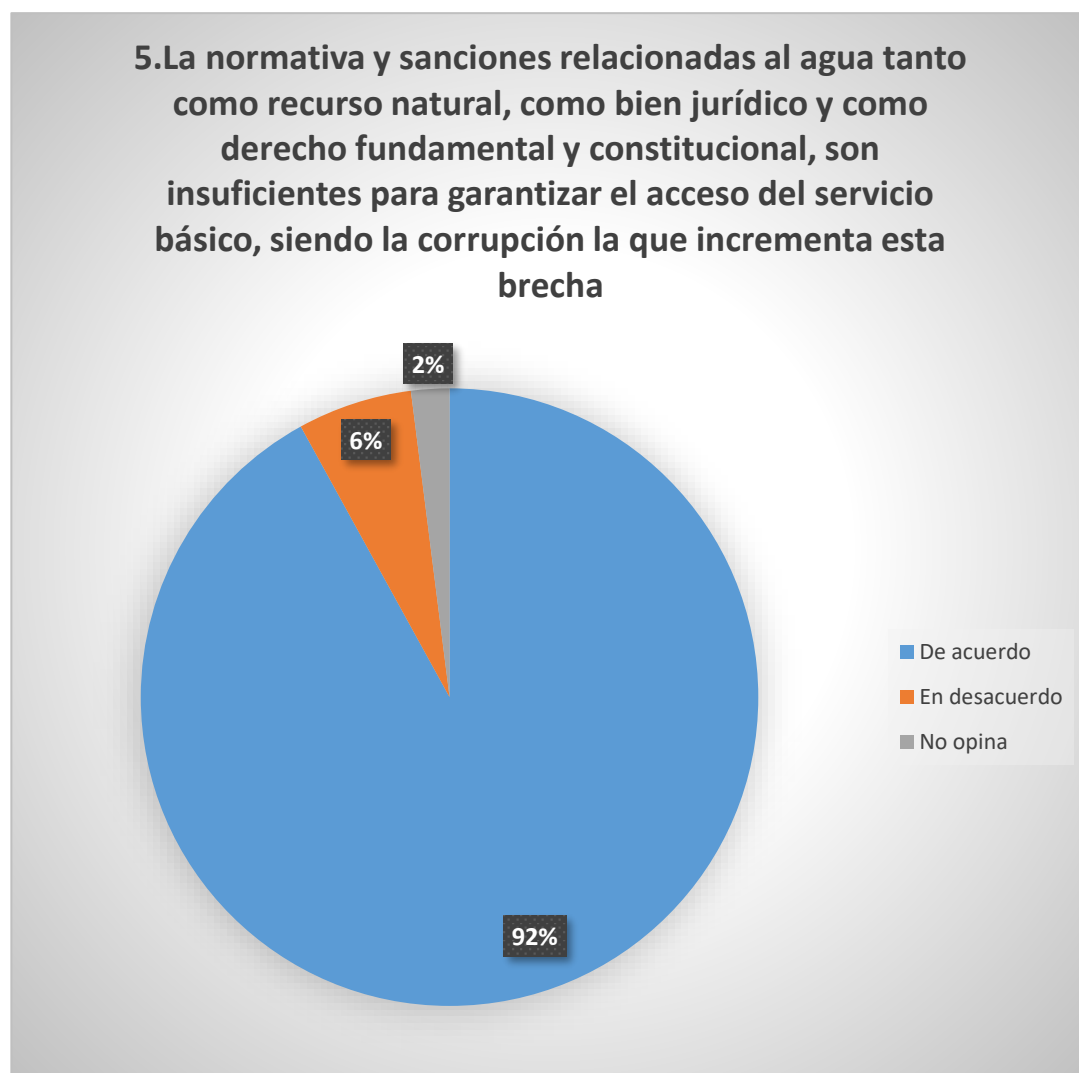
Tabla 5: “Resultados tabulados en base a la recopilación de la opinión de los especialistas en derecho penal en los juzgados de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 5”.

5.- AFIRMACIÓN: La normativa y sanciones relacionadas al agua tanto como recurso natural, como bien jurídico y como derecho fundamental y constitucional, son insuficientes para garantizar el acceso del servicio básico, siendo la corrupción la que incrementa esta brecha menoscabando las inversiones que podrían utilizarse para exceder los servicios a la población.

Alternativas	Resultados
De acuerdo	46
En desacuerdo	03
No opina	01
TOTAL	50

Lectura: Según los resultados que permitieron la tabulación anterior, se puede verificar que sobre la afirmación: La normativa y sanciones relacionadas al agua tanto como recurso natural, como bien jurídico y como derecho fundamental y constitucional, son insuficientes para garantizar el acceso del servicio básico, siendo la corrupción la que incrementa esta brecha menoscabando las inversiones que podrían utilizarse para exceder los servicios a la población; es de apreciar un número de 46 especialistas que han contestado la encuesta a favor de esta afirmación planteada por la investigación, entre tanto que 03 de los participantes señalan no estar de acuerdo y 01 del total han preferido reservar su opinión.

Ilustración 5: “Grafico de acuerdo a porcentajes sobre los resultados tabulados en base a la recopilación de la opinión de los especialistas en derecho penal en los juzgados de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 5”.



OBSERVACIÓN: De acuerdo a los resultados que se han obtenido de la graficación porcentual, se puede apreciar que la población jurídica encuestada tiene una apreciación similar a la que plantea esta postura que alcanza el 92% de aceptación, lo cual permite verificar la validación de parte de estos expertos.

Tabla 6: “Resultados tabulados en base a la recopilación de la opinión de los especialistas en derecho penal en los juzgados de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 6”.

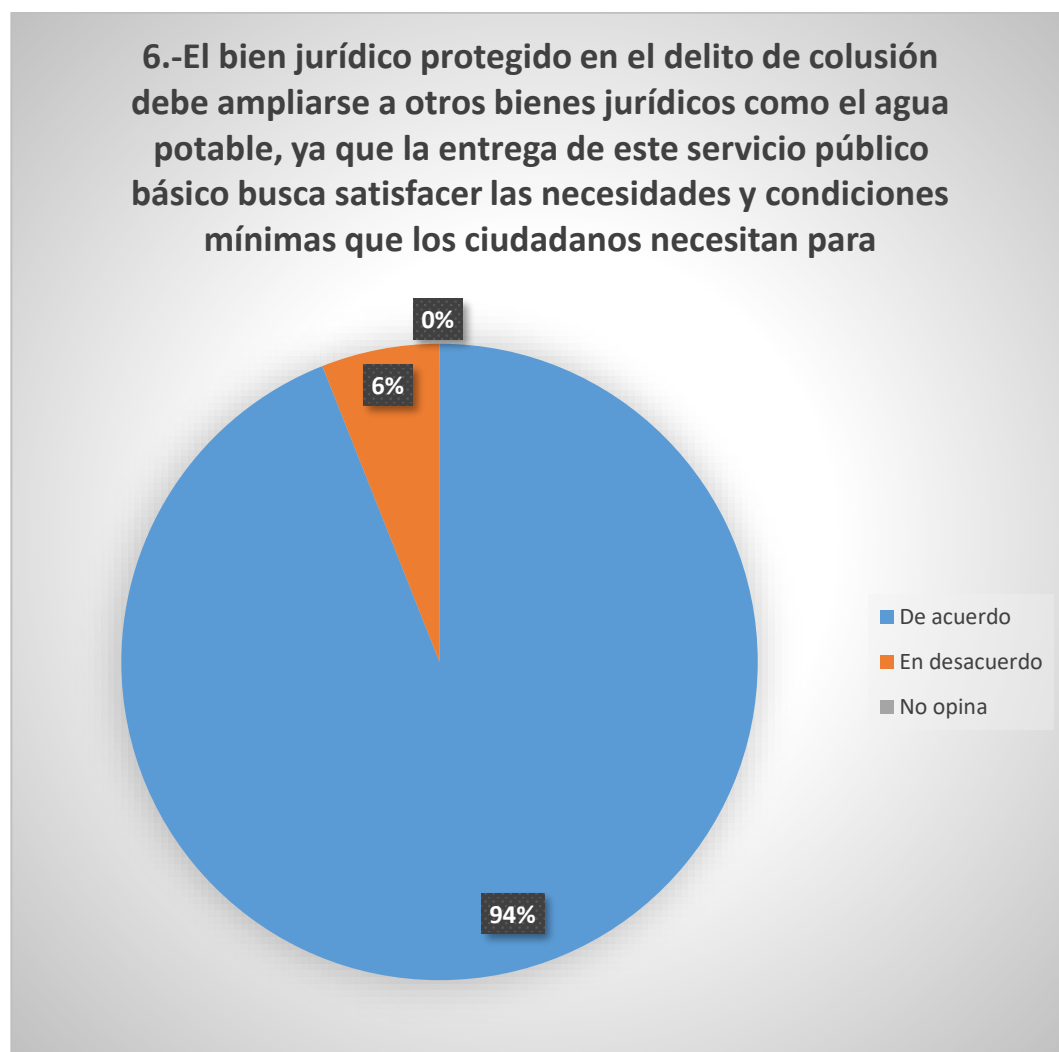
6.- AFIRMACIÓN: El bien jurídico protegido en el delito de colusión debe ampliarse a otros bienes jurídicos como el agua potable, ya que la entrega de este servicio público básico busca satisfacer las necesidades y condiciones mínimas que los ciudadanos necesitan para su desarrollo. Por este motivo, el uso eficiente e imparcial de los recursos destinados a obras de agua potable es necesario para hacer posible el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Alternativas	Resultados
De acuerdo	47
En desacuerdo	03
No opina	00
TOTAL	50

Lectura: Según los resultados que permitieron la tabulación anterior, se puede verificar que sobre la afirmación: El bien jurídico protegido en el delito de colusión debe ampliarse a otros bienes jurídicos como el agua potable, ya que la entrega de este servicio público básico busca satisfacer las necesidades y condiciones mínimas que los ciudadanos necesitan para su desarrollo. Por este motivo, el uso eficiente e imparcial de los recursos destinados a obras de agua potable es necesario para hacer posible el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos; es de apreciar un número de 47 especialistas que han contestado la encuesta a favor de esta definición planteada por la investigación, entre tanto

que 03 de los participantes señalan no estar de acuerdo y 00 del total han preferido reservar su opinión.

Ilustración 6: “Grafico de acuerdo a porcentajes sobre los resultados tabulados en base a la recopilación de la opinión de los especialistas en derecho penal en los juzgados de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 6”.



OBSERVACIÓN: De acuerdo a los resultados que se han obtenido de la graficación porcentual, se puede apreciar que la población jurídica encuestada tiene una apreciación similar a la que plantea esta postura que alcanza el 94% de aceptación, lo cual permite verificar la validación de parte de estos expertos.

Capítulo V

Contrastación de los resultados

5.1.DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En función al objeto de la investigación que se proyectó sobre la tarea de observar si resulta jurídicamente apropiada la ampliación del tipo penal de colusión para lograr aquella finalidad que debiera corresponder como traslación de la garantía constitucional que supone la protección especial del derecho fundamental al agua potable; es que se ha tenido en consideración la síntesis de los contenidos de la tesis que se ejecutaron en razón de las metas planteadas por los objetivos específicos.

Por lo mismo que en esta fase se ha creado el discurso crítico para orientar la toma de postura sobre cada una de las metas trazadas en la investigación, lo cual se muestra a continuación de manera detallada.

5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar doctrinariamente la teoría del derecho fundamental al agua potable”

¿Cuál es la concepción doctrinaria que se tiene respecto al agua?

La doctrina ha señalado diferentes concepciones sobre el término agua, entendido en la normativa ambiental como un recurso proporcionado por la naturaleza renovable, sin embargo, hoy en día el agua se está convirtiendo en un recurso limitado, porque cada vez se vuelve más escaso con el pasar de los años. Si bien la mayor parte de nuestro planeta se encuentra cubierto de agua, ello no implica que el recurso agua sea inagotable, ya que no toda el agua es apta para el consumo humano.

El agua que necesita el organismo debe cumplir ciertas condiciones de salubridad. En la realidad no toda la población tiene acceso al agua potable y mucho menos de calidad, provocando no solo diversas enfermedades gastrointestinales sino también la misma muerte. Innumerables estudiosos del tema agua coinciden que sin agua no se podría vivir.

Debido a que “(...) es esencial para los procesos fisiológicos de la digestión, absorción y eliminación de desechos metabólicos no digeribles, y también para la estructura y función del aparato circulatorio (...)”. (Iglesias, et al. 2011, p. 28). El agua es el principal elemento del cuerpo humano, debido a que todos los órganos de nuestro cuerpo necesitan del agua para seguir funcionando.

En la legislación nacional penal el agua ha sido definida como bien mueble e inmueble, tal y como se señala en los delitos de hurto y usurpación de aguas. En dichos tipos penales el agua es utilizada como una expresión patrimonial porque se encuentra ubicada en los delitos contra el patrimonio.

Debido a la notoria importancia del elemento agua, ha tenido que ser protegida por instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales. Todas han realizado su mayor esfuerzo para dotarla de la debida protección y eso debido a que cada vez se vuelve más escasa por un mal uso de la población, mala distribución y prácticas corruptas que se da en el escenario de la contratación pública.

Varios países constitucionalizaron el derecho al agua potable, como consecuencia de que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el derecho humano al agua potable y saneamiento. El Perú no fue ajeno a

las medidas de protección que habían adoptado sus países vecinos, es por ello por lo que, se incorporó a la constitución el derecho de acceso al agua potable. Al ser declarado como derecho constitucional se le impone una serie de deberes al Estado, el cual es el principal garantizador que toda la población de forma progresiva tenga acceso a este derecho.

- **¿El Derecho humano al agua potable tuvo precedentes remotos en la historia universal?**

Las grandes civilizaciones pudieron desarrollarse porque se encontraron cerca de grandes ríos, lo cual permitió que realizaran actividades importantes como la agricultura y de esta forma su población pueda sobrevivir. Una de las culturas que protegió el agua en sus diferentes usos es la romana a través de interdictos cuyas órdenes dadas por pretor que prohibían ciertas conductas con el fin de solucionar un conflicto. Existiendo un interdicto que garantiza el uso del agua para el consumo humano, cuya prohibición se encontraba dirigida a evitar que construcciones impidan el normal recorrido del río y más aún cuando dicho impedimento perjudicaría a los vecinos, ya que utilizaban el agua no solo para el consumo, sino también para la ganadería y la agricultura.

“(…) *Ne quid in flumine publico ripae eius facere* (...). Este interdicto (...) tiene por objeto evitar colocar una construcción que impida que el río corra del mismo modo en que lo hizo el estío anterior. (...) Pero la nota dominante parece ser, en realidad, el aprovechamiento de las aguas por los vecinos, dado la enorme cantidad de veces que en el fragmento se alude al perjuicio que para éstos se pudiere recabar de lo que se hiciese en el río (...)”. (Lazo Gonzáles, 1999). La cultura romana es una muestra de la

preocupación que mostraron los pueblos antiguos por preservar el agua, debido a que era utilizada para realizar gran parte de sus actividades diarias.

- **¿De qué forma el Derecho como ciencia puede colaborar para garantizar el derecho al agua potable?**

El Derecho se encuentra presente incluso en las pequeñas acciones que realizamos en la vida diaria, y esto se debe a que el ser humano se interrelaciona con otros con el fin de satisfacer sus necesidades. Producto de esas relaciones se generan derechos y deberes para ambas partes. Convirtiéndose el Derecho en un regulador de conductas, de esta forma se garantiza la paz social y la convivencia entre los miembros de la sociedad. Es por ello que se menciona que “El derecho, como el aire, está en todas partes (...)”. (Santiago, 2003, p. 1). El Derecho como ciencia tiene una obligación social de proteger los derechos fundamentales de la población ante cualquier vulneración, ya que uno de los fines del derecho es la protección de los bienes jurídicos más importantes como es la vida, salud, la libertad y una gran lista de derechos que se le han otorgado al ser humano por el simple hecho existir.

Por ello el Derecho es una herramienta principal para combatir las prácticas corruptas en el servicio de agua potable y saneamiento, siendo esta una de las principales causas por las que la población no tiene acceso a dicho elemento. El ordenamiento jurídico no tan solo señala los derechos que el Estado debe garantizar, también señala una serie de deberes que deben ser realizados por los miembros de la comunidad para no recibir un

castigo. A través de las herramientas con las que cuenta el derecho se han creado normas jurídicas para combatir la corrupción.

- **¿El derecho humano al agua potable se vincula directamente con la erradicación de la pobreza?**

El recurso agua está presente en todas las actividades que realiza el ser humano. Desde el uso que se le da para realizar las actividades diarias como preparar el desayuno, asearnos, etc. Hasta el uso que se le da en sectores económicos como lo es la agricultura, la cual es considerada como actividad primaria de un país, no solo porque es la actividad por la que se obtienen los alimentos, sino también porque genera empleo para muchas personas. Es evidente como el recurso agua se vincula con todos los sectores económicos, muchas veces ese vínculo no es notorio, no dándole la importancia debida al agua.

Actualmente existen muchas personas que no tienen acceso o si lo tienen estos servicios de agua potable y saneamiento son inadecuados, siendo las comunidades más afectada las que se encuentran en situación de pobreza. Muchas veces beben agua de los ríos, la cual no es apta para el consumo humano, produciéndoles graves enfermedades inclusive la misma muerte, también optan por comprar el agua a precios muy elevados, lamentablemente no todas las personas pueden pagar ese precio.

Todo Estado debe realizar un manejo adecuado de sus recursos hídricos para erradicar la pobreza, ya que de esta forma podrá tener una población sana, un ambiente sostenible y en consecuencia un mejor crecimiento económico, lo cual permite tener mejores relaciones con otros países

- **¿Cuál es la relación entre el servicio de agua potable y la corrupción?**

La continua escasez del agua es una de las causas por las que se convierte en uno de los recursos más valiosos que paso de ser inagotable a limitado, en consecuencia, se producen muchas muertes por el no consumo de agua potable y si se consume se realiza en malas condiciones de calidad. Ello ha conllevado que tanto entidades nacionales como internacionales desarrollen una serie de mecanismos para brindarle protección. El sector agua también se ha visto perjudicado por la corrupción, como lo que sucede en el escenario de la contratación pública, siendo la colusión una de las modalidades en la que los funcionarios públicos conciertan con terceros para recibir beneficios, perjudicando al Estado.

Esto se puede notar en las licitaciones de obras públicas en las que se cometen una serie de irregularidades para favorecer a una determinada persona o tercero. Muchas de las obras de servicio de agua potable y saneamiento se encuentran deterioradas, inconclusas o muchas veces no llegan a realizarse. Lo que afecta el acceso total de la población al servicio del agua potable. Si bien existen muchas obras de infraestructura que aparentemente son importantes como la construcción de colegios, pistas, etc.; entonces, deben establecer prioridades como lo es el sector salud y el servicio de agua potable y saneamiento, hoy en día vivimos en plena pandemia, donde la principal recomendación es lavado de manos, parece irónico que las principales autoridades del Estado repitan innumerables veces por los medios de comunicación el mensaje de lavado de manos, cuando muchos hospitales, postas, centros de salud, pueblos jóvenes,

asentamientos humanos no cuentan con agua potable para preparar sus alimentos mucho menos para el correcto lavado de manos, esa es una triste situación que se puede notar a diario en la sociedad.

El gobierno es débil e incapaz de proporcionar servicios adecuados a la población, además de ello existe un vacío legal en la normativa vigente, debido a que no se cuenta con normas que sancionen las conductas realizadas por funcionarios públicos que no cumplen con el deber velar por el correcto funcionamiento de la administración pública. Principalmente porque se perjudica económicamente al Estado, lo cual afecta directamente a la población, debido a que los recursos que se invierte para obras de servicio de agua potable y saneamiento no son utilizados con la mayor eficiencia.

- **¿El incorrecto funcionamiento de los organismos vinculados al servicio de agua potable disminuirá el acceso al agua potable?**

El funcionario público o servidor público como miembro de una entidad u organismos de la administración estatal debe actuar con respeto y probidad, conduciendo sus actuaciones hacia el bienestar de la población a través de la satisfacción de sus necesidades con la adecuada prestación de servicios públicos a la población, dejando de lado sacar cualquier provecho económico para sí mismo o en favor de un tercero.

Muchas veces las labores de los funcionarios públicos son quebrantadas por la corrupción, descuidando su verdadera labor que es velar por el correcto uso de los recursos económicos que proporciona el Estado para lograr que la población tenga una vida digna accediendo a los servicios básicos.

El Estado anualmente invierte en obras de servicio de agua potable y saneamiento sin embargo los resultados no se ven reflejados en el bienestar de la población, porque sigue existiendo población que no cuenta con agua potable, cada año las cifras por muerte producidas por enfermedades gastrointestinales aumentan, la población sale a marchar con baldes en las manos para reclamar por su derecho al agua potable, etc.

Una de las causas es la corrupción en las contrataciones públicas, donde los funcionarios se apoderan de los fondos que habían sido destinados para realizar dichas obras, utilizando materiales más baratos, maquillando los costos verdaderos o simplemente dejando inconclusas las obras por años, quedándole a la población esperar el próximo gobierno municipal o regional para que realice mejoras o concluya con la obra. Mientras la población espera debe seguir consumiendo agua en malas condiciones porque los materiales que conforman la infraestructura son usados o simplemente no sirven, deben seguir comprando agua potable a costos elevados, etc.

Por ello se deben maximizar los controles por parte del Estado para garantizar que se respete un derecho humano de vital importancia que es el derecho de acceso al agua potable, el cual no hace muchos años ha sido incorporado en la constitución peruana.

Los funcionarios públicos deben velar por los intereses del Estado y más aun de la población, priorizando el interés público sobre el particular, deben cumplir con responsabilidad sus deberes, no recibiendo ninguna ventaja o provecho económico para realizar de manera correcta, porque es su obligación y reciben un sueldo para realizarlo

- **¿El acceso al servicio de agua potable forma parte de la salud pública?**

El servicio de agua potable es el servicio por excelencia para la continuidad de la vida, así como la realización de otros derechos fundamentales. El agua es un recurso valioso que permite que la población pueda desarrollar sus actividades con total normalidad desde su consumo hasta la realización de otras actividades diarias. El agua que debe consumir la población debe cumplir con ciertas condiciones de calidad que le generen bienestar y no le conlleve a tener enfermedades “(...) es vital que la población tenga acceso al agua segura y al saneamiento básico, porque es conocido que la falta de estos servicios condiciona la presencia de diferentes tipos de enfermedades que afectan la salud de las poblaciones (...)”. (Cabezas, 2018, p. 311). Por ello el agua potable debe ser considerada en un primer nivel de prioridades respecto a decisiones y medidas que tome el Estado, asimismo el Derecho debe cumplir un papel de vital importancia respecto de dotar el derecho descrito de todas las garantías posibles.

- **¿Cómo se sanciona en otros países los delitos que atentan contra el servicio de agua potable?**

En otras legislaciones si bien no se encuentra protegido el servicio de agua potable específicamente, se señala de manera general al conjunto de servicios públicos entendido como aquellos que garantizan el bienestar de la población y sobre todo permiten la realización de derechos fundamentales como la vida y salud.

En el caso del Estado ecuatoriano en el artículo 346 de su Código Orgánico Integral Penal señala que será sancionado con pena privativa de libertad

de uno a tres años aquel que imposibilite o paralice el correcto funcionamiento de un servicio público.

“(…) Artículo 346.- Paralización de un servicio público. - La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años (...)”. (Organo de Gobierno del Ecuador, 2014, p. 53).

Respecto al delito de paralización de un servicio público se realizó un trabajo de investigación que trataba de diferenciar a qué tipo de servicios públicos se refería el tipo penal, ya que para el investigador no todos los servicios públicos deberían tener el mismo tratamiento, debido a que se sanciona la paralización o entorpecimiento de un servicio público por el hecho que pone en riesgo derechos fundamentales; pero no todos los servicios públicos se encuentran en la misma jerarquía, por ejemplo señala que no sería viable comparar la afectación del servicio de agua potable con el servicio público de internet.

Actualmente son muchas las iniciativas legislativas que pretenden reconocer el internet como un derecho fundamental, indicando de manera personal la falta de concordancia con tales propuestas. Primero se debe observar la realidad peruana, sería incoherente pretender otorgarle un derecho como el acceso a internet cuando no se hace nada para cumplir con los derechos que ya están reconocidos con anterioridad en la constitución, como es el derecho a una alimentación adecuada, al servicio

de agua potable los cuales se encuentran muy relacionados con el derecho a la salud y pasan desapercibidos para las autoridades.

La salud se asocia con el acceso al agua que tiene la población, es considerado como un índice de desarrollo humano que mide el progreso de un país. Es decir, si la población cuenta con estos servicios puede tener una vida digna y así reducir los niveles de pobreza. Respecto al derecho fundamental al acceso al internet, es como si se pretendiera iniciar una nueva tarea dejando otras tareas sin terminar. Lo correcto sería buscar mecanismos para garantizar el efectivo cumplimiento de derechos fundamentales incorporados con anterioridad en la constitución. Para lo cual se toma como referencia lo señalado por el autor Orellana (2019) en su trabajo de investigación titulado “Derecho a la resistencia VS Delito de paralización de servicios públicos. Caso Morona Santiago” :

“(...) Es menester hacer hincapié que no toda paralización de un servicio público, o la toma de una instalación pública, pone en riesgo o violenta derechos fundamentales, algo que no es tomado en cuenta por el tipo penal, que se refiere a los servicios públicos de manera abstracta y general, sin distinción alguna. No es lo mismo paralizar el servicio público de agua potable, que entorpecer el servicio público de transporte terrestre, o el servicio público de internet (...)” (Orellana Roldán, 2019, pág. 38)

- **¿Qué responsabilidad tiene el Estado en el menoscabo del derecho fundamental al agua potable?**

Un hito histórico en el uso y desarrollo del agua potable es su reconocimiento como derecho fundamental, en donde se reafirma que el acceso al agua potable es esencial para la realización de todos los derechos

humanos. Un hito que nos lleva a la reflexión sobre la preocupante situación del acceso al agua potable y su importancia en la vida de las personas. En consecuencia, se generaron una serie de obligaciones para los Estados parte, así como para la misma población.

“(…) Al igual que todos los derechos humanos, el derecho al agua impone tres tipos de obligaciones a los Estados Partes, a saber: las obligaciones de respetar, proteger y cumplir (…)”. (Consejo económico y social, 2002, pág. 9)

El Estado debe vigilar el acceso al servicio de agua potable a través de la realización de obras y proyectos relacionadas con este servicio evitando todo tipo de malas prácticas de corrupción, ya que muchas por la mala ejecución de los recursos públicos no realizan obras destinadas a mejorar la calidad de la población como es el servicio de agua potable. Y uno de los mecanismos mediante el cual los Estados partes pueden confrontar la corrupción en las contrataciones públicas de obras y proyectos de servicio de agua potable, es mediante la adopción de medidas legislativas eficaces para garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales. Todo “(…) Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la corrupción (…)”. (Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito., 2004)

El Estado como garantizador de derechos fundamentales de los ciudadanos muchas veces es cómplice de las distintas modalidades de corrupción. Porque siendo un observador de dichas prácticas corruptas no hace nada por solucionarlas, pasan desapercibidas y no hay una debida diligencia y

control durante la ejecución de las obras de servicio de agua potable para que puedan ser concluidas con éxito.

El Estado asume el compromiso de hacer valer los derechos de las personas, por ello debe asumir una serie de medidas que alcancen dicho objetivo. En el caso peruano se modificó la constitución política para reconocer el derecho de acceso al agua como derecho fundamental, lo cual no solo implica un cambio en el texto del artículo, también impone una serie de obligaciones al Estado con tal de garantizar este derecho. Por ejemplo, debe facilitar el acceso a toda la población de este líquido vital sin discriminación alguna, a través de obras de infraestructura de agua potable. Además, el Estado es responsable de otorgar a la población agua limpia y segura que no atente contra la salud de las personas.

De acuerdo a todo lo señalado como acciones de garantía que le corresponde al Estado como el obligado para que la ejecución de estos servicios se la más idónea para asegurar el beneficio a la sociedad, ello implica sólo tal condición de garante, más no la posibilidad de ejercer algún tipo de acción como responsabilidad civil o penal por la ausencia de ejecución. Mas bien lo que interesa rescatar de esta indicación es el hecho de que el traslado de las responsabilidades tanto civiles como penales sea conducido hacia los sujetos que interrumpen el normal desarrollo de la actividad estatal destinada para estos fines.

¿Las sanciones impuestas contra delitos de servicios públicos son las adecuadas?

Según el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos la Autoridad Nacional del agua ejerce una facultad sancionadora ante cualquier infracción a las

disposiciones contenidas en ley, todas ellas referidas a la protección del elemento natural agua, así como los múltiples usos que se realizan con ella, empezando por el consumo humano.

Las sanciones que aplica la administración pública son más atenuadas que las sanciones que aplica el Derecho Penal. Las sanciones de naturaleza administrativa recaen sobre el patrimonio del administrado, tal como sucede con las multas, impuestas en base a la unidad impositiva tributaria. Por ejemplo, la administración pública no sanciona con la privación de libertad, tan solo lo hace con amonestaciones y multas.

Sin lugar a dudas las sanciones penales resultan ser más efectivas para el cumplimiento de obligaciones, ya que, por medio de la imposición de una pena, la cual se caracteriza porque es muy severa se disuade la conducta del infractor; ello se refuerza con el razonamiento de que el Derecho Penal ha de acudir como acción de control en el último nivel de la intervención del Estado, lo cual se convierte en una garantía también, puesto que el bien jurídico se protege a través de la imposición de sanciones, aspecto que para el bien jurídico agua potable en tanto nueva incorporación al ordenamiento, no cuenta con este tipo de protección, sólo a nivel patrimonial en tanto se considera al hurto respecto del servicio.

TOMA DE POSTURA:

Asumiendo el acceso al agua potable como un derecho humano reconocido por la Naciones Unidas, reafirmado como un derecho que permite la realización de otros derechos fundamentales, se percibe, a medida que pasa el tiempo tanto entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales están sumando esfuerzos para dotar de acceso universal a la población de este líquido elemento. Se ha podido

notar que una de las causas por las que la población no tiene acceso a este servicio son las malas prácticas en la administración o acciones corruptas en este sector, las cuales que se ejercen en la ejecución de obras y proyectos, siendo responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos actuar con diligencia y control para que dichas obras concluyan con éxito y más aun cuando benefician a toda la población.

La pandemia ha sido una muestra más de lo vital que es el acceso al servicio de agua potable para prevenir las enfermedades. Los funcionarios y servidores públicos que conforman la administración pública tienen deber de lealtad y probidad de orientar un correcto manejo de los recursos públicos, priorizando el interés general sobre el particular. El Derecho administrativo ha demostrado ser ineficiente debido a que pese a las grandes multas que se imponen, en primer lugar, no son canceladas y segundo no ha visto una disminución en las malas prácticas administrativas o acciones de corrupción en las obras de los servicios de agua potable. Sin embargo, en el mundo jurídico contamos con una herramienta que puede generar mejores resultados como es el Derecho Penal, gracias a la imposición de la pena se disuade la conducta del infractor. Bien es sabido que por la severidad de las penas se genera en las personas el miedo a perder su libertad y ello supone un cambio en la conducta del que infringe la norma; bajo este fundamento se requiere la protección del bien jurídico agua potable que normativamente se incorpora como derecho fundamental y requiere de esta garantía.

5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Describir dogmáticamente la naturaleza jurídica del tipo penal de colusión y la interpretación del bien jurídico protegido”

¿Cómo debe comprenderse la naturaleza jurídica de colusión?

El delito de colusión es considerado como una de las modalidades que tiene mayor presencia en los delitos contra la administración pública, debido a que el sector de las contrataciones públicas es donde se genera mayores actos de corrupción. Ya que la contratación pública es necesaria para el otorgamiento de bienes y servicios para mejorar la calidad de vida de la población. El delito de colusión pretende proteger como bien jurídico el correcto funcionamiento de la administración pública.

El delito de colusión es un delito de infracción de deber, estos delitos se caracterizan porque el autor del delito no puede ser un particular, sino que debe ser un funcionario o servidor público. Lo cual implica que al funcionario público se le impone el deber especial de actuar con respeto y honestidad, conduciendo sus actuaciones hacia la satisfacción de las necesidades de la población y lograr el bienestar general, excluyendo todo provecho personal.

¿Qué percepción doctrinaria predomina respecto a la naturaleza jurídica del bien jurídico protegido en el derecho penal?

El Estado ejerce una potestad punitiva frente a las personas, para evitar arbitrariedades se establecen límites a través de principios como el de legalidad, presunción de inocencia, de intervención mínima, etc. El principio de intervención mínima establece que la intervención del Derecho penal debe ser mínima, es decir que si existe la posibilidad de usar otros medios que no sea el Derecho Penal se

les debe dar prioridad para la protección de bienes jurídicos. En consecuencia, que el Derecho penal sea un instrumento de ultimo ratio para garantizar una convivencia pacífica entre los miembros de la sociedad. Muchos son los bienes jurídicos que son protegidos por Derecho penal tales como el derecho a la vida, salud, libertad, integridad física, etc. Todos ellos tienen como común denominador que son vitales para la realización de las personas como la comunidad. El legislador solo podrá establecer sanciones para aquellas conductas que pongan en una situación de peligro los bienes jurídicos establecidos en el ordenamiento jurídico.

El tipo penal del delito de Colusión se encuentra en el artículo 384 del Código Penal Peruano, el cual sanciona aquel funcionario o servidor público que en ejercicio de sus funciones concierne con terceros para favorecerlos en las etapas de la contratación pública, defraudando la confianza que el Estado impone a los funcionarios o servidores. También se señala como circunstancia agravante el defraudar patrimonialmente al Estado, es decir que dicha defraudación se ve reflejada en la afectación de los recursos públicos que el Estado destina para satisfacer las necesidades básicas de la población a través de la entrega de bienes y servicios públicos, como es el caso del servicio de agua potable.

De la primera parte del tipo penal de colusión se puede señalar que el bien jurídico protegido es el irregular desempeño del funcionario público, porque no cumple con los deberes que le ha impuesto la administración pública. Su actuar debe estar guiado a convertir en realidad los intereses de la población, buscando el bienestar general.

Así también se señala que el bien jurídico protegido en el delito de Colusión es la asignación eficiente de recursos públicos en las contrataciones que el Estado

ejecuta para la provisión de bienes y servicios públicos, de esta forma aquellos que forman parte de la administración pública deben utilizar los recursos de manera eficiente, con el fin de maximizar los beneficios para la población. Los funcionarios y servidores públicos deben tomar las medidas necesarias para que en el sector de las contrataciones públicas los recursos para ejecutar obras y proyectos públicos se les dé un buen uso y evitar que las autoridades formen parte de pactos colusorios obteniendo ventajas personales.

¿Cuán apropiada es la construcción del tipo penal de colusión de acuerdo a su naturaleza jurídica?

Una consecuencia derivada del principio de legalidad es la *lex certa*, es una garantía que se impone al legislador para que al momento de formular una ley penal debe realizarlo de la forma más clara y precisa, y así evitar ambigüedades que influyan de manera negativa en las decisiones del juzgador.

A lo largo del tiempo el tipo penal del delito de Colusión ha sufrido una serie de modificaciones, siendo la más importante realizada por la ley N° 29703, generando una modificación en su último párrafo que para que se configure el delito es necesario que además de la defraudación de la confianza del Estado debe producirse un perjuicio patrimonial al Estado.

El tipo penal en su estructura señala de manera correcta las exigencias subjetivas y objetivas del tipo penal que la convierten en una conducta típica. Se señala que el sujeto activo es el funcionario o servidor público quien debe intervenir de manera directa o indirecta en cualquiera de las etapas de contratación pública, el sujeto pasivo es el Estado. El bien jurídico tutelado es el correcto funcionamiento de la administración pública y finalmente las conductas sancionadas es la concertación del funcionario con un tercero para defraudar la confianza del Estado

en el caso de colusión simple, mientras que en el caso de colusión agravada la concertación debe generar un perjuicio patrimonial en contra del Estado.

Sin embargo, al igual que otros tipos penales es necesario precisar de manera taxativa las agravantes en el delito de colusión, como aquel funcionario que concierte en obras de infraestructura de servicios de agua potable, debido a la importancia de este servicio. El servicio de agua potable es uno de los servicios por excelencia debido a que las personas no podrían gozar de una salud adecuada y tener una vida digna. Existen otros servicios que pueden ser considerados como importantes, pero debemos establecer prioridades como el bien jurídico salud relacionado con el agua potable.

¿Qué tan eficaz resulta la determinación del bien jurídico en el tipo penal de colusión?

El bien jurídico es todo bien tangible o intangible que es protegido por la ley con el fin de mantener la paz social para que los individuos puedan ejercer con normalidad sus derechos. El bien jurídico es valorado como una condición necesaria o socialmente se le concibe como útil para que la comunidad se desarrolle con normalidad, por ejemplo, el bien jurídico vida se protege mediante la tipificación del delito homicidio.

Sobre el bien jurídico se indica que: “(...) es creado por el derecho que elige los objetos que en opinión del legislador merecen protección; así, bien jurídico será todo lo que, aún no constituyendo derecho, es valorado por el legislador como condición para que la vida comunitaria se desarrolle normalmente. Por lo que es interés de la comunidad conservarlo íntegro protegiéndolo mediante normas jurídicas (...)” (I Pleno Jurisdiccional Extraordinario de las Salas Permanentes y Transitoria, 2012, ps. 6-7)

El legislador asume un papel muy importante respecto a la creación del bien jurídico, porque él valora qué bien jurídico es digno de protección y sobre todo cuales bienes brindan las condiciones necesarias para que los individuos ejerzan sus derechos. El legislador tiene la responsabilidad de redactar de manera clara y sencilla las conductas que decide tipificar, para evitar incoherencias y dudas al momento de interpretar el mensaje del contenido normativo de un tipo penal.

El tipo penal de colusión descrito en el código penal, ha sufrido una serie de modificaciones desde que entró en vigencia por primera vez en el ordenamiento penal peruano. “(...) En ese marco el Estado peruano, reguló el delito de colusión desleal o ilegal, en el Ordenamiento jurídico penal del año 1924 en su artículo 344°(...)” (Mandujano , 2017, p. 80). Hasta la última modificación que se realizó con fecha 28 de abril del 2021, respecto de circunstancias agravantes derivada de la comisión de este delito durante calamidad pública o emergencia sanitaria. Las diferentes modificaciones que se han realizado a lo largo de estos años son con la finalidad de asegurar el correcto funcionamiento de la administración pública, así como el bienestar de la población a través de la provisión de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la vida.

Lamentablemente el tipo penal no ha sido capaz de abarcar todos los bienes jurídicos inmersos en las actividades de contratación pública, que es el ámbito donde se desarrolla el delito de colusión, debido a las grandes cantidades de dinero que son destinadas para la ejecución de obras, proyectos, programas sociales, bienes y servicios; actividad que incorpora la garantía del acceso a otros derechos que se asumen como bienes jurídicos, tal es el caso estudiado, del derecho fundamental al agua potable, lo cual por su condición especial y prioritaria, requiere de una contemplación específica en este tipo penal.

La norma a pesar de aumentar las penas sigue siendo ineficaz porque muchos funcionarios y servidores públicos siguen quedando impunes. En consecuencia la población es quien asume los perjuicios provocados por los actos de corrupción que realizan estos funcionarios, ya que las obras, proyectos y cualquier bien y servicio se ejecuta para lograr bienestar en la sociedad.

TOMA DE POSTURA:

De lo expuesto se colige que el delito de colusión es un delito de infracción de deber, debido a que el autor del delito no puede ser un particular, sino que el sujeto activo deberá ser necesariamente un funcionario o servidor público. El delito de colusión es un delito de resultado, debido a que genera perjuicio económico al Estado y la consecuente limitación del acceso a garantías fundamentales que inspiran los servicios como es el caso del agua potable.

Respecto al bien jurídico del delito de colusión no ha resultado ser eficaz, pese a las muchas modificaciones que ha sufrido el tipo penal, siguen existiendo funcionarios y servidores públicos que no han recibido las sanciones correspondientes por su actuar contrario a sus deberes de respeto y probidad como parte de la administración pública.

5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “proponer una circunstancia agravante en el tipo penal de Colusión respecto a la protección especial del derecho fundamental al agua potable”

Teniendo en cuenta lo desarrollado respecto a los fundamentos que justifican la incorporación de la sanción punitiva para las acciones que afecten el derecho fundamental al agua potable, dentro de la concepción de colusión agravada en el

ordenamiento penal; deberá realizarse una observación a otras circunstancias que se recogen de la actual modificación de este tipo penal comprendida en...

Ha de resaltarse el contenido agregado como condición agravante de la colusión específicamente al inciso 2 en el cual se puede apreciar el concepto de programas con fines asistenciales, por lo mismo que debe hacerse la precisión conceptual de este tipo de acciones estatales, así se tiene lo siguiente:

- **Concepto de programas sociales**

Los programas sociales son un conjunto de acciones realizadas por el Estado con el fin de satisfacer las necesidades de la población o brindar una solución a un problema colectivo. Por los cuales se busca beneficiar a las personas más pobres y vulnerables, fomentando de esta forma la inclusión social mediante la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, en el país la mayoría de niños sufren de malnutrición y anemia, perjudicando su salud y su desarrollo cognitivo, ante este problema el Estado utiliza como estrategia la implementación de programas sociales como Qali Warma el cual brinda alimentos a los niños que se encuentran matriculados en instituciones públicas. El Estado al invertir en su población mejora su calidad de vida, reduce la pobreza lo que incide en el crecimiento económico del país.

“(...) Los programas sociales son la materialización de la política social (...). En el caso de los problemas sociales, se opera pretendiendo satisfacer necesidades productos de “demandas insatisfechas”. Las necesidades básicas insatisfechas de la población que presenta mayores carencias, pueden, así, ser concebidas como problemas y los proyectos sociales como soluciones a los mismos (...)” (Vara, 2007, p. 37).

TIPOS DE PROGRAMAS SOCIALES EN EL PERU

Los programas sociales se dividen en asistenciales y habilitadores:

Los primero tratan de reducir la vulnerabilidad de la población ya sea por su edad como los niños, adolescentes y personas adultas mayores, situación física tal como las madres gestantes y personas con discapacidad o situación de pobreza, ya que la población no puede acceder a los servicios básicos para satisfacer sus necesidades básicas. Este tipo de programas también buscan reducir la pérdida de patrimonio como consecuencia de desastres naturales o crisis familiares como la falta de empleo.

(...) Programas asistenciales o protectores: Estos programas están orientados a disminuir la fragilidad y a resguardar y fortificar las aptitudes (...) de los ciudadanos de modo que se pueda evitar consecuencias contraproducentes, dentro de estos programas se encuentran los de salud (...), pensiones, saneamiento, los de asistencia alimentaria, previsión y control de desastres naturales (...) (Tintaya, 2019, p. 23).

Esto se puede notar en el programa agua para todos, el cual fue creado en el año 2007 y es clasificado en los programas sociales asistenciales y protectores, debido a que busca contribuir la calidad de vida de la población, mediante el acceso a un servicio básico e indispensable como es el agua potable. Un servicio que al ser entregado a la población debe cumplir con los requisitos mínimos como es de calidad y sostenibilidad, para que la población pueda tener bienestar, dado que la calidad de agua se encuentra relacionada a la salud.

“(...) Decreto Supremo N° 006-2007- VIVIENDA publicado el 23 de febrero de 2007 (...). El objetivo general de estos sub-programas es contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas. Es por ello,

esencialmente, un programa protector, con actividades habilitadoras referidas a la cultura del agua (...)” (Contraloría General de la República, 2008, p. 105).

El segundo tipo de programas sociales son conocidos como los habilitadores, los cuales tiene como finalidad generar el acceso a oportunidades económicas, por ello van dirigidos a la población económicamente activa, por ejemplo, el programa nacional para la empleabilidad, el cual mediante capacitación laboral y promoción del empleo brinda oportunidades a personas de 15 años a más que se encuentran en situación de pobreza.

(...) Los programas habilitadores buscan reforzar capacidades para aprovechar oportunidades económicas o de diverso tipo. Por tanto, se orientan mayormente a personas en su ciclo de vida intermedio (jóvenes y adultos en capacidad productiva) que con sus propios medios no podrían acceder a la capacitación o recursos (por ejemplo, crédito, conectividad) que le permitan aprovechar estas oportunidades (...) (Contraloría General de la República, 2008, p. 24).

- Concepto de programas de desarrollo

Los programas de desarrollo social son instrumentos de planeación con los que cuenta el Estado para establecer objetivos y metas para satisfacer las necesidades básicas de la población, ante la necesidad insatisfecha que tiene la población, el Estado aporta soluciones mediante los programas de desarrollo social o también denominados programas sociales.

(...) son los instrumentos de planeación, en los que se establecen los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción que orientan el quehacer del Estado (...), en materia de política social, y cuyas acciones específicas se instrumentan a través

de programas sociales (...) (Secretaría de Desarrollo Social y Regional, 2009, p. 3).

La principal característica de estos programas de desarrollo es la inclusión social, dicho de otra manera, lo que se busca con la implementación de aquellos programas es que todas las personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social tengan los mismos recursos y oportunidades que los demás para poder alcanzar bienestar y un nivel de vida adecuado, mediante el acceso efectivo a los servicios y bienes que brinda el Estado.

(...) En el concepto central de desarrollo, una de las características sociales más importantes es la inclusión social (...). En el sentido contrario al de inclusión, en la exclusión se comprende el no acceso efectivo a servicios y bienes estrictamente relacionados con la supervivencia, tal el caso de alimentación, salud, vivienda, y también educación, empleo y actividad productiva (...) (Reyes, 2009, p. 134).

La idea es demostrar que el elemento normativo que se amplía en el tipo penal de colusión no comprende a las obras de saneamiento de agua potable (bajo el supuesto de que se comprende como proyectos autónomos).

Otro aspecto para analizar es saber si la modificación esta circunscrita al ámbito de desastres naturales o pandemias como la que se vive actualmente, de ser así solo sería una protección condicionada mas no general como se supone debiera tener el derecho fundamental al agua potable.

El hecho de que se hayan incorporado estos lineamientos específicos en el tipo penal, refuerza el argumento de ampliación de elementos normativos específicos como el que se pretende incorporar con la tesis. Más aún cuando se aprecia que se contemplan especificaciones que alcanzan el rubro de la salud, pero en la

comprensión de atención médica mas no de la prevención y lo cual lleva al supuesto de que la protección debe ser más amplia aún, en tanto que la ejecución del derecho fundamental al agua potable es más trascendente incluso, por lo mismo que requiere de especificación expresa dada su importancia.

Tal cual se ha visto, la posición estatal para el desarrollo de obras que corresponderían a la asistencia del Estado respecto al derecho al agua potable, se encuentra contenida como una sub fase de este tipo de acciones, lo cual no se considera apropiado, dadas las circunstancias especiales y fundamentales de este derecho, el cual debe tener la mayor atención tanto para su implementación por parte de la gestión estatal, así como para el ordenamiento jurídico penal.

El 28 de abril del año 2021 se realizó una modificación del delito de colusión, el cual señala circunstancias agravantes cuando este delito sea cometido en situación de calamidad pública o emergencia sanitaria. Con este antecedente se refuerza la postura que se asume respecto a incorporar una modificación en el tipo penal respecto al derecho fundamental de agua potable. El Derecho al agua potable ha sido reconocida en la constitución política peruana y pese a ello es uno de los derechos más olvidados, muchos expertos han determinado que sin agua no habría vida, el agua es el punto inicial para poder gozar de buena salud.

En varias regiones del país en pleno siglo XXI no cuentan con servicios de agua potable y saneamiento, y si cuentan con esos servicios, las instalaciones son precarias e ineficientes. Las obras potables de agua y saneamiento se encuentran paralizadas o simplemente no se realizan, pese a que se destina grandes cantidades de dinero para su ejecución. Los funcionarios o servidores públicos a cargo del procedimiento y ejecución de las obras realizan conductas delictivas, como es la

concertación con terceros para defraudar patrimonialmente al Estado, siendo perjudicada la vida y salud de la población.

TOMA DE POSTURA

En el tipo penal de colusión ya se estableció como circunstancia agravante que la pena será mayor cuando el agente se aproveche de una situación de calamidad pública o emergencia sanitaria, la modificación es muy buena, siempre que sea en beneficio de la población, no se debe olvidar que el ciudadano es el centro de la administración pública, así como satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, no solo debería ser cuando la población se encuentre en una situación de calamidad o emergencia sanitaria. En el caso del servicio de agua potable es un servicio que se necesita todos los días y en todas las horas del día. Esta circunstancia agravante no solo debería aplicarse para situaciones en determinados tiempos, sino de manera permanente.

5.1.4. Discusión sobre el objetivo: “Analizar la posibilidad de determinar si resulta jurídicamente apropiada la ampliación del tipo penal de colusión respecto a la protección especial del derecho fundamental al agua potable”

- **¿Cuánto impacta la mala ejecución de las obras de agua potable y saneamiento básico?**

Las irregularidades en las diferentes obras de agua potable y saneamiento a nivel nacional, no solo afecta el patrimonio del Estado, también afecta directamente a la población. El Perú es un país en vía de desarrollo, actualmente millones de personas no cuentan con agua potable y carecen de instalaciones de alcantarillado y saneamiento, debido a la mala inversión por parte de las autoridades quienes no cumplen con su responsabilidad de llevar a cabo el procedimiento y ejecución de dichas obras con transparencia, ya que su obligación es eliminar todo tipo de conducta delictiva orientada a perjudicar a la población.

El impacto del mal actuar de las autoridades recae principalmente sobre los sectores pobres, quienes buscan la manera de abastecerse de agua potable desde lugares lejanos o compran pequeñas cantidades de agua a altos precios a vendedores de agua.

El no tener acceso al agua potable genera problemas de salud como diarrea, infecciones intestinales relacionadas con el consumo de agua contaminada. En el contexto de esta pandemia mundial, el problema de acceso al agua potable se dio a notar aun más, debido a que la mayoría de familias en los diferentes puntos del país no contaban con agua potable, generándose la propagación de esta enfermedad porque no tenían con que lavarse las manos, algo que a simple vista era sencillo de solucionar se convirtió en un gran problema.

Estas condiciones lo que permiten observar es la directa vulneración del derecho fundamental al agua potable, que como ya se ha dicho antes, no sólo se configura en un estado de emergencia, es un problema permanente al cual no se le presta la debida atención, sólo en casos muy extremos como

el de la actual pandemia, provocando reacción de parte del legislador a fin de generar una supuesta mayor protección, aún cuando no se trate de una especificación exacta respecto a este derecho.

Según lo indicado, la necesidad de generar un planteamiento puntual y específico relacionado con el derecho al agua potable en esta reciente modificación, resulta de un amplio imperio, debido a las circunstancias pre existentes respecto a la vulneración en razón de los actos antijurídicos que se reconocen en la colusión como tipo penal y que requieren según esta perspectiva de una ampliación específica para asegurar el acceso al derecho fundamental del agua potable.

La modificación reciente agrega una nueva modalidad agravada al delito de colusión. Haciendo mayor énfasis en el inciso 2 que señala: “(...) la conducta delictiva recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados supere las diez unidades impositivas tributarias UIT (...)”. (Diario Oficial el Peruano, 2021, p. 4). De la investigación realizada los programas sociales se dividen en asistenciales y habilitadores. Los primero tratan de reducir la vulnerabilidad de la población ya sea por su edad, situación física o situación de pobreza, ya que la población no puede acceder a los servicios básicos para satisfacer sus necesidades básicas. Por ejemplo, los programas sociales de agua potable y saneamiento.

También se señala en el mismo inciso condicionando la circunstancia agravante si el valor del dinero, bienes o ganancias supere las 10 UIT, es decir cuando el monto sea ascendente a S/ 44,000.00.

La propuesta de esta investigación, esta referida que la pena debe ser mayor cuando la conducta delictiva recaiga sobre obras de servicio de agua potable y

saneamiento. El derecho de agua potable ha sido reconocido como un derecho humano esencial para el goce pleno de la vida y de todos los derechos humanos. En el ámbito nacional ya se encuentra reconocido en la Constitución como un derecho fundamental, no hay duda respecto de su importancia al acceso de este recurso vital para la supervivencia. El agua potable es un recurso que es necesario no solo por temporadas, o cuando la población se encuentre en una situación de calamidad pública o emergencia sanitaria. Una persona que no cuenta con acceso al servicio de agua potable no solo se muestra vulnerable en una situación de calamidad o emergencia sanitaria, sino por el contrario se encuentra vulnerable hasta el momento en que se le provea del servicio de agua potable.

Las obras de agua potable no pueden compararse con otros programas sociales o de fines asistenciales como el programa nacional de asistencia solidaria pensión 65 o el programa nacional de apoyo directo a los más pobres- JUNTOS. Y no pueden ser comparados porque el agua potable es un servicio que debe ser prestado de manera continua y permanente a la población, debido a su condición de recurso necesario para la vida, para poder beber, prepara los alimentos, asearnos, etc. El servicio de agua potable debe ser garantizado en todo momento y a toda hora, no solo en determinadas situaciones.

Además de ello, el tipo penal no es específico al referirse a los programas de asistencia social, ya que, a simple vista, se podría incluir varios programas en esta categoría, generando confusión en la determinación de la pena y aplicación de sanciones. El legislador tiene la obligación de redactar con la mayor claridad posible, evitando ambigüedades y decisiones subjetivas por parte del juez.

Respecto al monto ascendente a S/ 44,000.00 (10 UIT) tampoco se considera adecuada aquella precisión debido a que no todas las obras, proyectos, así como

el dinero que se invierta en programas con fines asistenciales tendrán el mismo valor. ¿Qué sucede con aquellas obras cuyo monto sea menor a la 10 UIT? ¿Tampoco merecerían la misma protección? Lo importante es proteger el bien jurídico agua potable, ya que ha sido reconocido como un derecho humano necesario para la vida. En la propuesta no se está protegiendo cualquier bien jurídico, sino un bien jurídico de importancia para toda la población.

TOMA DE POSTURA

Es necesaria realizar una especificación respecto a las circunstancias agravantes recientemente incorporadas al tipo penal de Colusión, debido a que en su redacción se señala de manera general que la pena será mayor cuando la conducta delictiva recaiga sobre programas con fines asistenciales sin especificar a que tipo de programas se encuentran incluidos en esa definición, en consecuencia es necesario que el legislador redacte con la mayor claridad posible, evitando ambigüedades y decisiones subjetivas por parte del juez. Debe especificar que la sanción será mayor cuando recaiga sobre obras de agua potable y saneamiento, ya que el derecho al agua potable es un derecho humano esencial para el pleno goce de la vida, una persona que no cuenta con acceso al servicio de agua potable no solo se muestra vulnerable en una situación de calamidad o emergencia sanitaria, sino que por el contrario se encuentra vulnerable hasta el momento en que se le provea del servicio de agua potable.

5.2. RESULTADOS DE VALIDACIÓN DE VARIABLES

Conforme se puede apreciar de la construcción anterior que discute cada uno de los planteamientos generados en función de los objetivos específicos, corresponde a esta fase de la validación de las variables, que, cada una de las

determinaciones como tomas de postura, se ordenen en razón de los ejes temáticos como son las variables, a fin de reconocer a través de la síntesis si el verdadero sentido del concepto de cada una de ellas en razón del análisis científicos que otorga la razón al derecho. Tales resultados adquieren la misma categoría de las variables pero con el fundamento teórico y analítico generado por el desarrollo de la investigación.

5.2.1. Respecto a la variable independiente: La ampliación del bien jurídico protegido en el delito de colusión

Según lo recopilado, en la validación de los objetivos “Describir dogmáticamente la naturaleza jurídica del tipo penal de colusión y la interpretación del bien jurídico protegido”, “Proponer una circunstancia agravante en el tipo penal de Colusión respecto a la protección especial del derecho fundamental al agua potable” y “Analizar la posibilidad de determinar si resulta jurídicamente apropiada la ampliación del tipo penal de colusión respecto a la protección especial del derecho fundamental al agua potable”, el delito de Colusión es un delito de infracción de deber cuyo bien jurídico es el normal y recto funcionamiento de la administración pública, debido a que el sujeto activo deberá ser necesariamente un funcionario o servidor público, los que son sancionados por no cumplir con el correcto desempeño de las labores y deberes que se le asignan, además de ello, el bien jurídico protegido específico del delito de colusión es la asignación eficiente de los recursos públicos en los diferentes procesos de contratación pública que realiza el Estado para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, entendiendo que una buena administración de los recursos que otorga el Estado se refleja en la entrega de servicios públicos, los mismos que deben reunir los requisitos de calidad, plazo de ejecución y entrega.

Recientemente se ha realizado modificaciones en el tipo penal de colusión respecto a circunstancias agravantes si se producen en emergencia sanitaria o de calamidad pública, pese a las modificaciones indicadas, aún no se percibe como garantizada la protección penal respecto al derecho fundamental al agua potable.

El legislador debe especificar de forma clara, con el fin de evitar ambigüedades y decisiones subjetivas por parte del juzgador, se debe especificar que la sanción será mayor cuando recaiga sobre obras de agua potable y saneamiento, ya que se trata de un derecho humano esencial para el pleno goce de la vida, una persona que no cuenta con acceso al servicio de agua potable no solo se muestra vulnerable en una situación de calamidad o emergencia sanitaria, sino que seguirá vulnerando su derecho fundamental al agua potable hasta que no se le provea de un servicio permanente, a través de obras completas y ejecutadas en el plazo correspondiente; por lo mismo que, la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación:

La ampliación del ámbito de protección del bien jurídico en el delito de colusión es insuficiente para garantizar la prestación de servicios por parte del Estado.

5.2.2. Respecto a la variable dependiente: La garantía del derecho fundamental al agua potable

Según lo recopilado, en la validación de los objetivos ““Desarrollar doctrinariamente la teoría del derecho fundamental al agua potable”, la regulación agua potable como derecho humano ha sido reconocido por las Naciones unidas, reafirmando como un derecho que permite la realización de otros derechos

fundamentales como el relacionado a la salud, también se encuentra reconocido en la Constitución Política del Perú como derecho fundamental, sin embargo en pleno siglo XXI la población no puede ejercer totalmente este derecho humano esencial, una de las causas son las malas prácticas en la administración o acciones corruptas en el sector de la contratación pública, las cuales se ejercen en la ejecución de obras y proyectos; por lo mismo que la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación:

La garantía del derecho fundamental al agua potable requiere de la intervención del Derecho Penal para apoyar la garantía del acceso a toda la ciudadanía.

5.3. CONTRASTACION DE HIPOTESIS

Para alcanzar la contrastación de hipótesis se procederá a elaborar una hipótesis conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la validación de variables, resultados que será confrontado con la hipótesis inicial, operación que a continuación se desarrolla:

Hipótesis conclusiva:

La ampliación del ámbito de protección del bien jurídico en el delito de colusión es insuficiente para garantizar la prestación de servicios por parte del Estado; por lo tanto, la garantía del derecho fundamental al agua potable requiere de la intervención del Derecho Penal para apoyar la garantía del acceso a toda la ciudadanía.

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS	
HIPOTESIS INICIAL	HIPOTESIS CONCLUSIVA

<u>Si se toma como argumento la</u> <u>percepción del bien jurídico en</u> <u>función al interés social; entonces,</u> <u>jurídicamente resulta apropiada la</u> <u>ampliación del tipo penal de colusión</u> <u>respecto a la protección especial del</u> <u>derecho fundamental al agua potable</u>	<u>La ampliación del ámbito de</u> <u>protección del bien jurídico en el</u> <u>delito de colusión es insuficiente para</u> <u>garantizar la prestación de servicios</u> <u>por parte del Estado; por lo tanto, la</u> <u>garantía del derecho fundamental al</u> <u>agua potable requiere de la</u> <u>intervención del Derecho Penal para</u> <u>apoyar la garantía del acceso a toda la</u> <u>ciudadanía.</u>
---	--

¿Qué elementos relacionales se encuentran entre las dos determinaciones de la contrastación?

En los delitos contra la administración pública el bien jurídico protegido es de carácter colectivo, es decir, que tienen que ser aprovechados por todos los ciudadanos sin discriminación alguna, teniendo como finalidad satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía.

El delito de colusión es un delito contra la administración pública, cuyo bien jurídico protegido es el normal y correcto funcionamiento de la administración pública. Los funcionarios y servidores públicos que integran la administración deben servir con responsabilidad, transparencia, igualdad, eficacia y eficiencia para lograr el bienestar de la ciudadanía, debiendo hacer prevalecer el interés general respecto de los intereses particulares.

Los funcionarios o servidores públicos tienen la responsabilidad de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales en condiciones de igualdad a través de la prestación de servicios públicos como la atención médica, la educación, el suministro de agua potable, etc. La igualdad en el acceso al agua potable es indispensable para el desarrollo de los ciudadanos, debido a que tanto los ciudadanos de la zona rural tienen el mismo derecho de acceder al servicio de agua potable como los ciudadanos que viven en las zonas urbanas. De esta forma el derecho de acceso al agua potable no solo permite el ejercicio de los derechos fundamentales vida y salud, sino también el derecho de igualdad.

La administración pública cumple fines sociales, se pone a disposición de la sociedad mediante la adecuada prestación de servicios públicos dándose cumplimiento efectivo a su finalidad, sobre ello hace referencia la hipótesis inicial, lo cual es recogido por la determinación final, en tanto que lo ya explicado como acción social que le corresponde al Estado, resulta ser insuficiente de acuerdo a la observación realizada en el trabajo académico.

Luego en lo que corresponde a la indicación del cambio o ampliación del tipo penal con el fin de asegurar la protección de los intereses colectivos referentes al agua potable, se aprecia en la construcción de la hipótesis conclusiva el hecho de que hace falta una adecuada comprensión normativa que permita la garantía directa respecto al derecho fundamental al agua potable, esto es la implementación en el tipo penal de colusión.

¿Cuál es el nivel de prueba de la hipótesis conclusiva respecto de la hipótesis inicial?

Se alcanza a probar en razón al interés social planteado en la hipótesis inicial y que se desarrolla en la hipótesis conclusiva al hablar de la garantía del servicio.

Gracias al interés social el Derecho Penal puede intervenir en los delitos contra la administración pública, ya que el correcto y buen funcionamiento de la misma es un bien jurídico protegido por la constitución. La administración pública exterioriza el cumplimiento de sus fines sociales y prestacionales a través del buen uso de los recursos públicos para la ejecución de programas, obras, proyectos y prestación de servicios, los cuales deben cumplir con los requisitos de calidad, con el plazo de ejecución y su entrega. La razón de ser de la administración pública es el ciudadano, la cual permite que este ejerza sus derechos fundamentales, por ejemplo a través de una adecuada prestación del servicio de agua potable y saneamiento, el ciudadano ejerce el derecho fundamental de acceso al agua potable; a través de la atención de salud que se recibe en las postas médicas el ciudadano ejerce su derecho a la salud, cuando un niño se matricula en un colegio público esta ejerciendo su derecho a la educación, etc.

Debido a los actos de corrupción en la contratación pública no se puede mejorar las condiciones de vida de la población, más aún cuando se trata de servicios públicos esenciales como el agua potable, un derecho reconocido en la constitución debido a su importancia para el desarrollo de la vida.

¿Cómo se puede plasmar la propuesta planteada por la determinación final?

La contratación pública es uno de los ámbitos donde más se generan actos de corrupción, debido a las grandes cantidades que se invierten para la ejecución de obras, proyectos y la prestación de servicios. Según el informe de la Defensoría del pueblo son muchas las quejas de los ciudadanos porque las obras de infraestructura de servicio de agua potable y saneamiento, no se realizan, se encuentran inconclusas o si fueron terminadas no funcionan adecuadamente, dejando a la población sin el acceso a este servicio de vital importancia en su vida cotidiana.

El acceso al agua potable es un derecho con reconocimiento constitucional, por ende, el Estado tiene la obligación de establecer mecanismos de control que aseguren la adecuada ejecución de las obras públicas de servicio de agua potable y saneamiento.

Es posible la intervención del Derecho Penal ante la falta de control por parte de las autoridades administrativas para identificar los actos de corrupción propiciados por los mismos funcionarios y servidores públicos. Con la finalidad de que los ciudadanos puedan ejercer este derecho fundamental.

En el delito de colusión es necesario contemplar de manera específica que cuando se trate de proyectos, programas y obras de infraestructura de servicio de agua potable se establezca como una agravante, debido a la importancia de este derecho fundamental protegido por la Constitución Política, para garantizar el bienestar de la población en todo momento. Bien es sabido que no solo se vulnera el derecho de acceso al agua potable en tiempo de una emergencia sanitaria o calamidad pública, esta vulneración sigue existiendo hasta que los ciudadanos no tengan un acceso permanente con obras de infraestructura de servicio de agua potable concluidas y eficientes.

El legislador tiene la tarea de redactar el tipo penal de manera clara y precisa, no tan solo para el entendimiento del juzgador, sino también para que todos los ciudadanos puedan entender el significado del tipo penal, con la finalidad de que adecuen sus comportamientos a lo que prohíbe la norma jurídica. Para lograr su efectiva protección se justifica la intervención del Derecho Penal, como un mecanismo para la disminución de los actos de corrupción en las obras de agua potable y saneamiento.

CONCLUSIONES

Primera:

Se ha logrado concluir en función a la teoría del derecho fundamental al agua potable que, es un derecho humano esencial para el goce pleno de la vida y permite la realización de otros derechos fundamentales. Pese a tal reconocimiento toda la población no cuenta con el acceso al agua potable, una de las causas son los actos de corrupción en la contratación pública de obras de infraestructura de agua potable, siendo responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos actuar con diligencia y control para que dichas obras concluyan con éxito. El acceso al agua potable es un derecho con reconocimiento constitucional, por ende, es posible la intervención del Derecho Penal como un mecanismo para la disminución de los actos de corrupción en las obras de agua potable y saneamiento.

Segunda:

Se ha logrado concluir en función a la naturaleza jurídica del tipo penal de colusión y la interpretación del bien jurídico protegido que, respecto al ámbito de protección del delito de colusión no ha resultado ser eficaz, pese a las muchas modificaciones que ha sufrido el tipo penal, no disminuyen los actos de corrupción en las diferentes etapas de la contratación pública de los proyectos y obras de los servicios de agua potable, y más aún siguen existiendo ciudadanos que no tienen acceso a este servicio de vital importancia, debido a las obras inconclusas o realizadas con deficiencias pese a que el Estado invierte grandes cantidades de dinero en su ejecución.

Tercera

Se ha logrado concluir en función a la posibilidad de determinar si resulta jurídicamente apropiada la ampliación del tipo penal de colusión respecto a la protección especial del derecho fundamental al agua potable que, el tipo penal de colusión ya se estableció como circunstancia agravante que la pena será mayor cuando el agente se aproveche de una situación de calamidad pública o emergencia sanitaria. Sin embargo, no solo debería ser cuando la población se encuentre en una situación de calamidad o emergencia sanitaria. En el caso del servicio de agua potable es un servicio que se necesita todos los días y en todas las horas del día. Esta circunstancia agravante no solo debería aplicarse para situaciones en determinados tiempos, sino de manera permanente.

Cuarta:

Se ha logrado concluir en función a la propuesta de una circunstancia agravante en el tipo penal de Colusión respecto a la protección especial del derecho fundamental al agua potable que, es necesaria realizar una especificación respecto a las circunstancias agravantes recientemente incorporadas al tipo penal de Colusión, debido a que en su redacción se señala de manera general que la pena será mayor cuando la conducta delictiva recaiga sobre programas con fines asistenciales sin especificar a qué tipo de programas se encuentran incluidos en esa definición, en consecuencia es necesario que el legislador especifique que la sanción será mayor cuando recaiga sobre obras de agua potable y saneamiento, evitando ambigüedades y decisiones subjetivas por parte del juez.

RECOMENDACIONES

Primera:

Se recomienda la modificación del artículo 384° del Código Penal referido a la colusión simple y agravada. Se debe señalar de manera específica que cuando exista actos de corrupción que estén incursos en la contratación pública respecto a los proyectos y obras de infraestructura de servicio de agua potable y saneamiento la pena será mayor. Debido a que el derecho fundamental al acceso de agua potable se encuentra reconocido por la Constitución Política, siendo obligación del Estado Peruano utilizar todos los mecanismos de protección para hacer viable el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por ello recomienda una especificación en el artículo 384° del código penal, señalando de manera concreta el término servicio público de agua potable en el inciso 2 del párrafo tercero del tipo penal de colusión.

REGULACIÓN ACTUAL

Artículo 384. Colusión simple y agravada

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años; inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de cinco a veinte años; y, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

(...)

La pena será privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinte años; inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de naturaleza perpetua, y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa, cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos:

(...)

2. La conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados supere las diez unidades impositivas tributarias.

(...)

REGULACIÓN ESPECÍFICA

Artículo 384. Colusión simple y agravada

(...)

La pena será privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinte años; inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de naturaleza perpetua, y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa, cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos:

(...)

2. La conducta recaiga sobre **obras de servicio público de agua potable y saneamiento**, programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados supere las diez unidades impositivas tributarias.

(...)

Segunda:

En el mismo inciso 2 del párrafo tercero del artículo 384° del Código penal, se señala que constituye circunstancia agravante siempre que el valor de los bienes, efectos dinero o ganancia involucrada supere las 10 UIT, lo cual se entiende que en el caso que el valor de dicho dinero no sobrepase a las 10 UIT, se estaría fomentando la realización de este delito sobre cantidades pequeñas, menores a las diez unidades impositivas tributarias. Este criterio no sería aplicable para las obras de infraestructura de servicio de agua potable, ya que cualquiera sea el valor total de su ejecución tiene que concluirse en su totalidad y sin presentar ninguna deficiencia para que los ciudadanos tengan el acceso a este servicio. Cuando se habla de un servicio de vital importancia como es el suministro de agua potable no deben existir parámetros de carácter económico y tampoco de tiempo, por ejemplo, cuando se considera como circunstancia agravante que el delito de colusión sea realizado en una situación de calamidad o emergencia sanitaria, no sería adecuada tal descripción en el servicio de agua potable y saneamiento, ya que se trata de un servicio permanente y continuo. La ciudadanía requiere de este servicio todos los días y se seguirá vulnerando su derecho fundamental de acceso al agua potable hasta que no cuente con la prestación adecuada de dicho servicio.

Bibliografía

Autoridad Nacional del Agua. (2009). *Ley de los recursos hídricos. Ley N° 29338*.

Lima: Autoridad Nacional del Agua. Obtenido de <http://repositorio.ana.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12543/228/ANA0000044.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Abanto Vásquez, M. A. (2006). Acerca de la teoría de bienes jurídicos. *Revista*

Penal, 3-44. Obtenido de <http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/12232/Acerca.pdf?sequence=2>

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

(2017). *Exigibilidad de los derechos humanos al agua y saneamiento*.

Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Obtenido de <https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/FCAS/Generales/exigibilidad-web.pdf>

Alcácer Guirao, R. (1998). Los fines del Derecho Penal. Una aproximación desde

la filosofía política. *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, 365-588. Obtenido de [file:///C:/Users/Welcome/Downloads/Dialnet-LosFinesDelDerechoPenal-234093%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/Welcome/Downloads/Dialnet-LosFinesDelDerechoPenal-234093%20(3).pdf)

Alponte, J. M. (2012). *Lecturas filosóficas*. Mexico: Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. Obtenido de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4518/29.pdf>

Anchondo Paredes, V. E. (2012). Métodos de interpretación jurídica. *Quid Iuris*, 33-58. Obtenido de file:///C:/Users/House/Downloads/17406-15641-1-PB.pdf

Anchondo Paredes, V. E. (2012). Métodos de interpretación jurídica. *Iuris Quid*, 33-58. Obtenido de <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/quid-iuris/article/view/17406/15614>

Andaluz Westreicher, C. (2006). *Manual de derecho ambiental*. Lima: Grijley E.I.R.L.

Andaluz Westreicher, C. (2013). *Manual de Derecho Ambiental*. Lima: Grijley EIRL.

Andina agencia peruana de noticias. (7 de Febrero de 2020). *Inversión pública: Ministerio de Vivienda ejecutó 146% de su presupuesto en enero*. Obtenido de Andina agencia peruana de noticias: <https://andina.pe/agencia/noticia-inversion-publica-ministerio-vivienda-ejecuto-146-su-presupuesto-enero-784283.aspx>

Angulo Caicedo, N. (2017). *"Política y persona. Visión Política del personalismo desde una lectura contemporánea de Emmanuel Mounier"*. Bogotá: Universidad Católica de Colombia. Obtenido de <https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15099/1/TESIS%20%E2%80%9CPOLITICA%20%20Y%20PERSONA.%20VISION%20P>

OLITICA%20DEL%20PERSONALISMO%20DESDE%20UNA%20LE
CTURA%20%20CONTEMPORANEA%20DE%20.pdf

Arana Muñoz, J. R. (2015). Dimensiones del Estado Social y derechos fundamentales sociales. *Revista Investigações Constitucionais*, 31-62. Obtenido de <http://www.scielo.br/pdf/rinc/v2n2/2359-5639-rinc-02-02-0031.pdf>

Armenteras, D., Gonzáles, T. M., Vergara, L. K., Luque, F. J., Rodríguez, N., & Bonilla, M. A. (2016). Revisión del concepto de ecosistema como "unidad de la naturaleza" 80 años después de su formulación. *Ecosistemas Revista Científica de ecología y medio ambiente*, 83-89. Obtenido de <file:///C:/Users/Welcome/Downloads/1110-3923-1-PB.pdf>

Aróstegui Hirano, J. (2012). El acceso a un servicio público de calidad, continuidad del servicio y rol del regulador. *Revista de Derecho Administrativo*, 45-52. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/13488/14115>

Asamblea Mundial de la Salud. (1992). *Evaluación del decenio internacional del agua potable y del saneamiento ambiental, 1981-1990: Informe del Director General*. Organización Mundial de la Salud. Obtenido de https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/202688/WHA45_15_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Autoridad Nacional de Agua. (2019). *Ley de los Recursos Hidricos LEY N° 29338*. Lima: Autoridad Nacional del Agua. Obtenido de

<http://repositorio.ana.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12543/228/ANA000044.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Autoridad Nacional del Agua. (Enero de 2010). Obtenido de https://www.ana.gob.pe/sites/default/files/publication/files/reglamento_lrh_-_no_29338_0.pdf

Autoridad Nacional del Agua. (2010). *Reglamento de la ley de Recursos Hídricos*. Lima.
doi:https://www.ana.gob.pe/sites/default/files/publication/files/reglamento_lrh_-_no_29338_0.pdf

Autoridad Nacional del Agua. (2017). *Reglamento de Organización y funciones de la Autoridad Nacional del Agua*. Autoridad Nacional del Agua. Obtenido de https://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/rof_ds018.pdf

Barba Alvaréz, R. (2011). El agua como derecho fundamental y su protección jurídico penal. *Revista Prolegómenos - Derechos y Valores*, 213-229. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/876/87619038015.pdf>

Basto Sáez, M. J. (2017). *La teoría de la interpretación jurídica y el conocimiento ético-intelectual de los abogados independientes de la provincia de Huancavelica*. Huancavelica: Universidad Nacional de Huancavelica. Obtenido de [64/TESIS_2018_DOCTORADO_DERECHO%20Y%20CIENCIAS%20POLÍTICAS_MANUEL%20JESÚS%20%20BASTO%20SÁEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.unahu.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12543/228/64/TESIS_2018_DOCTORADO_DERECHO%20Y%20CIENCIAS%20POLÍTICAS_MANUEL%20JESÚS%20%20BASTO%20SÁEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Bazán Villanueva, L. F., & Checco Chauca, L. A. (6 de Mayo de 2020). Ley que modifica e incorpora en el código penal la inhabilitación perpetua e incrementa la penas ante delitos de corrupción durante emergencias sanitarias y ambientales. Lima, Perú, Perú. Obtenido de https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05114_20200506.pdf

Becerra Ramírez, J. D., & Salas Benítez, I. (2016). El derecho humano al acceso al agua potable: Aspectos filosóficos y constitucionales de su configuración y garantía en Latinoamérica. *Prolegómenos: Derechos y valores*, 125-146. Obtenido de <file:///C:/Users/Welcome/Downloads/Dialnet-ElDerechoHumanoAlAccesoAlAguaPotable-5331224.pdf>

Becerra Ramírez, José De Jesús; Salas Benítez, Irma. (2016). El Derecho humano al acceso al agua potable: Aspectos filosóficos y constitucionales de su configuración y garantía en Lationamérica. *Prolegómenos- Derechos y valores*, 125-146. Obtenido de <file:///C:/Users/House/Downloads/1684-Texto%20del%20art%C3%ADculo-4148-1-10-20160201.pdf>

Cairampoma Arroyo, A., & Villegas Vega, P. (2016). El acceso universal al agua potable. La experiencia peruana. *Derecho PUCP revista de la facultad de Derecho*, 229-250. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/14855/15397>

Carrión Díaz, J. E. (2019). ¿Responsabilidad penal o administrativa de la persona jurídica? Algunos alcances a partir de la Ley N° 30424. *Gaceta Penal & Procesal Penal*, 318-333. Obtenido de

<https://drive.google.com/file/d/1ZflItJpZ1YsO9Yv1SE2UFA6qsjDFPVR9/view?fbclid=IwAR3AFrzHP7YaapCPx-BGK60CjDB1TOL8C-iwPH4yrU19duVVphZSc9quzFE>

Caso Cesar Augusto Zuñiga López contra Corte Superior de Justicia de La Libertad, 6546-2006-PA/TC (Tribunal Constitucional 07 de Noviembre de 2007). Obtenido de LP Pasión por el Derecho: https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2017/06/El-derecho-al-agua-recientemente-reconocido-por-la-Constitucion-ya-hab%C3%ADa-sido-reconocido-por-el-TC-hace-10-anos-Legis.pe_.pdf

Caso José Miguel Morales Dasso, en representación de cinco mil ciudadanos (demandante) contra el Congreso de la República (demandado). , 0048-2004-PI/TC (El Tribunal Constitucional 1 de Abril de 2005). Obtenido de <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00048-2004-AI.pdf>

Caso José Severo Camacho Galván contra la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Huancayo, 9-2018 (Sala Penal Permanente 26 de Junio de 2019). Obtenido de <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cf9324004aa2f79abceafcd1306a5ccd/CS-SPP-C-09-2018-JUNIN.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=cf9324004aa2f79abceafcd1306a5ccd>

Castaño Zuluaga, L. O. (2012). La Teoría de la constitución. En C. M. Molina Bentacur, D. Mendieta Gonzáles , F. Peláez Arango, J. F. Restrepo Tamayo, J. M. Ferrer Murillo, J. F. Toledo Perdomo, . . . M. A. Gallo Callejas, *Derecho Constitucional General* (págs. 285-329). Medellín:

Sello editorial Universidad de Medellín. Obtenido de
<https://ebooks.udem.edu.co/pdfreader/derecho-constitucional-general>

Cenicacelaya, M. D. (2011). El Derecho al agua en Latinoamerica. *Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales*, 86-96. Obtenido de
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/19356/Documento_completo_.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Centro de asesoría laboral del Perú- CEDAL y centro de investigación social y educación popular. (2005). *Desafíos de Derecho humano al agua en el Perú*. Lima: Plataforma peruana de Derechos humanos, democracia y desarrollo. Obtenido de
<http://www.ingenieroambiental.com/4030/libroaguaedicion2.pdf>

Centro de asesoría laboral del Perú- CEDAL y centro de investigación social y educación popular. (2005). *Desafíos de Derecho humano al agua en el Perú*. Lima: CEDAL. Obtenido de
<http://www.ingenieroambiental.com/4030/libroaguaedicion2.pdf>

Chirinos Soto, F. (2014). *Código Penal comentado-concordado-jurisprudencia*. Lima: RODHAS SAC.

Ciuro Caldani, M. A. (2006). Acerca de la elaboración de las normas del contrato. *Revista electrónica de Teórica y Práctica de la elaboración de normas jurídicas*, 3-24. Obtenido de
http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/re_tpenj_004.pdf

Congreso de la República de Colombia. (18 de enero de 2011). *LEY 1437 DE 2011*. Colombia. Obtenido de

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.htm

l#11

Contreras, S. (2012). Ferrajoli y los derechos fundamentales. *Revista de la Inquisición (Intolerancia y Derechos Humanos)*, 121-145. Obtenido de [file:///C:/Users/House/Downloads/Dialnet-FerrajoliYLosDerechosFundamentales-4037665%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/House/Downloads/Dialnet-FerrajoliYLosDerechosFundamentales-4037665%20(1).pdf)

Cordero Torres, J. (2011). Los servicios públicos como derecho de los individuos. *Ciencia y sociedad*, 682-701. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/870/87022786005.pdf>

Correa Fontecilla, J. (2006). Algunas consideraciones sobre el interés público en la política y el derecho. *Revista española de control externo*, 135-161. Obtenido de <file:///C:/Users/House/Downloads/Dialnet-AlgunasConsideracionesSobreElInteresPublicoEnLaPol-2254414.pdf>

Correa Fontecilla, J. (2006). Algunas consideraciones sobre el interés público en la política y el Derecho. *Revista española de control externo*, 135-161. Obtenido de [file:///C:/Users/House/Downloads/Dialnet-AlgunasConsideracionesSobreElInteresPublicoEnLaPol-2254414%20\(6\).pdf](file:///C:/Users/House/Downloads/Dialnet-AlgunasConsideracionesSobreElInteresPublicoEnLaPol-2254414%20(6).pdf)

Danós Ordóñez, J. (2008). El régimen de los servicios públicos en la constitución peruana. *THEMIS Revista de Derecho*, 255-264. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/9236/9650>

Del Castillo, L. (2009). *Los foros del agua*. Buenos Aires: Consejo Argentino para las relaciones internacionales. Obtenido de <http://www.cari.org.ar/pdf/forosdelagua.pdf>

- Del Castillo, L. (2009). *Los foros del agua de Mar de Plata a Estambul 1977-2009*. Buenos Aires: Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Obtenido de <http://www.cari.org.ar/pdf/forosdelagua.pdf>
- Delpiazzo, C. (2012). Bien común, sociedad y Estado. *Revista de Derecho*, 83-87. Obtenido de <http://revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2012/10/DERECHO-21.pdf>
- Departamento de Derecho Internacional, OEA. (27 de Enero de 1999). *Resoluciones de Asamblea General*. Obtenido de Código de ética de la función pública: <https://www.oas.org/juridico/spanish/etica1.htm>
- Diario Oficial del Bicentenario El Peruano. (8 de Febrero de 2020). *Diario Oficial del Bicentenario El Peruano*. Obtenido de MVCS ejecutó 146% de su presupuesto: <http://www.elperuano.pe/noticia-mvcs-ejecuto-146-su-presupuesto-89611.aspx>
- Diario Oficial El Peruano. (13 de Agosto de 2002). LEY N° 27815. *El Peruano*, págs. 228136-228138. Obtenido de <http://www4.congreso.gob.pe/historico/cip/temas/descentralizacion/pdf/09A01.pdf>
- Diario Oficial El Peruano. (7 de Junio de 2012). Declaran fundada demanda de inconstitucionalidad en extremo referido a la modificación del artículo 384° del Código Penal a través de la Ley N° 29703 y en consecuencia nulo y carente de todo efecto la expresión “patrimonialmente”. *Diario Oficial El Peruano*, págs. 467942-467947. Obtenido de <https://busquedas.elperuano.pe/download/url/declaran-fundada-demanda->

de-inconstitucionalidad-en-extremo-sentencia-exp-n-00017-2011-pitc-797546-1

Díaz Castillo, I. (2016). *El tipo de injusto de los delitos de colusión y negociación incompatible en el ordenamiento jurídico peruano*. Salamanca: Universidad de Salamanca. Obtenido de https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/131865/DDPG_DiazCastillo_TipoInjustodelitoscolusion.pdf;jsessionid=D5DE7BD153E1D0E37C989EB83327DC97?sequence=1

Díaz Muñoz , K. E. (2018). *Necesidad de clasificar las atenuantes privilegiadas para una correcta determinación judicial de la pena en el código penal peruano*. Huaraz: Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo". Obtenido de http://repositorio.unasam.edu.pe/bitstream/handle/UNASAM/2330/T033_72486750_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y

El Peruano. (26 de Setiembre de 2015). Decreto Legislativo N° 1240. *El Peruano*, págs. 562312-562320. Obtenido de <http://www3.vivienda.gob.pe/direcciones/documentos/Dec-Leg-1240.pdf>

El Peruano. (26 de Abril de 2020). Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. *Diario Oficial El Peruano*, págs. 8-33. Obtenido de <http://www.gestoresdeaguasegura.org/wp-content/uploads/2020/01/2020-04-26-DS-005-2020-TUO-DL-1280.pdf>

- Elizalde, A., Martí Vilar, M., & Martínez Salvá, F. (2006). Una revisión crítica del debate sobre las necesidades humanas desde el enfoque centrado en la persona. *Polis Revista Latinoamericana*, 1-23. Obtenido de file:///C:/Users/Welcome/Downloads/polis-4887.pdf
- Fehér, M. (2000). Lo natural y lo artificial. *Teorema Revista Internacional de Filosofía*, 1-7. Obtenido de file:///C:/Users/Welcome/Downloads/teorema04b.pdf
- Fernández, F. (30 de Mayo de 2017). *Lambayeque sufre por falta de agua pese a inversión de S/ 1,500 millones en obras*. Obtenido de Diario El Correo: <https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/lambayeque-sufre-por-falta-de-agua-pese-a-inversion-de-s-1-500-millones-en-obras-752803/>
- Ferrero Rebagliati, R. (2000). *Ciencia Política. Teoría del Estado y Derecho Constitucional General y comparado*. Lima: Grijley.
- Flores García, A. I. (2017). *Protección jurídica de las aguas subterráneas como elemento integrante del medio ambiente en el Derecho Español*. Madri: Universidad Europea LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES. Obtenido de <https://www.fundacionaquae.org/wp-content/uploads/2019/07/TESIS-ANA-ISABEL-FLORES-PORTADA.pdf>
- Fonseca Tapia, C. (2010). *Manual de Derecho ambiental*. Arequipa: Adrus, S.R.L.
- Freddyur Tovar, L. (2008). Positivación y protección de derechos humanos. *Criterio jurídico*, 45-72. Obtenido de

<https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/view/306/1125>

French, A. (2016). ¿Una nueva cultura de agua?: inercia institucional y gestión tecnocrática de los recursos hídricos en el Perú. *Anthropologica Del Departamento De Ciencias Sociales*, 61-86. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/article/view/14836/16545>

Gamarra Barrantes, C. (2007). La regulación de los recursos naturales. *Actualidad Jurídica*, 276-280. Obtenido de <http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/894/2007/11/Carolina-Gamarra.pdf>

Gamarra Barrantes, C. (s.f.). La regulación de los recursos naturales. *Actualidad Jurídica*, 276-280. Obtenido de <file:///C:/Users/Welcome/Downloads/La%20regulaci%C3%B3n%20de%20los%20Recursos%20Naturales%20Carolina%20Gamarra.pdf>

García Cárdenas, S. C. (2018). *El delito de peculado y su implicancia en el delito de lavado de activos en el sistema penal peruano*. Perú: Escuela de posgrado Universidad Cesar Vallejo. Obtenido de http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/16134/Garc%C3%ADa_CSC.pdf?sequence=1

García de Durango, Á. (29 de Octubre de 2015). *iagua*. Obtenido de "El reto de OTASS es lograr que las EPS doten a todos los peruanos del servicio básico de agua": <https://www.iagua.es/noticias/peru/otass/15/10/29/reto-otass-es-lograr-que-eps-doten-todos-peruanos-servicio-basico-agua>

García Máynez, E. (1953). *Introducción al estudio del Derecho*. Lima: Porrúa.

García Toma, V. (2008). *Los Derechos fundamentales*. Lima: Jurista Editores E.I.R.L.

Garrido Gòmez, M. I. (2011). Lo que queda del principio clàstico Pacta Sunt Servanda. *Derecho y cambio socia*, 1-8. Obtenido de file:///C:/Users/Welcome/Downloads/Dialnet-LoQueQuedaDelPrincipioClasicoPactaSuntServanda-5497978%20(2).pdf

Genoveva, P. G. (2017). *Delitos de corrupción de funcionarios y servidores públicos en los gobiernos locales*. Lambayeque: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Obtenido de <http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/UNPRG/1307/BC-TES-TMP-140.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Gobierno de España. Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes y memoria democràtica. (24 de Noviembre de 1995). *Ley Orgànica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal*. Obtenido de Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-25444>

Gómez Apac, H., Isla Rodríguez, S., & Mejía Trujillo, G. (2010). Apuntes sobre la Graduación de Sanciones por Infracciones a las Normas de Protección al Consumidor. *Asociación Civil Derecho & Sociedad*, 134-146. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13336/13963>

- González Ojeda, M. (2004). El Estado Social y democrático de Derecho y el Estado Peruano. *Asociación Civil Derecho & Sociedad*, 144-159. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/16863/17172>
- Guabloche, J. (Setiembre de 2018). Perú: cumplimiento de los objetivos de DESARROLLO SOSTENIBLE. *Moneda*, 23-29. Obtenido de <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-175/moneda-175.pdf>
- Guevara Gil, A. (2008). *Derechos y conflictos de agua en el Perú*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Obtenido de <https://departamento.pucp.edu.pe/derecho/wp-content/uploads/2019/05/derechos-y-conflictos-de-agua-en-el-peru.pdf>
- Guevara Pérez, E. (2015). Evolución histórica de la legislación hídrica en el Perú. *Circulo de Derecho Administrativo*, 319-334. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/15184/15674>
- Guimaray Mori, E. (2011). La tipificación penal del delito de Colusión. *Boletín N° 7 Proyecto de Anticorrupción*, 2-6. Obtenido de https://idehpucp.pucp.edu.pe/images/documentos/anticorrupcion/boletin/octubre_2011_n07.pdf
- Hernández Díez, S. (2012). *Estructura de las redes de corrupción en los procesos de selección de obras públicas en el sector Transportes y Comunicaciones entre los años 2005 y 2010*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú

Escuela de Gobierno. Obtenido de
[http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/657A0F017445AEFD052580D6006BB389/\\$FILE/HERNANDEZ_DIEZ_SANDRO.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/657A0F017445AEFD052580D6006BB389/$FILE/HERNANDEZ_DIEZ_SANDRO.pdf)

Huapaya Tapia , R. (2015). Concepto y régimen jurídico del servicio público en el ordenamiento público peruano. *Iust Et Veritas*, 368-397. Obtenido de <file:///C:/Users/House/Downloads/14827-Texto%20del%20art%C3%ADculo-58868-1-10-20160520.pdf>

Huapaya Tapia, R. (2014). El régimen constitucional y legal de los recursos naturales en el ordenamiento jurídico peruano. *Círculo de Derecho Administrativo* 3, 327-339. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/13455/14082>

Hurtado Pozo, J. (2011). Relaciones entre el Derecho Penal y el Derecho Civil respecto al delito de hurto en el Código Penal peruano. *Revista Oficial del Poder Judicial*, V(7), 231-253. Obtenido de <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/25ec29804e3b3af2816689a826aedadc/10.+Doctrina+Nacional+-+Jos%C3%A9+Hurtado+Pozo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=25ec29804e3b3af2816689a826aedadc>

Iberley. (31 de Enero de 2020). *Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico*. Obtenido de Iberley : <https://www.iberley.es/temas/delitos-contrapatrimonio-ordensocioeconomico-47981>

INDECOPI, Autoridad Nacional de Protección del Consumidor. (s.f.).

INDECOPI, Autoridad Nacional de Protección del Consumidor. Obtenido de Servicios públicos : <https://www.consumidor.gob.pe/servicios-publicos>

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (6 de Junio de 2017). *La corrupción desplaza a la delincuencia como principal problema que afecta al país.* Obtenido de Instituto Nacional de Estadística e Informática: <https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/la-corrupcion-desplaza-a-la-delincuencia-como-principal-problema-que-afecta-al-pais-9792/>

International, Transparency. (2008). *Informe global de la corrupción 2008.* Cambridge: Cambridge University Press. Obtenido de file:///C:/Users/House/Downloads/2008_GCR_ES.pdf

Jakobs, G. (1997). *Derecho Penal Parte General - Fundamentos y teoría de la imputación.* Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S. A. Obtenido de <https://drive.google.com/file/d/1pkDyI4cdWkHqJlk8ujJx253GWt2SCGjU/view?fbclid=IwAR26Xcb6Jvp04Qy8G6BJZPl5rrTiDoXmPAXv2a8VPJFjQnyJFMvy1BMl5M8>

Krebs W, R. (1979). La Monarquía absoluta en Europa. El desarrollo del Estado Moderno en los siglos xvi, xvii, xviii. *Fasciculos para la comprensión de la ciencia , las humanidades y la tecnología*, 1-99. Obtenido de <http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0043413.pdf>

Lassalle, F. (1931). *¿Qué es una constitución?* Madrid: Editorial CENIT.

Obtenido de

<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2284/5.pdf>

Lasteros Tristán, M. V. (2017). *Acreditación de la concertación en el delito de colusión y la dificultad para construir la imputación necesaria*. Puno:

Universidad Nacional del Altiplano-Puno. Obtenido de

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/6143/Lasteros_Tristan_Magda_Violeta.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lazo Morales, L. (2017). *Gestión de Bienes Patrimoniales y Presentación de la Información Financiera en la Municipalidad Distrital de Colcabamba Tayacaja-Año 2016*. Huancayo: Universidad Peruana los Andes. Obtenido de

http://repositorio.upla.edu.pe/bitstream/handle/UPLA/209/T037_42695358_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ley de Recursos Hídricos. (30 de Marzo de 2009). Obtenido de Ley de Recursos Hídricos: <http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Ley-N%C2%B0-29338.pdf>

Ley de Recursos Hídricos. (23 de Marzo de 2009). *Ley de Recursos Hídricos*. Lima, Perú. Obtenido de <http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Ley-N%C2%B0-29338.pdf>

Ley de Recursos Hídricos. (23 de Marzo de 2009). *Ley de Recursos Hídricos*. Lima, Perú. Obtenido de https://www.ana.gob.pe/sites/default/files/publication/files/ley_29338_0.pdf

Ley General de Servicios de Saneamiento LEY N° 26338. (22 de Julio de 1994).

Ley General de Servicios de Saneamiento LEY N° 26338. Lima. Obtenido de <https://www.otass.gob.pe/normativa/leyes/2014/795-ley-general-de-servicios-de-saneamiento/file.html>

Linebaugh, P. (2013). *El manifiesto de la Carta Magna, comunes y libertades para el pueblo.* Madrid: Traficantes de sueños. Obtenido de <https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/El%20Manifiesto%20de%20la%20Carta%20Magna-TdS.pdf>

Lopez Peña , E. L. (2016). *El interés público como concepto jurídico.* España: Universidad Da Coruña. Obtenido de <https://core.ac.uk/download/pdf/83115187.pdf>

Lopez Peña, E. L. (2016). *El interes público como concepto jurídico.* España: Universidad Da Coruña. Obtenido de <https://core.ac.uk/download/pdf/83115187.pdf>

Luchetti Rodríguez , A. B. (2009). Algunos alcances en la aplicación del principio de razonabilidad de las decisiones administrativas. *Revista de Derecho Administrativo*, 484-485. Obtenido de <file:///C:/Users/Welcome/Downloads/14044-Texto%20del%20art%C3%ADculo-55920-1-10-20151012.pdf>

Martínez Moscoso, F. A. (2015). *La prestación del servicio público de agua potable en el municipalismo ecuatoriano durante la revolución ciudadana (2007-2013).* Alicante: Universidad de Alicante. Obtenido de https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/83953/1/tesis_fernando_andres_martinez_moscoso.pdf

- Massini Correas, C. (2018). Interpretación jurídica y derecho natural. *Revista de Derecho*, 31-47. Obtenido de <https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/revistadederecho/article/view/1729/1716>
- Matías Camargo , S. R. (2014). Los servicios públicos como derechos fundamentales. *Derecho y Realidad*, 315-329. Obtenido de https://revistas.uptc.edu.co/index.php/derecho_realidad/article/download/4544/4242/
- Mayer Lux, L. (2007). El patrimonio del Estado como objeto de protección penal. *Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso*, 205-234. Obtenido de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rdpucv/n29/a06.pdf>
- Meini Méndez , I. F. (1996). Responsabilidad penal de las personas jurídicas y de sus órganos de gestión. Entre la dogmática y la política criminal. *IUS ET VERITAS*, 199-211. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15570/16020>
- Mendieta Pineda, L. M., & Parra Calixto, C. A. (2011). Eficacia, vigencia y positividad de la norma. *Derecho y realidad*, 235-245. Obtenido de <file:///C:/Users/Welcome/Downloads/4899-Texto%20del%20art%C3%ADculo-10966-1-10-20160707.pdf>
- Mendoza Flores, S. (2016). El servicio de provisión de agua potable y saneamiento como servicios esenciales. *Revista IUS ET VERITAS*, 370-381. Obtenido de <file:///C:/Users/Welcome/Downloads/16556-Texto%20del%20art%C3%ADculo-65823-1-10-20170407.pdf>

Ministerio de Justicia. (25 de setiembre de 2015). *Decreto legislativo que modifica la ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y la ley N° 30045, Ley de Modernización de los servicios de saneamiento*. Obtenido de Sistema Peruano de Información Jurídica: <http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Decreto-Legislativo-N%C2%B0-1240.pdf>

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2006). *Decreto Legislativo N° 635 CÓDIGO PENAL*. Lima: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Obtenido de http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPENAL.pdf

Ministerio de Justicia y Derechos humanos. (2016). *Decreto Legislativo N° 635 Código Penal*. Lima: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Obtenido de http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPENAL.pdf

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2019). *Constitución Política del Perú*. Lima: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Obtenido de https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/05/Constitucion-Politica-del-Peru-marzo-2019_WEB.pdf

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2016). *Decreto Legislativo N° 635 CÓDIGO PENAL*. Lima: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Obtenido de http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPENAL.pdf

Ministerio de Vivienda. (29 de Noviembre de 2005). Decreto Supremo 023-2005-VIVIENDA. *Aprueban el texto único ordenamod del Reglamento de la Ley General de servicios de saneamiento Ley N° 26338*. Lima, Perú, Perú: Ministerio de Vivienda. Obtenido de <http://repositorio.ana.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12543/228/ANA000044.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Mogrovejo, D. (2017). El compromiso de adecuar la ley a un tratado: coalición o colisión. *Foro Revista de Derecho*, 64-86. Obtenido de <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/foro/article/view/440/435>

Monsalvo, A. J. (1986). Poder Político y aparatos de Estado en la Castilla Bajomedieval. Consideraciones sobre su problemática. *Studia Historica. Historia Medieval*, 101-167. Recuperado el 9 de Enero de 2019, de http://revistas.usal.es/index.php/Studia_H_Historia_Medieval/article/view/4354/4369

Montoya Vivanco, Y. (2015). *Manual sobre delitos contra la administración pública*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú y Open Society Foundations. Obtenido de <https://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2016/04/Manual-sobre-Delitos-contra-la-Administraci%C3%B3n-P%C3%BAblica.pdf>

Montoya Vivanco, Y., Chanjan Documet, R., Novoa Curich, Y., Rodríguez Vásquez, J., & Quispe Farfán, F. (2013). *Manual de capacitación para operadores de justicia en delitos contra la administración pública*. Lima: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP). Obtenido de <https://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2013/07/Manual-de->

capacitaci%C3%B3n-para-operadores-de-justicia-en-delitos-contra-la-administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica.pdf

Muñoz Sánchez, M. T. (28 de Noviembre de 2017). *Ciudadanía y derechos humanos*. Obtenido de Universidad Intercontinental: <https://www.uic.mx/ciudadania-derechos-humanos/>

Naciones Unidas. (1973). *Informe de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano*. Estocolmo: Publicación de las naciones unidas. Obtenido de <https://www.dipublico.org/conferencias/mediohumano/A-CONF.48-14-REV.1.pdf>

Naciones Unidas. (2002). *Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales*. Ginebra: Comité de derechos económico, sociales y culturales. Obtenido de <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8789.pdf>

Naciones Unidas: Asamblea General. (2012). *Informe de la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque*. Nueva York: Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Obtenido de https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Situation_Report_75.pdf

Navares Gonzáles, S. G. (2011). La función de las cartas de intenciones en la interpretación de los contratos celebrados con la empresa. *Iustitia*, 215-241. Obtenido de [file:///C:/Users/Welcome/Downloads/Dialnet-LaFuncionDeLaCartaDeIntencionesEnLaInterpretacionD-5978961%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Welcome/Downloads/Dialnet-LaFuncionDeLaCartaDeIntencionesEnLaInterpretacionD-5978961%20(1).pdf)

Neira Hidalgo, G. (2014). El derecho a un ambiente sano como derecho humano: su protección en contexto de paz y conflictos armados. *Revista Virtual del Centro de Estudios de Derechos Humanos*, 54-80. Obtenido de https://derecho.usmp.edu.pe/cedh/revista/archivos/Revista001_CEDH.pdf

Nogueira Alcalá, H. (2003). *Teoría y dogmática de los derechos fundamentales*. México: Instituto de investigaciones jurídicas. Obtenido de https://www.usmp.edu.pe/derecho/3ciclo/derechos_humanos/Biblioteca%20virtual/Teoria%20y%20Dogmatica%20de%20los%20Derechos%20Fundamentales.pdf

Núñez Chavéz, W. J. (2018). *El derecho fundamental al agua dentro del marco del servicio público de agua potable en el Ecuador*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador. Obtenido de <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6190/1/T2619-MDE-Nu%c3%b1ez-El%20derecho.pdf>

Ochoa Cardich, C. (2013). El servicio en la constitución política peruana de 1993. *Pensamiento Constitucional*, 105-119. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/8950/9358>

ONU: Asamblea General. (16 de Diciembre de 1966). *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966*. Obtenido de Refworld: <https://www.refworld.org/es/docid/4c0f50bc2.html>

ONU: Asamblea General. (16 de Diciembre de 1966). *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966*. Obtenido de Refworld: <https://www.refworld.org/es/docid/4c0f50bc2.html>

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1973). *Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano*. Estocolmo: Naciones Unidas. Obtenido de <https://www.dipublico.org/conferencias/mediohumano/A-CONF.48-14-REV.1.pdf>

Organización de las Naciones Unidas. (2013). *Normas de conducta de la administración pública internacional*. Nueva York. Obtenido de <https://www.iaea.org/sites/default/files/19/09/standards-conduct-isc-sp.pdf>

Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura. (2013). *Afrontar la escasez de agua: Un marco de acción para la agricultura y la seguridad alimentaria*. Roma: FAO. Obtenido de <http://www.fao.org/3/a-i3015s.pdf>

Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. (2019). *Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos hídricos 2019: No dejar a nadie atrás*. Francia: UNESCO. Obtenido de <https://www.acnur.org/5c93e4c34.pdf>

Organización de los Estados Americanos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2009). *La democracia de ciudadanía: una agenda para la construcción de ciudadanía en América latina*. Estados Unidos:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Obtenido de <https://controlatugobierno.com/bibliografia/la-democracia-de-ciudadania-una-agenda-para-la-construccion-de-ciudadania-en-america-latina-pnud/>

Ortiz Sánchez, I. (2015). El Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la Autoridad Nacional del Agua. *Círculo de Derecho Administrativo*, 303-317. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/15183/15673>

Ortiz Sánchez, I., & Rado Córdova, J. (2019). Análisis de las principales modificaciones al reglamento general de supervisión y sanción de la SUNASS a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1272. *Revista de Derecho Administrativo*, 172-199. Obtenido de <file:///C:/Users/Welcome/Downloads/22170-Texto%20del%20art%C3%ADculo-87627-1-10-20200611.pdf>

Parlamento Boliviano. (7 de Febrero de 2009). *Constitución Política del Estado (CPE)*. Obtenido de Nueva Constitución Política del Estado: https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_bolivia.pdf

Pásara, L. (5 de Junio de 2020). *Lamula.pe*. Obtenido de Cuando la ley no tiene efectos en la realidad. Movimientos y actores sociales batallan por normas que luego no se aplican.: <https://luispasara.lamula.pe/2020/06/05/cuando-la-ley-no-tiene-efectos-en-la-realidad/luispasarapazos/>

Peces, B. G. (s.f.). DERECHOS FUNDAMENTALES.

Peña Cabrera, R. (1997). *Tratado de Derecho Penal. Estudio programático de la parte general*. Lima: Grijley E.I.R.L.

Pereira, L. V. (17 de Julio de 2019). *Lejister.com*. Obtenido de La responsabilidad penal de los funcionarios públicos en el ámbito de la Contratación Pública.

Tipos

penales:

https://ar.lejister.com/articulos.php?Hash=069851379f25c2b0019f6e90f4eff1ff&hash_t=2e1b7d62434ce6d2822eb66c8192fcad#indice_5

Perú21. (14 de Febrero de 2019). *Más de 7 millones de peruanos no cuentan con agua potable*. Obtenido de Perú21: <https://peru21.pe/peru/ccl-7-millones-peruanos-cuentan-agua-potable-nndc-459858-noticia/>

Peruano, D. O. (7 de Junio de 2012). Declaran fundada demanda de inconstitucionalidad en extremo referido a la modificación del artículo 384° del Código Penal a través de la Ley N° 29703 y en consecuencia nulo y carente de todo efecto la expresión "patrimonialmente". *El Peruano*, págs. 467942- 467947. Obtenido de <https://busquedas.elperuano.pe/download/url/declaran-fundada-demanda-de-inconstitucionalidad-en-extremo-sentencia-exp-n-00017-2011-pitc-797546-1>

Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. (2010). *Lucha contra la corrupción en el sector agua: Métodos, herramientas y buenas prácticas*.

New York: Dirección de Políticas de Desarrollo. Obtenido de <file:///C:/Users/House/Downloads/Corruption%2520in%2520water%2520sector%2520spanish.pdf>

Real Academia Española . (s.f.). *Real Academia Española*. Obtenido de Real Academia Española: <https://dle.rae.es/?w=ciudadano>

Real Academia Española. (2019). *Colusión*. En Diccionario de la Lengua Española (edición del tricentenario). Recuperado el 14 de Setiembre de 2020, de <https://dle.rae.es/colusi%C3%B3n>

Redacción LP. (22 de Mayo de 2020). *LP- Pasión por el Derecho*. Obtenido de Código Penal Peruano [realmente actualizado 2020]: <https://lpderecho.pe/codigo-penal-peruano-actualizado/>

República Oriental del Uruguay Poder Legislativo. (31 de Octubre de 2004). *Constitución de la República*. Obtenido de Constitución de la República: <https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/constitucion>

Rodríguez Collao, L. (2005). La función pública como objeto de tutela penal. *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, 325 - 340. Obtenido de file:///C:/Users/Welcome/Downloads/579-2205-1-PB%20(2).pdf

Rodríguez Pellecer, R. E. (2011). *Delitos contra la administración Pública*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar. Obtenido de <http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2011/07/01/Rodriguez-Rafael.pdf>

Rosas Torrico, M. A. (2013). Sanciones Penales en el sistema jurídico penal. *Revista jurídica virtual año III*, 1-10. Obtenido de [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/7620EFA610E504C205257D270070381F/\\$FILE/06ROSAS.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/7620EFA610E504C205257D270070381F/$FILE/06ROSAS.pdf)

Rubio, M., & Arce, E. (2019). *Teoría esencial del ordenamiento jurídico peruano*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. Obtenido

de

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/170299/Teoria_esencial_del_ordenamiento_juridico_peruano.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rueda López, N. (2011). La eficiencia y su importancia en el sector público. *eXtoikos*, 38-47. Obtenido de <file:///C:/Users/Welcome/Downloads/Dialnet-LaEficienciaYSuImportanciaEnElSectorPublico-4017945.pdf>

Salinas Siccha, R. (2009). *Delitos contra la administración pública*. Lima: Editorial Iustitia y Editorial Jurídica Grijley. Obtenido de <file:///C:/Users/Welcome/Downloads/DELITOS%20CONTRA%20LA%20ADMINISTRACION%20PUBLICA.pdf>

Salinas Siccha, R. (03 de Abril de 2018). Lineamientos y peculiaridades El delito de colusión en el sistema penal peruano. *Jurídica*, págs. 2-3. Obtenido de <https://elperuano.pe/suplementosflipping/juridica/682/web/pages.html#page/4>

Sancinetti, M. A. (1986). Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones publicas. *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, 877-889. Obtenido de pdf.php?id=ANU-P-1986-30087700891_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Negociaciones_incompatibles_con_el_ejercicio_de_funciones_publicas

Santos, C. (18 de Enero de 2005). *GRAIN*. Obtenido de Uruguay: Victoria en la lucha social: <https://www.grain.org/es/article/entries/1057-uruguay-victoria-en-la-lucha-social-por-el-agua>

Sanz Alonso, S. (2003). Indagando en los orígenes aristotélicos del pensamiento de Marx. *Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, 1-12. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18100821>

Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, 0048-2004-PI/TC (Tribunal Constitucional 1 de Abril de 2005). Obtenido de <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00048-2004-AI.pdf>

Sentencia del Tribunal Constitucional, 0090-2004-AA/TC (Tribunal Constitucional 5 de Julio de 2004). Obtenido de <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00090-2004-AA.html>

Setencia de casación, 661-2016 (Corte Suprema de Justicia de la República 11 de Julio de 2017). Obtenido de https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2018/10/Cas-661-2016-Piura-Legis.pe_.pdf

Silva Forné, D. (2005). Algunas consideraciones sobre el bien juridico tutelado en los delitos sobre la ordenacion del territorio en el nuevo codigo español. *Revista de la Facultad de Derecho*, 153-186. Obtenido de <file:///C:/Users/Welcome/Downloads/363-Texto%20del%20art%C3%ADculo-1184-1-10-20150919.pdf>

Solanes, M., & Gonzales Villarreal, F. (1999). *Los Principios de Dublin Reflejados en una evaluación comparativa de ordenamientos institucionales y legales para una gestión itegrada del agua*. Estocolmo: Global Water Partnership/Swedish International Development

Cooperation Agency. Obtenido de
<https://archivo.cepal.org/pdfs/Waterguide/Tac3s.pdf>

Suárez Sánchez, A. (2000). El sujeto activo en los delitos contra la administración pública. *Derecho Penal y Criminología*, 13-42. Obtenido de <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/1122/1064>

Suárez, S. (2013). Los derechos de la naturaleza y sus primeras demandas en el ámbito judicial. *Revista latinoamericana de Derecho y políticas ambientales*, 41-61.

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. (5 de Febrero de 2007). Reglamento de Calidad de Prestación de Servicios de Saneamiento. *El Peruano*, págs. 339108-339158. Obtenido de <https://sedapar.com.pe/wp-content/uploads/2017/04/Reglamento-de-Calidad-de-la-Prestaci%C3%B3n-de-Servicios-de-Saneamiento-Res.-011-2007-SUNASS-CD-1.pdf>

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. (1 de Junio de 2018). Resolución de Consejo Directivo que aprueba la modificación del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS. *El Peruano*, págs. 3-24. Obtenido de file:///C:/Users/Welcome/Downloads/re21_2018cd.pdf

Swedish Water House Policy Briefs . (2006). *La corrupción en el sector agua. Causas, consecuencias y posible reforma*. Obtenido de Swedish Water House Policy Briefs:

https://www.joinforwater.ngo/sites/default/files/library_assets/w_eco_e20_corrupcion_agua.pdf?popup=true

Szczaranski Vargas, F. L. (2012). Sobre la evolución del bien jurídico penal: un intento de saltar más allá de la propia sombra. *Política criminal*, 378 - 453. Obtenido de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/politcrim/v7n14/art05.pdf>

The World Bank. (9 de Abril de 2020). *Entendiendo la pobreza - Agua*. Obtenido de The World Bank: <https://www.worldbank.org/en/topic/water/overview#1>

Tórtora Aravena, H. (2010). Las limitaciones a los derechos fundamentales. *Estudios Constitucionales*, 167-200. Obtenido de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/estconst/v8n2/art07.pdf>

Transparency Internacional the global coalition against corruption. (2008). *Informe global de la corrupción 2008 Corrupción en el sector agua*. Cambridge: Cambridge University Press. Obtenido de <https://gestionssostenibledelagua.files.wordpress.com/2010/12/informe-global-de-la-corrupcion-2008-sector-agua.pdf>

Trejos Robert, S., & Fallas Barrantes, J. E. (2018). *La Teoría del bien jurídico como un límite al topos discursivo de la seguridad ciudadana*. San José: Universidad de Costa Rica. Obtenido de <https://ijj.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2018/11/12-Sergio-Trejos-Robert-y-Jorge-Enrique-Fallas-Barrantes-Tesis-completa.pdf>

Tribunal Constitucional del Perú. (2015). *Compendio Normativo*. Lima: Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú. Obtenido de

https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/publicacion/Compendio_Normativo.pdf

Urquiza Olachea, J. (1998). El Bien Jurídico. *Cathedra - Espíritu del Derecho*.

Obtenido de

https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/cathedra/1998_n3/el_bi_jur.htm

Valdes Cobos, A. (2018). La problemática del agua en el contexto de las ciencias sociales y las ciencias ambientales. *Puntocunorte*, 88-120. Obtenido de

<http://www.cunorte.udg.mx/puntocunorte/sites/default/files/Revista%206.%20Arti%CC%81culo%203.pdf>

Vásquez chiquilín , M. E. (2016). *"El oro no brilla para todos" El impacto de las actividades de minera Yanacocha S.R.L. sobre los derechos humanos en Cajamarca*.

Cajamarca: GRUFIDES. Obtenido de

<https://www.gfbv.ch/wp-content/uploads/informe-apa-el-oro-no-brilla-para-todos.pdf>

Vega Crespo, E. (2010). *Interpretación de las normas tributarias en el Ecuador*.

Cuenca: Universidad de Cuenca. Obtenido de

<https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2674/1/tm4394.pdf>

Vega Luna, E. (09 de Junio de 2015). *¿Por qué hay obras de agua y saneamiento paralizadas? Esta situación afecta tus derechos*. Obtenido de Blog de la

Defensoría del Pueblo: <https://www.defensoria.gob.pe/blog/obras-de-agua-paralizadas/>

Vega Luna, E. E., Rojas Medrano, J. C., Elías Ayay, L. Y., Koechlin Costa, J. G., & Solórzono Salleres, X. D. (2018). *El círculo de la corrupción en los*

gobiernos regionales. Los casos de Cusco, Ayacucho, Moquegua, Piura y Madre de Dios. Lima: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Obtenido de file:///C:/Users/Welcome/Downloads/El%20circulo%20de%20la%20corrupcion%20en%20los%20gobiernos%20regionales%20UARM-KAS.pdf

Villegas Bernaola, P. (2019). *Tratamiento dogmático y jurisprudencial del bien jurídico afectado en el delito de tráfico de influencias simulado en el Perú.* Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Obtenido de http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/17007/VILLEGAS_BERNAOLA_PERCY.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Villegas Paiva, E. A. (2010). Los bienes jurídicos colectivos en el Derecho Penal. Consideraciones sobre el fundamento y validez de la protección penal de los intereses macrosociales. 1-27. Obtenido de file:///C:/Users/Welcome/Downloads/fulltext_stamped.pdf

Villegas Paiva, E. (s.f.). Los bienes jurídicos colectivos en el Derecho Penal. Consideraciones sobre el fundamento y validez de la protección penal de los intereses macrosociales. Obtenido de http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20091207_03.pdf

Wolfgang Sarlet, I. (2019). *La eficacia de los derechos fundamentales - Una teoría general desde la perspectiva constitucional.* Lima: Palestra. Obtenido de <https://drive.google.com/file/d/1pIrDUjuogeIdxbfmxEZdNF48KWwyNdSE/view>

Zambrano Olivera, E. (2009). Algunos apuntes sobre la Fase de Actos Preparatorios en las Contrataciones del Estado. *Círculo de Derecho Administrativo*, 155-163. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/14018/14640>

Zegarra Valdivia, D. (2012). Del servicio público a los servicios de interés general: La evolución del service public en el sistema jurídico. *Círculo de Dercho Administrativo*, 13-43. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/13487/14114>

ANEXOS

1.- Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



TESIS

“Ampliación del bien jurídico del delito de Colusión como garantía del derecho fundamental al agua potable”

CUESTIONARIO DE ENCUESTA

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

I. Variable Independiente

1. Afirmación: Para el tipo penal de Colusión, el sentido del bien jurídico tal cual lo indica la doctrina es el normal y correcto funcionamiento de la administración pública (modalidad simple) y el patrimonio estatal (modalidad agravada).

- a) De acuerdo
- b) En Desacuerdo
- c) No opina

2. Afirmación: Resulta ser insuficiente el bien jurídico protegido en el delito de Colusión, ya que debe de abarcar otros bienes de vital importancia como el agua potable. La mayoría de inversiones que se realizan para la ejecución de proyectos de obras de agua potable son menoscabadas por prácticas corruptas siendo en el escenario de las contrataciones públicas afectando directamente a la población en sus derechos fundamentales.

- a) De acuerdo
- b) En desacuerdo
- c) No opina

3. Afirmación: Se debe especificar en el tipo penal que la sanción será mayor cuando se atente contra los recursos destinados para obras de servicio de agua potable, debido a que este servicio es considerado como un derecho básico de la sociedad.

- a) De acuerdo
- b) En desacuerdo
- c) No opina

II. Variable dependiente.

4. Afirmación: El agua potable es un bien común que posibilita el conjunto de condiciones aptas para obtener la plena suficiencia de vida en sociedad. La calidad de vida de la población depende del acceso al servicio de agua potable para impedir y reducir las enfermedades relacionadas con dicho servicio.

- a) De acuerdo
- b) En desacuerdo
- c) No opina

5. Afirmación: La normativa y sanciones relacionadas al agua tanto como recurso natural, como bien jurídico y como derecho fundamental y constitucional, son insuficientes para garantizar el acceso del servicio básico, siendo la corrupción la que incrementa esta brecha, menoscabando las inversiones que podrían utilizarse para extender los servicios a la población.

- a) De acuerdo
- b) En desacuerdo
- c) No opina

6. Afirmación: El bien jurídico protegido en el delito de Colusión debe ampliarse a otros bienes jurídicos como el agua potable, ya que la entrega de este servicio público básico busca satisfacer las necesidades y condiciones mínimas que los ciudadanos necesitan para su desarrollo. Por este motivo, el uso eficiente e imparcial de los recursos destinados a obras de agua potable es necesario para hacer posible el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

- a) De acuerdo
- b) En desacuerdo
- c) No opina

2.- Respuesta a la solicitud de información al Poder Judicial.



"Año del Bicentenario del Perú: 200 de años de Independencia"
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE
Presidencia

Chiclayo, 16 de febrero de 2021.

Oficio N.º 390-2021-P-CSJLA/PJ.

Señor (a):

Abg. PATRICIA DEL PILAR CUEVA SAMPÉN.

Administradora del Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

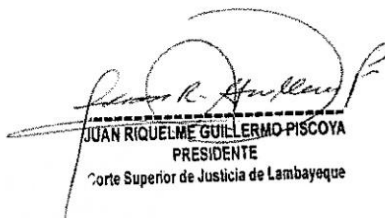
Presente.-

Asunto: Apoyo para trabajo de investigación.

Me dirijo a Usted para remitir el proveído de la fecha, a través del cual se autorizó a la bachiller Lucila Raquel Yampufé Espinoza, acceder a la información que servirá para el desarrollo del proyecto de tesis denominado "La ampliación del bien jurídico protegido en el delito de Colusión como garantía del derecho fundamental al agua potable"; a fin de que conforme a sus atribuciones y en lo que corresponda, atienda directamente lo solicitado, sin afectar sus actividades laborales propias a su función; debiendo dar cuenta a esta Presidencia de lo accionado.

Sin otro particular, me despido de Usted.

Atentamente,-



JUAN RIQUELME GUILLERMO-PISCOYA
PRESIDENTE
Corte Superior de Justicia de Lambayeque




Av. José Leonardo Ortiz N° 155 C.C. Chiclayo – Teléfonos: 074-481640 Anexo 22362
presidenciacsjla@pj.gob.pe

Asunto: Apoyo para trabajo de investigación.

Chiclayo, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno.-

DADO CUENTA con el documento cursado por la ciudadana Lucila Raquel Yampufé Espinoza, a través del cual solicita se brinde información sobre la cantidad y los números de expedientes de casos de colusión sentenciados entre el año 2018 al 2020, y 10 sentencias por delitos de colusión, con la única finalidad de sustentar su trabajo de investigación denominado "La ampliación del bien jurídico protegido en el delito de Colusión como garantía del derecho fundamental al agua potable"; así también, adjunta la Resolución N.º 191-2019-UI-FDCP-UNPRG, de 18 de noviembre de 2019, expedido por el Jefe de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, que acredita la veracidad de la investigación que motiva la información requerida: estando a lo expuesto, así como, teniéndose en cuenta la situación de pandemia en la que nos encontramos, se dispone: **i) AUTORIZAR** a Lucila Raquel Yampufé Espinoza y solo con fines académicos, acceder a la información para el desarrollo de su investigación, de forma virtual, previa coordinación con la Abogada Patricia del Pilar Cueva Sampén, Administradora del Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. **ii) PONER EN CONOCIMIENTO** a la Administradora del Módulo precitado, a fin de que conforme a sus atribuciones y en lo que corresponda, atienda directamente lo solicitado, dando cuenta a esta Presidencia de lo accionado, sin afectar sus actividades laborales propias a su función. **iii) NOTIFIQUESE** vía web al correo electrónico *pcnuevas@pj.gob.pe* y *hucyames.20@gmail.com* . -


JUAN RIQUELME GUILLERMO PISCOYA
PRESIDENTE
Corte Superior de Justicia de Lambayeque



Av. José Leonardo Ortiz N° 155 C.C. Chiclayo – Teléfonos: 074-481640 Anexo 22256/22362
presidenciacsjla@pj.gob.pe